

Gaceta Parlamentaria
Sesión Ordinaria No. 92
febrero 22, 2024

Apartado Uno

6 Iniciativas

3 Dictámenes con Proyecto de Decreto

1 Dictámenes con Proyecto de Resolución

2 Puntos de Acuerdo

Gaceta Parlamentaria



Directiva

Sesión
Ordinaria No. 92
febrero 22, 2024
apartado uno

Iniciativas

A 12 días de febrero de 2024, San Luis Potosí, S.L.P.

**CIUDADANAS Y CIUDADANOS DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA
SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.**

P r e s e n t e s.

Con fundamento en lo que disponen los artículos 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; el 130 y el 131 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de nuestro Estado; y 61, 62, 65 y 66 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, **José Antonio Lorca Valle, Diputado Local en la Sexagésima Tercera Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional**, me permito elevar a la distinguida consideración de esta Asamblea, la presente **Iniciativa de con Proyecto de Decreto que busca EXPEDIR nueva Ley del Registro de Agentes Inmobiliarios del Estado de San Luis Potosí, derogando también la actualmente vigente.**

Sustentada en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El estado de San Luis Potosí, sobre todo en su Zona Metropolitana, ha entrado en una marcada dinámica de crecimiento demográfico y económico en los últimos años, lo que ha traído como consecuencia natural el aumento de demanda por espacios habitacionales.

El mercado de los bienes raíces en San Luis Potosí, ha experimentado cambios cuantitativos y cualitativos; como, por ejemplo, el aumento de precios y el surgimiento de desarrollos habitacionales en nuevos lugares. En esta nueva dinámica, las personas especializadas en las transacciones de bienes raíces juegan un rol de la mayor importancia, sobre todo al considerar que las operaciones que éstos especialistas gestionan, comprometen el patrimonio de los ciudadanos.

A ese respecto, se han vertido diversos señalamientos sobre los problemas relacionados con el registro de agentes y asesores inmobiliarios, a pesar de que en nuestro estado se trata de una materia regulada por la Ley y sus consiguientes Reglamentos.

Entre las observaciones podemos ver el bajo porcentaje de profesionales inmobiliarios registrados y con todos sus requisitos en orden, las personas que

asumen funciones de asesores inmobiliarios sin cumplir con los requisitos de Ley, y los fraudes. Todo ello contribuye a generar condiciones de incertidumbre para los ciudadanos, en un mercado inmobiliario que se encuentra bajo presión.

En este contexto, el área de Mejora Regulatoria de la Secretaría de Desarrollo Económico del gobierno del estado, tuvo a bien acercarse con el propósito de llamar la atención hacia varias problemáticas que se presentan en lo referente a los agentes y asesores inmobiliarios en nuestro estado, así como para realizar propuestas legislativas que, viniendo del organismo aplicador de la ley, están enfocadas a solucionar las problemáticas identificadas que afectan a los pobladores del estado.

Tales propuestas, al igual que otras propias, conformaron esta iniciativa, que tiene como propósito expedir una nueva Ley del Registro de Agentes Inmobiliarios del Estado de San Luis Potosí, ya que, aunque se toma de base a la Ley vigente que cuenta con dieciocho numerales, se plantea adicionarle a esta normativa la cantidad de trece artículos, y reformar algunos otros, a la vez que modificar la numeración de todos los dispositivos. Por ello, se propone expedir una nueva Ley, que resulte más completa y que atienda las problemáticas que se presentan en nuestro estado.

En atención a lo anterior, y en seguimiento a las propuestas de la citada dependencia de mejora regulatoria, se proponen los siguientes cambios a la legislación.

Primero se busca modificar la vigencia de las licencias de año calendario, a año fiscal, y mejorar las condiciones de renovación de las mismas, puesto que la actuación de corredores inmobiliarios con licencias vencidas es un fenómeno recurrente que impacta en la baja proporción de quienes cumplen la ley en este respecto, es uno de los problemas detectados.

Así, se propone en el artículo 13 de esta iniciativa que la inscripción en el Registro, y el otorgamiento de licencia, así como la renovación, se realizará por cada año fiscal, desde el primer día hábil del mes de enero hasta el 31 de marzo de cada año, y que la Secretaría de Desarrollo Económico del estado, deberá implementar programas de descuento progresivo en el costo de dicho trámite, en virtud de la fecha de realización del mismo, conformando un esquema similar al pago del impuesto predial.

En segundo lugar, se plantea incorporar a las atribuciones de la SEDECO, la firma de Convenios de Colaboración, con el objetivo de poder establecer que la credencial de asesor inmobiliario sea un requisito para los actos ante Notario.

También, a este respecto, se busca incorporar a nuevas autoridades auxiliares, adicionando un nuevo Capítulo II al Título Segundo de la Ley, siendo éstas: la Dirección del Notariado del Estado de San Luis Potosí, el Instituto Registral y Catastral del Estado de San Luis Potosí, y el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de San Luis Potosí, organismos claves en la implementación de nuevas reglas capaces de favorecer la adecuada credencialización de los asesores inmobiliarios.

La Dirección del Notariado, realizaría las acciones necesarias para que, en términos de los convenios y acuerdos vigentes con la Secretaría, los Notarios Públicos verifiquen, antes de formalizar cualquier acto jurídico de carácter inmobiliario, que el agente o asesor inmobiliario que en su caso intervenga en dichas operaciones cuente con la inscripción en el Registro y la licencia a que se refiere la presente Ley.

El Instituto Registral y Catastral del Estado de San Luis Potosí, por su parte, y en términos de los convenios y acuerdos vigentes con la Secretaría, establecería programas e instrumentos, con la finalidad de verificar la inscripción al Registro de parte de quienes funjan como Agentes y Asesores Inmobiliarios, así como de realizar acciones administrativas de apoyo a las gestiones realizadas por los Agentes y Asesores inscritos, y promover el cumplimiento de la Ley.

Y el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de San Luis Potosí, será el responsable de realizar los cursos derivados del programa de capacitación, actualización y profesionalización en materia de operaciones inmobiliarias.

Otro de los problemas detectados es la rotación de asesores, es decir cuando los asesores inmobiliarios que son empleados de personas morales, se dan de baja, para que después otros nuevos tomen su lugar, tal dinámica, que resulta común en este mercado laboral, origina fenómenos como la falta de renovación de credenciales, causando una gran incertidumbre jurídica.

Por tanto, se trata de buscar un esquema efectivo para la credencialización, que incluso, en el caso que se refiere, se pueda bajar el costo que se tiene que cubrir. De tal forma, en el artículo 12 de esta iniciativa, se propone que, al momento de realizarse las inscripciones y la expedición de licencias, se deberá manifestar por parte de la persona moral, para su registro, el número de asesores autorizados por cada persona moral. Esto para que, en caso de presentarse rotación de asesores autorizados por una persona moral, se solicitaría la baja del asesor y se sustituirá con el actual, de forma que en el supuesto de que no exista variación en el número de inscripciones, por motivo de rotación, se cubrirá únicamente el costo de la

expedición de la licencia, lo que resulta menor al costo de inscripción al Registro, favoreciendo mejores condiciones para la credencialización.

Finalmente, se sugirió adicionar a la Ley aspectos relacionados a la tecnología, que se implementan en el sector inmobiliario. Por ello, se establece la posibilidad de incorporar las oficinas virtuales a la Ley, como una forma de operación de las personas morales.

En el mismo sentido, se propone incorporar todo lo aplicable a la firma electrónica, misma que tendría validez para cualquier acto relacionado a la materia, bajo los términos de la Ley para la Regularización de la Firma Electrónica Avanzada del Estado de San Luis Potosí.

Por otro lado, esta iniciativa para una nueva ley, también incluye adiciones propias, producto sobre todo de un estudio de Derecho comparado, puesto que la norma de nuestro estado, requiere actualización en diversos aspectos.

Primeramente, se requiere regular aspectos de la capacitación, debido a que, como ya se vio, se pretende fortalecer mediante la participación del ICAT, además de que San Luis Potosí, muestra un rezago legislativo en ese aspecto al compararse con otras entidades federativas, por lo que hasta el momento contamos solamente con una regulación ineficiente, que deja afuera aspectos clave que es necesario considerar.

Por esa razón, se adiciona un nuevo Capítulo al Título Segundo de la Ley, donde se establece que la capacitación se considera como todos aquellos medios debidamente certificados, por los cuales los asesores inmobiliarios, adquieran, desarrollen, completen, perfeccionen y actualicen sus conocimientos en materia de servicios inmobiliarios, y que además tendría carácter obligatorio, y se realizaría en los términos de la norma.

Se busca también establecer elementos mínimos para ella que cubran lo esencial a conocer para las gestiones inmobiliarias:

- ⇒ Nociones básicas de desarrollo urbano;
- ⇒ El régimen jurídico de la propiedad;
- ⇒ El Registro público de la propiedad;
- ⇒ Trámites administrativos y gestión;
- ⇒ Obligaciones fiscales relacionadas con servicios inmobiliarios, transmisión y uso de la propiedad;
- ⇒ Derechos y obligaciones de Agentes y Asesores Inmobiliarios, y
- ⇒ Debidamente prestación de servicio en materia inmobiliaria.

Finalmente, es pertinente establecer que la Secretaría supervise que la capacitación que lleven a cabo los Asesores Inmobiliarios cumpla con el contenido mínimo, y pueda establecer elementos específicos de capacitación, como de carácter de obligatorio.

Por otro lado, se buscan crear nuevas obligaciones para los Agentes y Asesores Inmobiliarios, orientadas a los usuarios de los servicios, y pensados como formas de protección contra fraudes, como son las siguientes:

- ⇒ Exhibir ante el usuario de los servicios Inmobiliarios su acreditación vigente;
- ⇒ Informar, con absoluta veracidad, al prospecto de comprador sobre: valor y cualidades del bien inmueble, cualquier vicio o condición especial que éste presente, y las características de la operación inmobiliaria relacionada al inmueble;
- ⇒ Respetar en todo momento las condiciones contratadas legalmente con el Usuario;
- ⇒ Advertir, orientar y explicar a los propietarios, compradores y a quienes pretenden realizar una operación sobre las consecuencias de los actos que se realicen en la operación inmobiliaria;
- ⇒ Permitir que alguna de las partes interesadas en la operación, realicen consultas con profesionales en leyes, ingeniería, arquitectura, Notarios, u otros asesores o agentes inmobiliarios.

Así mismo, se plantea reconocer en la Ley, en el artículo diecisiete, los derechos para los asesores inmobiliarios:

- ⇒ Recibir una justa compensación por sus labores;
- ⇒ Acceder a los recursos de capacitación disponibles, tanto en el ámbito público como el privado, en cualquier área relacionada a la materia inmobiliaria;
- ⇒ Mediante el cumplimiento de esta Ley y los Reglamentos aplicables, ostentarse como asesor inmobiliario, y
- ⇒ Aquellos que se establezcan la presente ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Por último, se pretende habilitar expresamente a las personas extranjeras para poder dedicarse a las operaciones inmobiliarias, tal y como ocurre en otras entidades, debiendo para ello, cumplir tanto con la Ley en comento, como con los requisitos exigidos por las leyes y autoridades en materia migratoria para acreditar su situación regular en el país y llevar a cabo actividades remuneradas.

Con estas reformas, incluidas en el cuerpo de una nueva ley, se pretende mejorar las condiciones de licencia de las personas dedicadas a las operaciones inmobiliarias en nuestro estado, con la finalidad de aumentar la certeza jurídica para la ciudadanía que recurre a los servicios en este ramo, y fortalecer el cumplimiento del estado de Derecho, mediante la mejora de las regulaciones, para responder a las nuevas dinámicas del mercado de bienes raíces en nuestro estado. Con base en lo anterior, se propone el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se EXPIDE nueva Ley del Registro de Agentes Inmobiliarios del Estado de San Luis Potosí, para quedar como sigue:

LEY DEL REGISTRO DE AGENTES INMOBILIARIOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO

ARTÍCULO 1º. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de interés social; y su observancia es obligatoria para todas las personas que se dediquen a la comercialización inmobiliaria como agentes o como asesores inmobiliarios, que cuenten con la licencia para ejercer operaciones inmobiliarias; así como a todas aquellas personas cuya fuente principal de ingresos sea alguna de las operaciones inmobiliarias contempladas en esta Ley, haciendo de éstas su ocupación ordinaria y preponderante; este ordenamiento tiene por objeto regular la función de los agentes y asesores inmobiliarios dentro del Estado de San Luis Potosí, así como la creación y establecimiento de las normas y principios del Registro Estatal de agentes Inmobiliarios.

Las personas físicas que realicen operaciones inmobiliarias en bienes que sean de su propiedad, no estarán obligadas en los términos de la presente Ley. Esta exención aplica también a las personas morales cuya actividad comercial preponderante no sean operaciones inmobiliarias.

ARTICULO 2º. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

I. Agentes Inmobiliarios: las personas físicas que realicen actividades de intermediación o corretaje de operaciones inmobiliarias, con licencia expedida por la Secretaría; así como las personas morales que lleven a cabo dichas actividades y que se encuentren inscritas en el Registro;

II. Asesor Inmobiliario: persona física autorizada por un agente inmobiliario, debiendo, en cada caso, formalizar las condiciones de remuneración o contraprestación que se pacten entre ambos;

III. Bienes inmuebles: el suelo y las construcciones adheridas a éste;

IV. Constancia de autorización: documento en formato de identificación con fotografía, que las personas morales registradas que se dediquen a operaciones de índole mobiliaria, otorgan a los asesores inmobiliarios autorizados; debe incluir número de registro de persona moral, denominación de la misma, firma de autorización del titular, número de folio de expedición, así como nombre y fotografía del asesor.

V. Contrato: acuerdo de voluntades que crea o transmite derechos y obligaciones a las partes que lo suscriben, y

VI. Licencia: la autorización otorgada por la Secretaría a las personas físicas para realizar operaciones inmobiliarias en el Estado;

VII. Operaciones inmobiliarias: las relacionadas con la compraventa, arrendamiento, fideicomiso o cualquier otro contrato traslativo de dominio, o de uso o usufructo de bienes inmuebles, así como la administración, comercialización y consultoría sobre los mismos;

VIII. Registro: el Registro Estatal de Agentes Inmobiliarios, y

IX. Secretaría: la Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado.

ARTÍCULO 3º. Para efectos de esta Ley las actividades que componen las operaciones inmobiliarias, se definen de la siguiente forma:

I. Administración: las acciones y procesos relacionados con la gerencia de un inmueble, en renta o condominio;

II. Arrendamiento de inmueble: contrato por el cual las dos partes contratantes se obligan recíprocamente, una, a conceder el uso o goce temporal de una cosa; y la otra, a pagar por ese uso o goce un precio cierto;

III. Comercialización: las acciones y procesos relacionados con la intermediación para la compra, venta o arrendamiento de un inmueble;

IV. Compra venta: Contrato bilateral en donde uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho; y el otro a su vez se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero;

V. Consultoría: las actividades de asesoría especializadas que sirven de apoyo al resto de las operaciones inmobiliarias;

VI. Fideicomiso: acto jurídico por el cual una persona denominada fideicomitente destina uno o varios bienes a un fin lícito determinado, en beneficio de otra persona llamada fideicomisario, encomendando su realización a una institución bancaria llamada fiduciaria;

VII. Intermediación inmobiliaria: servicio prestado por profesionales de las operaciones inmobiliarias, para gestionar compraventa de inmuebles propiedad del contratante del servicio;

VIII. Promoción: las actividades relacionadas a la publicidad y propaganda para la venta o arrendamiento de inmuebles o sus servicios;

IX. Subarrendamiento: arrendamiento de un bien inmueble que, a su vez, se tiene arrendada a otra persona física o moral;

X. Traslado de dominio: transmisión de propiedad de un bien inmueble que origina pago de impuestos, por parte de la persona física o moral que los adquiere;

XI. Usufructo: derecho real y temporal de disfrutar de los bienes ajenos, y

XII. Valuación: las acciones y procesos relacionados con la valuación de los bienes inmuebles.

ARTICULO 4º. Se establece el Registro Estatal de Agentes Inmobiliarios, con el objeto de generar y mantener el acreditamiento e inscripción ante la Secretaría de los agentes inmobiliarios; el cual deberá estar disponible para su consulta por internet.

Para garantizar que el Registro Estatal de Agentes Inmobiliarios funcione de manera correcta, la Secretaría se auxiliará por un Comité de Vigilancia, mismo que será integrado por un Presidente, un Secretario, y tres vocales; en la forma y términos que establezca el Reglamento correspondiente.

El Comité de Vigilancia podrá invitar a participar en sus sesiones, con voz, pero sin voto, para la consulta y asesoría sobre asuntos específicos, a representantes de Colegios de: Ingenieros; Arquitectos; y Edificadores, así como a los representantes de Colegio o Asociación de Peritos valuadores de bienes inmuebles en la entidad, y/o representantes del Colegio de Notarios del Estado de San Luis Potosí.

ARTÍCULO 5º. La firma electrónica avanzada, tendrá validez para cualquier acto relacionado a la materia de esta Ley, bajo los términos de la Ley para la Regularización de la Firma Electrónica Avanzada del Estado de San Luis Potosí.

TÍTULO SEGUNDO DE LAS ATRIBUCIONES; INSCRIPCION DEL REGISTRO; LICENCIA Y OBLIGACIONES

Capítulo I De las Atribuciones

ARTICULO 6º. La aplicación e interpretación de la presente Ley corresponde a la Secretaría, quien para dicho efecto contará con las siguientes atribuciones:

- I. Recibir las solicitudes y, en su caso, otorgar la licencia respectiva e inscribirla en el Registro;**
- II. Verificar, mediante visitas de inspección y en los términos que establezca esta Ley, el cumplimiento de los requisitos previstos en la misma, para el otorgamiento y revalidación de las licencias de los agentes inmobiliarios;**
- III. Revalidar, con la periodicidad prevista en la presente Ley, las inscripciones en el Registro y las licencias de los agentes inmobiliarios;**
- IV. Formular, con la participación de los agentes inmobiliarios, y del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de San Luis Potosí, el programa de capacitación, actualización y profesionalización en materia de operaciones inmobiliarias, o su portafolio de evidencias;**
- V. Llevar actualizado el Registro en el que se deberán inscribir los agentes inmobiliarios, las licencias otorgadas y el nombre de su titular, así como las sanciones que se les impongan, en los términos de esta Ley;**

- VI. Aplicar las sanciones a quienes incumplan las disposiciones de esta Ley;**
- VII. Establecer y operar un sistema de quejas o denuncias para usuarios respecto de los agentes inmobiliarios, y las personas que se ostenten como tales sin serlo;**
- VIII. Vigilar también los derechos de los agentes inmobiliarios, y**
- IX. Establecer convenios de colaboración con otras autoridades, de cualquier nivel, con el propósito de cumplir con los objetivos de esta Ley.**

ARTICULO 7º. Cualquier persona podrá solicitar constancias e información contenidas en el Registro, el cual deberá estar disponible para su consulta pública en las oficinas de la Secretaría, y por internet.

Capítulo II

De las Autoridades Auxiliares

ARTICULO 8º. La Dirección del Notariado del Estado de San Luis Potosí, el Instituto Registral y Catastral del Estado de San Luis Potosí, y el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de San Luis Potosí, actuarán como autoridades auxiliares en relación con la aplicación de esta Ley, de conformidad con las atribuciones que les confiera la misma, con el Reglamento respectivo y con los convenios vigentes.

ARTICULO 9º. La Dirección del Notariado del Estado de San Luis Potosí realizará las acciones necesarias para que, en términos de los convenios y acuerdos vigentes con la Secretaría, los notarios públicos verifiquen, antes de formalizar cualquier acto jurídico de carácter inmobiliario, que el agente o asesor inmobiliario que en su caso intervenga en dichas operaciones cuente con la inscripción en el Registro y la licencia a que se refiere la presente Ley.

ARTICULO 10. El Instituto Registral y Catastral del Estado de San Luis Potosí, en términos de los convenios y acuerdos vigentes con la Secretaría, establecerá programas e instrumentos, con la finalidad de verificar la inscripción al Registro de parte de quienes funjan como Agentes y Asesores Inmobiliarios, así como de realizar acciones administrativas de apoyo a las gestiones

realizadas por los Agentes y Asesores inscritos, y promover el cumplimiento de la Ley.

ARTICULO 11. El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de San Luis Potosí, será el responsable de realizar los cursos derivados del programa de capacitación, actualización y profesionalización en materia de operaciones inmobiliarias.

Capítulo III

De la Inscripción en el Registro, y la Obtención de la Licencia de los Agentes Inmobiliarios

ARTICULO 12. Para obtener su inscripción en el Registro, las personas físicas o morales interesadas deberán presentar ante la Secretaría la solicitud correspondiente, y anexar los documentos e información siguiente:

I. Tratándose de personas morales:

- a) Precisar y acreditar la ubicación de su domicilio fiscal y, en su caso, de las sucursales, así como precisar si realiza operaciones con esquema de trabajo remoto, oficina virtual, u oficinas físicas.**
- b) Presentar constancia de registro ante la Procuraduría Federal del Consumidor, del contrato de adhesión, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de Protección al Consumidor.**
- c) Aceptar, expresamente, cumplir con los programas de capacitación y actualización en materia de operaciones inmobiliarias que se pongan en operación por la Secretaría y, en su caso, acreditar el cumplimiento de aquéllos que se establezcan con carácter obligatorio para los efectos de la revalidación de la inscripción.**
- d) Copia de la cédula de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes.**
- e) Copia del comprobante de pago de los derechos correspondientes.**
- f) Relación actualizada de los asesores inmobiliarios autorizados por dicha persona moral, que será integrada al Registro Estatal. Con los datos presentados en la relación señalada en el inciso f) de esta fracción, se realizarán las inscripciones y la expedición de licencias, manifestándose por parte de la persona moral, y registrándose, el número de asesores autorizados por cada persona moral.**

En caso de presentarse rotación de asesores autorizados por una persona moral, se solicitará la baja del asesor y se sustituirá con

el actual, en el supuesto de que no exista variación en el número de inscripciones, por motivo de rotación, se cubrirá únicamente el costo de la licencia.

II. Tratándose de personas físicas:

- a) Copia de identificación oficial vigente con fotografía.**
- b) Acreditar capacitación profesional y/o la certificación de conocimientos especializados y experiencia en operaciones de corretaje o intermediación inmobiliaria, por parte de alguna institución o de la autoridad competente o, en su defecto, presentar carta compromiso, debidamente firmada, para sujetarse a los programas de acreditación profesional en la materia.**
- c) Precisar y acreditar la ubicación de su domicilio fiscal, así como precisar si realiza operaciones con esquema de trabajo remoto, oficina virtual, u oficinas físicas.**
- d) Copia de la cédula de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes.**
- e) Presentar los documentos e información previstos en los incisos b) y c) de la fracción anterior.**
- f) Copia del comprobante de pago de los derechos correspondientes.**

ARTICULO 13. La inscripción en el Registro, y el otorgamiento de licencia, así como la renovación, se realizará por cada año fiscal, desde el primer día hábil del mes de enero hasta el 31 de marzo de cada año.

La Secretaría deberá implementar programas de descuento progresivo en el costo de dicho trámite, en virtud de la fecha de realización del mismo.

ARTICULO 14. En el caso de las personas físicas, una vez inscritas en el Registro, la Secretaría expedirá en forma simultánea la licencia respectiva. Sólo las personas físicas con la licencia emitida por la Secretaría para realizar operaciones inmobiliarias podrán ostentarse y anunciarse como “Agentes Inmobiliarios con Licencia Estatal”; en el caso de las personas morales se les denomina “Agentes Inmobiliarios con Registro”.

ARTICULO 15. En el caso de tratarse de personas extranjeras, además de cumplir con lo estipulado en esta Ley y otras

normativas aplicables, deberán, además, haber cumplido con los requisitos exigidos por las leyes y autoridades en materia migratoria para acreditar su situación migratoria regular en el país y llevar a cabo actividades remuneradas.

Capítulo IV
De los Derechos y Obligaciones de los Agentes y Asesores
Inmobiliarios

ARTICULO 16. Tanto los agentes, como los asesores inmobiliarios, tendrán las siguientes obligaciones:

- I. Tramitar ante la Secretaría su inscripción en el Registro;**
- II. Revalidar su inscripción en el Registro y, en su caso, la licencia respectiva, con la periodicidad que se previene en la presente Ley; presentar para este efecto, manifestación bajo protesta de decir verdad, que se mantiene idéntica la información originadora de la inscripción o del otorgamiento de la licencia o, en su caso, las modificaciones que hayan ocurrido;**
- III. Sujetarse a los programas permanentes de capacitación y actualización en materia de operaciones inmobiliarias. Esta obligación podrá ser eximida por la Secretaría cuando se cumpla con alguno de los siguientes supuestos:**
 - a) Acreditar su adiestramiento en la materia con constancias expedidas por instituciones competentes.**
 - b) Aprobar el examen que indique la Secretaría, para acreditar su adiestramiento en materia de operaciones inmobiliarias;**
- IV. Dar aviso por escrito a la Secretaría de cualquier modificación que afecte los datos contenidos en el Registro o, en su caso, en la licencia;**
- V. Permitir que se lleven a cabo las visitas de inspección que ordene la Secretaría, para verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y sus disposiciones reglamentarias;**
- VI. Conducirse con honestidad, respeto y ética profesional, así como proteger los intereses legales y financieros de sus clientes, respecto de las operaciones inmobiliarias en que intervengan;**
- VII. Omitir conducirse de manera que pongan a sus clientes en situaciones de inseguridad legal o financiera, en las operaciones inmobiliarias en las que los apoyen;**
- VIII. Excusarse de recibir pagos anticipados o depósitos en dinero por la prestación de sus servicios, o por los trámites propios de las operaciones inmobiliarias, cuando no puedan**

extender a cambio factura, recibo fiscal u otro documento legal que ampare el mismo, salvo tratándose de los pagos establecidos en el contrato de adhesión registrado;

IX. En el caso de las personas morales cuyo objeto social estipule la ejecución de operaciones de índole inmobiliaria, expedir el documento de constancia de autorización para sus asesores inmobiliarios autorizados;

X. En el caso de los asesores inmobiliarios autorizados por persona moral registrada, contar con el documento de constancia de autorización;

XI. Exhibir ante el usuario de los Servicios Inmobiliarios su acreditación vigente;

XII. Informar, con absoluta veracidad, al prospecto de comprador sobre: valor y cualidades del bien inmueble, cualquier vicio o condición especial que éste presente, y las características de la operación inmobiliaria relacionada al inmueble;

XIII. Respetar en todo momento las condiciones contratadas legalmente con el Usuario;

XIV. Advertir, orientar y explicar a los propietarios, compradores y a quienes pretenden realizar una operación sobre las consecuencias de los actos que se realicen en la operación inmobiliaria;

XV. Permitir que alguna de las partes interesadas en la operación, realicen consultas con profesionales en leyes, ingeniería, arquitectura, Notarios, u otros asesores o agentes inmobiliarios, y

XVI. Las demás que establezca esta Ley y su Reglamento.

ARTICULO 17. Los asesores inmobiliarios, tendrán los siguientes derechos:

I. Recibir una justa compensación por sus labores;

II. Acceder a los recursos de capacitación disponibles, tanto en el ámbito público como el privado, en cualquier área relacionada a la materia inmobiliaria;

III. Mediante el cumplimiento de esta Ley y los Reglamentos aplicables, ostentarse como asesor inmobiliario, y

IV. Aquellos que se establezcan la presente ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Capítulo V

De la capacitación

ARTICULO 18. La capacitación se considera como todos aquellos medios, debidamente certificados, por los cuales los asesores inmobiliarios, adquieren, desarrollan, completan, perfeccionan y actualizan sus conocimientos en materia de servicios inmobiliarios.

La capacitación para los asesores inmobiliarios tiene carácter obligatorio, y se realizará en los términos de esta Ley.

ARTICULO 19. La capacitación deberá cumplir con los siguientes elementos mínimos:

- I.** Nociones básicas de desarrollo urbano;
- II.** El régimen jurídico de la propiedad;
- III.** El Registro público de la propiedad;
- IV.** Trámites administrativos y gestión;
- V.** Obligaciones fiscales relacionadas con servicios inmobiliarios, transmisión y uso de la propiedad;
- VI.** Derechos y obligaciones de Agentes y Asesores Inmobiliarios, y
- VII.** Debida prestación de servicio en materia inmobiliaria.

ARTICULO 20. La Secretaría supervisará que la capacitación que lleven a cabo los Asesores Inmobiliarios, cumpla con el contenido mínimo, así mismo, podrá establecer elementos específicos de capacitación como de carácter de obligatorio.

TÍTULO TERCERO

DE LAS VISITAS DE INSPECCION, DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES, Y DE LOS RECURSOS

Capítulo I

De las Visitas de Inspección

ARTICULO 21. Todo acto de visita de inspección y vigilancia que lleve a cabo la Secretaría, a los agentes inmobiliarios, y a las personas que se ostenten como tales sin serlo, se sujetará a las siguientes formalidades:

- I.** Los actos de inspecciones, visitas y vigilancia deberán cumplirse en el lugar o lugares indicados en la orden expedida por escrito por la Secretaría, cuyo objeto será el estipulado en la

misma, mismo que no podrá ir más allá de la verificación del cumplimiento de los requisitos legales para operar en el Estado como profesional inmobiliario con licencia y para la inscripción en el Registro, así como del cumplimiento de las obligaciones de los agentes inmobiliarios que establecen la presente Ley y su Reglamento;

II. Si las personas físicas, o los representantes legales de las morales, en su caso, no se encontraran presentes en el lugar indicado para ello, se dejará citatorio a la persona que se encuentre, para que la persona que se pretende visitar espere a la hora determinada del día siguiente, con el objeto de efectuar la orden de visita que se trate y, en caso de inasistencia, se realizará con quien se encuentre en el lugar;

III. El o los inspectores de la Secretaría que se presenten deberán identificarse con credencial oficial expedida por la propia Secretaría, ante la o las personas con quien se actúa en la diligencia, haciéndolo constar para ello en el acta respectiva;

IV. A las personas que se le verifique deberán permitir el acceso a los inspectores de la Secretaría, al lugar objeto de la diligencia, así como proporcionar los datos e informes requeridos en términos de la presente Ley y su Reglamento;

V. Para el desarrollo de la visita, el requerido designará dos testigos con identificación oficial para que acrediten plena identificación y, a falta de éstos, el inspector lo hará en rebeldía, y hará constar tal situación en el acta respectiva;

VI. El o los inspectores harán entrega de una copia del acta levantada, donde se asienten los hechos derivados de la actuación, y

VII. No afectará la validez de lo actuado en la diligencia, la negativa de firmar el acta por los agentes inmobiliarios, o la persona con quien se haya realizado la diligencia, así como los testigos que presenciaron las actuaciones, lo que deberá hacerse constar en la misma. El acta es válida con la firma de uno solo de los inspectores, aún cuando actúen dos o más. En el acto de la diligencia, los requeridos podrán formular las observaciones que consideren pertinentes y aportar las pruebas necesarias; o dentro del término de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de la conclusión de la diligencia que corresponda; transcurrido el plazo anterior, dentro de los cinco días hábiles siguientes a éste, y considerando las circunstancias que hubiesen concurrido y las pruebas aportadas, en su caso, la autoridad dictará la resolución que proceda en los términos previstos en el Título III,

capítulo II de esta Ley, debidamente fundada y motivada; notificándola personalmente al interesado.

ARTICULO 22. El acta que al efecto se levante deberá ser circunstanciada y para ello contendrá:

- I. Nombre, cargo de quien emitió la orden de visita e inspección, número de oficio en que se contiene, y firma autógrafa del servidor público de la Secretaría que la emite;**
- II. Nombre, denominación o razón social del sujeto de la diligencia y, en su caso, con quien se entendió la misma;**
- III. Lugar, hora, día, mes y año en que se haya realizado la actuación;**
- IV. Nombre y domicilio de las personas que hayan testificado los hechos de las actuaciones;**
- V. Nombre y firma del, o los inspectores que practicaron la diligencia;**
- VI. Objeto de la diligencia;**
- VII. Hechos u omisiones que hubieren conocido los inspectores;**
- VIII. En su caso, las expresiones de la o las personas a que se refiere la parte final del artículo anterior de esta Ley, y**
- IX. Apartado de lectura y cierre del acta, en la que se haga constar que se dio lectura y explicó el alcance y contenido del acta a los sujetos de la diligencia; además, de que los agentes inmobiliarios disponen de cinco días hábiles para formular observaciones y presentar pruebas relacionadas con el contenido de la diligencia de que se trate.**

ARTICULO 23. Cuando los inspectores de la Secretaría, por motivo del ejercicio de sus atribuciones, tengan conocimiento de una infracción a las disposiciones de la presente Ley o su Reglamento, asentarán dichas circunstancias en las actas respectivas para conocimiento de la Secretaría, a fin de que se apliquen las sanciones establecidas en esta Ley.

ARTICULO 24. Los inspectores de la Secretaría tienen estrictamente prohibido recibir gratificación, dádivas o sobornos, con el propósito de omitir o alterar la información de las actuaciones de las diligencias; en caso de comprobarse situación de este tipo, serán destituidos del cargo con sujeción a las disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

Capítulo II

De las Infracciones y Sanciones

ARTICULO 25. El incumplimiento de las disposiciones de esta Ley y de su Reglamento, por parte de los agentes inmobiliarios, dará lugar a las siguientes sanciones:

- I. Amonestación;**
- II. Apercibimiento;**
- III. Multa de hasta mil días de la unidad de medida y actualización;**
- IV. Suspensión de la licencia respectiva, e inscripción en el Registro, en su caso, hasta por treinta días hábiles, y**
- V. Cancelación de la licencia respectiva, y de la inscripción en el Registro.**

ARTÍCULO 26. A las personas físicas o morales que se ostenten como agentes o asesores inmobiliarios, o que cuya fuente principal de ingresos sea alguna de las operaciones inmobiliarias contempladas en esta Ley, haciendo de éstas su ocupación ordinaria y preponderante sin contar con registro, licencia o autorización de persona moral registrada, vigentes en los términos del artículo 8º de la presente Ley, se les aplicará sanción consistente en multa desde mil hasta tres mil veces la unidad de medida y actualización.

En el caso de las personas morales que autoricen a personas físicas para ostentarse como asesores inmobiliarios, sin contar con registro vigente en los términos del artículo 8º de esta Ley, se les aplicará sanción consistente en multa desde mil quinientos hasta cuatro mil veces la unidad de medida y actualización.

ARTICULO 27. Los agentes inmobiliarios que durante la vigencia de su registro o licencia hubieran sido condenados por algún delito de carácter patrimonial, serán sancionados con la cancelación del registro y, en su caso, revocación de la licencia respectiva; y no podrán solicitar de nueva cuenta su registro o licencia sino hasta después de tres años contados a partir de la fecha de imposición de la sanción respectiva.

ARTICULO 28. Al imponer una sanción, la Secretaría, auxiliada por el Comité, fundará y motivará su resolución considerando lo siguiente:

- I.** Los daños y perjuicios que se hayan ocasionado o pudieren ocasionarse;
- II.** La gravedad de la infracción;
- III.** El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción, y
- IV.** La reincidencia del infractor.

ARTICULO 29. Las sanciones consistentes en multa que imponga la Secretaría, se harán efectivas por la Secretaría de Finanzas, mediante el procedimiento administrativo de ejecución en los términos previstos por el Código Fiscal del Estado. Los recursos que se obtengan por concepto de éstas, se destinarán a los programas que impulse la Secretaría, relacionados con los agentes inmobiliarios.

ARTICULO 30. En todo caso, las infracciones y sanciones que cometan los agentes inmobiliarios, se asentarán en el Registro.

Capítulo III Del Recurso de Inconformidad

7

ARTÍCULO 31. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de la Secretaría podrán, a su elección, interponer el recurso de inconformidad previsto en el Código Procesal Administrativo para el Estado de San Luis Potosí.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO. Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado “Plan de San Luis”.

SEGUNDO. El titular del Ejecutivo del Estado emitirá el Reglamento de la presente Ley, dentro de los noventa días naturales siguientes a partir de la entrada en vigor de la misma.

TERCERO. Se abroga la vigente Ley del Registro de Agentes Inmobiliarios del Estado de San Luis Potosí.

CUARTO. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan lo dispuesto en la presente Ley.

ATENTAMENTE

JOSÉ ANTONIO LORCA VALLE
Diputado Local
Movimiento de Regeneración Nacional

CIUDADANAS Y CIUDADANOS DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA LXIII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

Presentes.

Con fundamento en lo que disponen los artículos, 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 130, y 131 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de nuestro Estado; y 61, 62, y 65 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de nuestro Estado, **Emma Idalia Saldaña Guerrero**, me permito presentar a la digna consideración de esta Honorable Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto que plantea **REFORMAR el artículo 8º en su fracción XXXIV; y ADICIONAR al mismo artículo 8º la fracción XXXV, por lo que actual XXXV pasa a ser fracción XXXVI de la Ley de Turismo del Estado de San Luis Potosí.**

Con el propósito de:

Precisar que la Secretaría de Turismo deberá promover, entre los prestadores de servicios turísticos en el estado, la adhesión a los programas nacionales vigentes en materia de certificación, para mejorar sus condiciones de competencia en el mercado.

Lo anterior se justifica con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En San Luis Potosí, la actividad turística está experimentando un crecimiento, que impacta a la economía en su conjunto. Como muestra de ello, de acuerdo a los datos publicados en el año 2023, en el 2022, poco más de dos millones de turistas visitaron el estado, y la derrama económica en ese mismo periodo anual fue de tres mil trescientos setenta y siete millones de pesos.

La Tasa Media Anual de Crecimiento de Turistas de nuestro estado, del 2015 al 2021 fue de 1.9%, lo que la ubica en el séptimo lugar a nivel nacional, superando ampliamente la media nacional que fue de menos 1.8%. Esa cifra refleja que San Luis Potosí, no solamente ha podido asimilar el impacto de la pandemia en el sector turístico, sino que se encuentra retomando la tendencia de crecimiento, creando oportunidades en el mercado laboral.

Se debe advertir que estas tendencias, además de señalar los logros que se han hecho, perfilan el potencial que nuestro estado tiene todavía en materia turística. Por ejemplo, las cifras del 2021 de ocupación hotelera, ubican a San Luis Potosí en el lugar 17 a nivel nacional, con un 35.4%, ubicándose debajo de la media nacional que fue de 38.9%; no obstante, se superó en este aspecto, a otros destinos turísticos en el país como la Ciudad de México y Guanajuato, que presentaron respectivamente 34.1% y 24.9%.¹

¹ Información de: <https://slp.gob.mx/sectur/pdf/Estadisticas/2022CSTurismoSLP.pdf.gob.mx>

El dato de ocupación hotelera es porcentual y relativo a la oferta existente en cada estado, además de que, en el año 2021, se advertían los efectos de la pandemia; sin embargo, indica que hay espacio para mejorar la captación turística y obtener una mayor presencia en el mercado nacional.

En ese aspecto, hay que mencionar el valor de las certificaciones turísticas, que son reconocimientos o distintivos otorgados por actores privados o públicos, relacionados a aspectos específicos en materia turística, como calidad en el servicio o sustentabilidad. Dichos reconocimientos ayudan a fortalecer la imagen de los prestadores de servicios turísticos que los posean, en el conjunto de ofertas turísticas, para atraer más visitantes, ya que garantizan criterios y niveles de calidad, que se traducen en buenas prácticas que impactan en la experiencia de los visitantes.

Es por eso que el Gobierno Federal de nuestro país, cuenta con un programa denominado, "Sistema Nacional de Certificación Turística", operado por la Secretaría de Turismo, destinado a prestadores de servicios turísticos en México. El Sistema integra diversas certificaciones y reconocimientos nacionales e internacionales, aplicables a esta industria, y permite que los prestadores de servicios accedan a ellos con mayor facilidad.

Incluso, el Sistema cuenta con un instrumento denominado Distintivo Nacional de Calidad Turística, que se define como:

"Un reconocimiento integral que otorga la Secretaría de Turismo a los prestadores de servicios turísticos y destinos turísticos que obtienen un determinado nivel de calidad al adherirse al Sistema Nacional de Calidad Turística y, que les permite establecer procesos de mejora continua."

El distintivo tiene una vigencia de dos años, es renovable, y puede ser un apoyo para la mejora de las prácticas de los prestadores de servicio, así como un elemento que ayude a mejorar su imagen en el mercado turístico.

También hay que resaltar que tanto la adhesión al Sistema Nacional de Certificación Turística como el Distintivo, no tienen costo alguno para los prestadores de servicio y ofrecen varias ventajas.²

Sin duda, estos son instrumentos con potencial para el apoyo a las actividades turísticas, y que pueden traer beneficios al turismo en nuestro estado, por lo que deben aprovecharse en el proceso de crecimiento de este rubro.

Por eso se propone en esta iniciativa que la Secretaría de Turismo tenga entre sus atribuciones, promover, entre los prestadores de servicios turísticos en el estado, la adhesión a los programas nacionales vigentes en materia de certificación turística, para darle difusión a estos

²Información de: <https://www.gob.mx/sectur/articulos/preguntas-frecuentes-relacionadas-al-tramite-solicitud-de-renovacion-del-distintivo-nacional-de-calidad-turistica#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20el%20Sistema%20Nacional%20de%20Certificaci%C3%B3n%20Tur%C3%ADstica%3F,el%20otorgamiento%20del%20Distintivo%20Nacional%20de%20Calidad%20Tur%C3%ADstica>.

instrumentos y que se puedan aprovechar por parte de los prestadores de servicios turísticos, para volverse más competitivos.

Los prestadores de servicios turísticos de nuestro estado, además de inversiones de capital, deben verse también como una fuente de ingresos para numerosas familias potosinas, por ejemplo; desde trabajadores de franquicias hoteleras en entornos urbanos, hasta artesanos en las zonas rurales turísticas de nuestro estado.

Los instrumentos que ayuden a aumentar el número de visitantes, son un apoyo para todas estas actividades, al fomentar la derrama económica.

Con base en los motivos expuestos, presento a consideración de este honorable Pleno, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se REFORMA el artículo 8º en su fracción XXXIV; y se ADICIONA al mismo artículo 8º la fracción XXXV, por lo que actual XXXV pasa a ser fracción XXXVI de la Ley de Turismo del Estado de San Luis Potosí, para quedar como sigue:

LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

TÍTULO SEGUNDO DE LAS AUTORIDADES; Y DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS AUTORIDADES

Capítulo II De las Atribuciones de las Autoridades

ARTICULO 8º. ...

I a XXXIII. ...

XXXIV. ...;

XXXV. Promover, entre los prestadores de servicios turísticos, la adhesión a los programas nacionales vigentes en materia de certificación turística, y

XXXVI. ...

TRANSITORIOS

PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado "Plan de San Luis".

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan lo dispuesto en el presente Decreto.

ATENTAMENTE

Emma Idalia Saldaña Guerrero
Diputada Local

**CC. DIPUTADAS SECRETARIAS
DE LA LXIII LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTES.**

La suscrita, Diputada **Liliana Guadalupe Flores Almazán**, en ejercicio de la atribución que me confiere el artículo 61 de la Constitución Política del Estado, 130 y 131 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y de conformidad con lo dispuesto en los numerales 61, 62, y 65 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, me permito presentar a la consideración de esta Honorable Soberanía la presente **iniciativa que adiciona el Capítulo IV que contiene los artículos 19 bis, 19 ter, 19 quater, 19 quinque 19 sexties al Título Tercero de la Ley de Turismo del Estado de San Luis Potosí**, ello con base en la siguiente:

“EXPOSICION DE MOTIVOS

Desde hace aproximadamente dos décadas, inició en México la modalidad de hospedaje para viajeros y turistas, a través de plataformas y aplicaciones digitales con la que propietarios de bienes inmuebles amueblados ubicados generalmente en sitios turísticos o cercanos a éstos, ofrecen rentarlos temporalmente, en hospedajes de corta estancia, en general por lapsos no mayores a treinta días, a precios atractivos, cuestión que constituye en sí una especie de hospedaje por tiempo determinado, modalidad que, sin encontrarse regulada, en los más recientes años ha tenido un auge muy importante en el país y en nuestro Estado, con más de 62 mil inmuebles disponibles en territorio mexicano y con un crecimiento de 189% por ciento en su uso, durante 2016, en el orden nacional.

Se ha observado que esta clase de plataformas, incluidos sus usuarios y usuarias, en la práctica ofrece de manera indirecta a grandes propietarios la posibilidad de esquivar la normativa del sector turístico e incluso la normativa fiscal, no obstante que se entiende que ese no sea su objetivo primordial al tratarse solo de intermediarias, generando sin embargo una competencia desleal con el sector hotelero, en diferentes medidas y por distintas razones.

En España y Nueva York, por ejemplo, la regulación prohíbe que se renten alojamientos completos, y el propietario debe vivir en la casa o departamento; en Francia y Alemania hay periodos máximos de dos a tres meses para los inquilinos, para evitar que las personas extranjeras se queden por periodos mayores.

Sin embargo, es un hecho la existencia, lo importante es encontrar la forma de equilibrar la oferta y la demanda sin bloquearla o limitarla por completo, en virtud de que se trata de una actividad económica de la que dependen miles de familias que reciben ingresos a través de la plataforma, y que genera además actividad en el comercio y servicios locales. Recientemente la diputada federal Patricia Báez, declaró que en la Ciudad de México existen unas 23 mil familias que dependen de ese ingreso.

Por lo anterior, la intervención del Estado, a quien le corresponde establecer normas que garanticen principios de igualdad y de equidad en cada rama económica, es fundamental, dada la escasa normativa para las fórmulas de negocio tan recientes. En algunas ciudades europeas en esta materia de plataformas y aplicaciones digitales, de alquiler y hospedaje temporal, se ha regulado esta prestación de servicio, para mantener los precios de los alojamientos y evitar el fenómeno de la gentrificación, es decir, la remodelación y mejora de los edificios y la urbanización de zonas consideradas deprimidas o deterioradas, para aumentar sus rentas de forma significativa, lo que eleva la plusvalía de las zonas y por tanto los costos de las rentas y el costo de nivel de vida, haciendo con ello que las familias de menores recursos, sean expulsadas por tales circunstancias y se vean obligadas a desplazarse hacia otras zonas en las urbes.

A partir del 1 de junio, la Ciudad de México se convirtió en la primera región en América Latina en regular los servicios en esta materia de plataformas y aplicaciones digitales al cobrar un impuesto por hospedaje de 3% en los servicios que la compañía ofrece, como resultado de un convenio firmado entre el gobierno capitalino y la plataforma digital de alojamiento compartido, a inicios de mayo, donde se acordó que los recursos obtenidos por el pago de este impuesto, que le permitirá a la empresa cumplir con sus obligaciones fiscales, serán remitidos a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, generando así un beneficio sustancial para la ciudad. Las autoridades capitalinas señalaron que este acuerdo es, también, una respuesta a la exigencia hecha por los hoteleros de que el gobierno no tolerará una actividad informal, sin regulación alguna. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, además del impuesto al hospedaje de 3%, los integrantes del gremio en todo el país deben también pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), de 16%, y el Impuesto Sobre la Renta (ISR), de 35 por ciento, aunado a otros gastos de tramitología.

Por esta razón, la referida organización pidió que el gobierno federal y los gobiernos estatales del país regulen el funcionamiento de todas las plataformas digitales alojamiento compartido, no solo AirB&B, para competir “en igualdad de condiciones”.

En Quintana Roo, las personas, sean físicas o morales, que brindan hospedaje a través de plataformas digitales deberán cumplir con su obligación de pagar el Impuesto al Hospedaje, que a partir de este 2023 es del 6%. Asimismo, entró en vigor el nuevo registro de plataformas digitales de alojamiento tipo AirB&B, Vacation rentals Wimdu.com, Booking que hace obligatorio inscribirse en un padrón. De acuerdo con el reglamento emitido por el Servicio de Administración Tributaria de ese Estado, todos los anfitriones deberán contar, a su vez, con una licencia de funcionamiento para seguir operando y cumplir con las obligaciones fiscales. Igualmente todas las personas, sean físicas o morales, que brindan hospedaje a través de plataformas digitales cumplirá con su obligación de pagar el Impuesto al Hospedaje, que a partir de este 2023 es del 6%. Actualmente la única plataforma que tiene un convenio con el gobierno de Quintana Roo es AirB&B, pero la ley marca a todas las plataformas. A finales del año pasado, las rentas vacacionales en Quintana Roo sumaban ya más de

35,000 unidades de alojamiento. A nivel nacional este segmento de alojamiento suma ya más de 280,000 unidades, lo que supera ya las cifras de 2019 antes de la pandemia.

Es por ello que esta iniciativa, independientemente de las obligaciones fiscales que se establezcan para este sector, busca regular a quienes ofrecen alojamiento en el Estado a través de estas plataformas, a fin de establecer normas que garanticen una competencia equitativa en materia de hospedaje, entre quienes obtienen ganancias a través de ofrecer sus inmuebles para alojamiento a través de estas plataformas, y quienes lo hacen a través de hoteles, moteles, hostales y negocios con toda la regulación a la que se encuentran sujetos, evitando con ello prácticas irregulares y competencia desleal entre quienes ofrecen servicios de hospedaje en el sector turístico.

Conforme a lo anterior, nos permitimos elevar a la consideración de esta Asamblea Legislativa el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO: Se adiciona el Capítulo IV que contiene los artículos 19 bis, 19 ter, 19 quater, 19 quingue 19 sexties al Título Tercero de la Ley de Turismo del Estado de San Luis Potosí, para quedar como sigue:

CAPÍTULO X REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE A TRAVÉS DE AIR BNB Y OTRAS PLATAFORMAS

ARTÍCULO 19 bis. Las personas físicas y jurídicas propietarias de inmuebles, que los ofrezcan para alojamiento u hospedaje así como, los prestadores de servicios turísticos en la modalidad de hospedaje ante la Secretaría de Turismo, la cual habrá de llevar el mención.

La Secretaría realizará los convenios con las diversas aplicaciones, plataformas digitales o similares el registro ante la Secretaría de Turismo.

ARTÍCULO 19 ter. La Secretaría deberá llevar un Registro de personas físicas o morales propietarias de inmuebles que se arrendan con fines de alojamiento u hospedaje de a través de plataformas, y aplicaciones digitales o por anuncios directos en medios de comunicación.

El referido Registro deberá contener:

- I. El nombre y RFC del propietario;
- II. Documento con el que se acredita la propiedad del inmueble;

- III. Domicilio en que se ubica;
- IV. Número de habitaciones y servicios con que cuenta la vivienda;
- V. Plataforma o medio en el que se anuncia;
- VI. En su caso, las condiciones a que está sujeto el inmueble en caso de pertenecer a un régimen de condominios;
- VII. Autorización de la Dirección Protección Civil;
- VIII. Reglas mínimas de uso del inmueble que deberá acatar el arrendatario.

ARTÍCULO 19 quater. Las casas y departamentos que se anuncien en la plataforma y estén sujetos a régimen condominal, deberán indicar en la publicidad del inmueble, las condiciones y restricciones a que se encuentra sujeto el inmueble, tales como horas en las que no se permiten ruidos fuertes, admisión o no de mascotas, protocolos de entrada y salida, reglas para uso de áreas comunes, entre otras, mismas que deberán ser aceptadas expresamente por el arrendador.

ARTÍCULO 19 quinque. Para registrarse ante la Secretaría, se deberán presentar los siguientes documentos:

- I. Identificación oficial de la persona propietaria;
- II. Copia certificada de la Escritura pública del inmueble;
- III. Domicilio del inmueble;
- IV. Descripción del número de habitaciones y servicios con que cuenta el inmueble;
- V. Reglamento del Condominio si el inmueble se encuentra sujeto a régimen condominal;
- VI. RFC del propietario y constancia de situación fiscal;
- VII. Constancia de la Coordinación de Protección Civil de que el inmueble cumple con las condiciones de seguridad correspondientes;
- VIII. Reglas mínimas de uso del inmueble

ARTÍCULO 19 sexties. Las personas físicas y jurídicas que ofrezcan servicios de alojamiento a través de aplicaciones. Plataformas digitales en el Estado, de conformidad con la legislación federal y local aplicable

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado "Plan de San Luis".

SEGUNDO. Se concede un término de 90 noventa días a la Secretaría para implementar en Registro a que se refiere este Decreto, y 90 días posteriores a dicha implementación a quienes en calidad de propietarios anfitriones, hagan uso de la plataformas digitales, promocionando inmuebles que se encuentren en el Estado, para inscribirse en el referido Registro.

TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

ATENTAMENTE

DIP. LILIANA GUADALUPE FLORES ALMAZÁN

**CC. DIPUTADAS SECRETARIAS DE LA DIRECTIVA DE LA LXIII LEGISLATURA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
PRESENTES. -**

Diputadas y Diputados, Rubén Guajardo Barrera, Edmundo Azael Torrescano Medina, Cecilia Senllace Ochoa Limón, Lidia Nallely Vargas Hernández, René Oyarvide Ibarra, Ma. Elena Ramírez Ramírez, Emma Idalia Saldaña Guerrero, María Claudia Tristán Alvarado, y Gabriela Martínez Lárraga, integrantes de la Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí; con fundamento en lo establecido en los artículos, 61, y 62 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 130, 131, y 133 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí; 61, 62, y 65 del Reglamento para el Gobierno Interior del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; nos permitimos someter a consideración de esta Soberanía, iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se declara Recinto Oficial Provisional del Honorable Congreso del Estado, el Teatro de la Paz, sito en Calle Villerías No. 205, Centro Histórico, San Luis Potosí, S.L.P., para celebrar Sesión Solemne, al tenor de lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 5º de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí, dispone:

“ARTICULO 5º. El Congreso del Estado reside en la Ciudad de San Luis Potosí, Capital del Estado, y debe tener su propio recinto.

El Congreso podrá sesionar en la Capital del Estado en otro recinto distinto del habitual, cuando así lo requiera la celebración de sesiones solemnes o cuando se den circunstancias extraordinarias; o bien, en otra ciudad de la Entidad, cuando así lo acuerde el pleno del Congreso del Estado, para lo cual, el lugar seleccionado deberá ser declarado recinto oficial, por el voto de cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes.

...

El Congreso celebrará Sesión Solemne, preferentemente, en algún municipio del interior del Estado para conmemorar la instalación del Primer Congreso de San Luis Potosí.”

(Énfasis añadido)

El Teatro de la Paz de la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, es uno de los cuatro teatros principales del país. El teatro es catalogado como monumento histórico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para su preservación.

Fue construido durante el porfiriato entre 1889 y 1894, inaugurándose el 4 de diciembre de este último año. El edificio fue erigido por el arquitecto José Noriega con influencias francesas y de estilo neoclásico, con su fachada en cantera rosa. Su cúpula fue mandada y hecha desde París, Francia a petición del presidente Porfirio Díaz. El interior de este teatro ha sido remodelado dos veces entre 1944 y 1949 por el arquitecto Francisco Cossío.

En este teatro de gran relevancia se presentan distintos eventos, como lo son: obras de teatro, ópera, música, danza, espectáculos infantiles, conferencias e informes de gobierno.

El próximo 21 de abril de 2024 se cumplirán 200 años de la instalación del Primer Congreso Constituyente de San Luis Potosí, data histórica de la mayor relevancia, porque esa fecha conmemora el nacimiento del Poder Legislativo en el Estado.

El historiador potosino, Sergio Cañedo abunda que, en 1824 con motivo de la sanción del Acta Constitutiva de la Federación y de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, surgió formalmente el Estado de San Luis Potosí, a la vez que se establecieron los tres poderes y se llevó a cabo la instalación del primer Congreso Constituyente Potosino.

Con el juramento del Acta Constitutiva se dejaba atrás la figura de provincia y surgía la del Estado Libre y Soberano, sin embargo, para que esto se formalizara se requerían la elección de los nuevos diputados y el establecimiento del primer Congreso Constituyente del Estado que tendría como principal tarea la redacción de una constitución particular.

Conformaron esa honorable Asamblea como legisladores propietarios los señores: Pedro de Ocampo, José María Guillén, Rafael Pérez Maldonado, José Manuel Ortiz de Zárate, José Sotero de la Hoyuela, José Miguel Barragán, Mariano Escandón, José María Núñez de la Torre, José Ignacio Soria, José Antonio Frontaura, Francisco Miguel de Aguirre, Manuel María Gorriño y Arduengo, y José Pulgar. Y como legisladores suplentes los señores: Francisco Antonio de los Reyes, Diego de Bear y Mier, Alejandro Serratón, José Ignacio López Portillo, y José Eufrasio Ramos.

La mañana del día 21 de abril, los 18 diputados tomaron posesión de su nuevo cargo en medio de un gran ambiente de fiesta, esperanza y felicidad. Miembros de los diferentes segmentos sociales de la época se dieron cita en la plaza principal y en las afueras de las casas consistoriales para presenciar el establecimiento de la Primera Legislatura Constituyente, comerciantes, religiosos, militares, músicos, artesanos y extranjeros estuvieron atentos del advenimiento de una forma de gobierno desconocida por la mayoría de ellos pero que en cierta medida era una nueva forma de sentirse representados. Tal acontecimiento había sido anunciado por medio de un bando desde los días previos, en donde se convocaba a la población para que adornara sus casas y participara en las actividades que se realizarían.

En la sesión de instalación del 21 de abril de 1824 vale la pena apuntar que la primera legislatura se ubicó en el inmueble que en aquellos años se identificaba como casas consistoriales, mismo que ahora es sede del Poder Ejecutivo y es conocido comúnmente como Palacio de Gobierno.

Ese mismo día, el Congreso sancionó su primer decreto que tenía como objetivo la instalación del Congreso Constituyente; radicación de los otros poderes, tratamiento que debe dárseles y garantía concedida a los habitantes del Estado. El preámbulo a este decreto versaba de la siguiente manera: “El Honorable Congreso Constituyente del Estado de San Luis Potosí, soberano de sí mismo, libre, federado e independiente se ha servido declarar y decreta.”

Este primer decreto contaba con nueve artículos. El 5º especificaba que “el ex-jefe superior político, que fue últimamente de este Estado, cuando era provincia, queda provisionalmente encargado del poder ejecutivo, con el nombre de gobernador, hasta que se proceda al de propietario que se ha de nombrar.” Así el Congreso encomendó provisionalmente el Poder Ejecutivo con la denominación de Gobernador, al jefe político de la entidad, Don Ildefonso Díaz de León, primero en la historia de San Luis Potosí.

Debemos darle el reconocimiento al “Bicentenario del Congreso Constituyente del Estado de San Luis Potosí” es importante por varias razones. En primer lugar, el Congreso Constituyente de San Luis Potosí fue un evento histórico clave en la construcción del Estado y la consolidación del sistema político del mismo; además tuvo como objetivo redactar la Primera Constitución del Estado de San Luis Potosí. Esta constitución sentó las bases para la organización política, social y económica del Estado, y sentó un precedente para el resto de los Estados de México, la cual fue promulgada el 16 de octubre del 1826.

Hace doscientos años, los representantes que conformaron el Congreso Constituyente, con sus ideas y propuestas, se reunieron para sentar las bases de nuestra identidad como potosinos, inscribieron las bases de un gobierno democrático y participativo, garantizando los derechos fundamentales y estableciendo los principios de igualdad y justicia que aún nos rigen; lo que, sin duda, da pie a recuperar memorias de los sucesos que han constituido verdaderos parteaguas para nuestra Entidad.

En esas páginas de historia institucional del Congreso Potosino, han destacado memorables y preclaros exponentes como Ponciano Arriaga Leija, y Manuel José Othón, solo por mencionar a dos de ellos.

El bicentenario del Congreso Constituyente de San Luis Potosí nos brinda la oportunidad de mirar hacia atrás y reconocer nuestros logros, pero también nos invita a mirar hacia el futuro con esperanza y determinación. Sigamos construyendo una sociedad en la que los principios de igualdad, justicia y libertad sean una realidad para todos los potosinos.

Aprovechemos esta conmemoración para fortalecer nuestro compromiso con los valores democráticos y recordar que el verdadero progreso se alcanza cuando trabajamos juntos, dejando de lado nuestras diferencias y buscando el bienestar colectivo.

En este “2024, Año del Bicentenario del Congreso Constituyente del Estado de San Luis Potosí”, renovemos nuestra fe en la grandeza de nuestra tierra, en la fortaleza de nuestra historia y en el potencial de nuestro pueblo. Sigamos adelante, con la convicción de que podemos construir un futuro mejor para las generaciones venideras.

Es por lo anterior, que se propone lo siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Con fundamento en los artículos, 57 fracción XLVIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 5º, y 40 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí; 36, 37, 38, 44, 46, y 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; se declara Recinto Oficial Provisional del Honorable Congreso del Estado, el Teatro de la Paz, sito en Calle Villerías No. 205, Centro Histórico, San Luis Potosí, S.L.P., para celebrar Sesión Solemne que se llevará a cabo el veintidós de Abril de dos mil veinticuatro, en marco de la conmemoración del “2024, Año del Bicentenario del Congreso Constituyente del Estado de San Luis Potosí”.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado “Plan de San Luis”.

ATENTAMENTE

Diputado
Rubén Guajardo Barrera

Diputado
Edmundo Azael Torrescano Medina

Diputada
Cecilia Senllace Ochoa Limón

Diputada
Lidia Nallely Vargas Hernández

Diputado
René Oyarvide Ibarra

Diputada
Ma. Elena Ramírez Ramírez

Diputada
Emma Idalia Saldaña Guerrero

Diputada
María Claudia Tristán Alvarado

Diputada
Gabriela Martínez Lárraga

**CC. DIPUTADAS SECRETARIAS DE LA DIRECTIVA
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
PRESENTES.**

CECILIA SENLLACE OCHOA LIMÓN, DOLORES ELIZA GARCÍA ROMÁN, MARTHA PATRICIA ARADILLAS ARADILLAS, ROBERTO ULISES MENDOZA PADRÓN, EDGAR ALEJANDRO ANAYA ESCOBEDO, EMILIO EDUARDO BRIONES VALDEZ, y MIGUEL ÁNGEL SEGURA MÉNDEZ, diputadas y diputados integrantes del **Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México**, así como **RENÉ OYARVIDE IBARRA, CINTHIA VERÓNICA SEGOVIA COLUNGA, y SALVADOR ISAÍS RODRÍGUEZ**, diputada y diputados integrantes del **Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo**, de la LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, en ejercicio de la atribución que nos confieren los artículos, 61 de la Constitución Política del Estado; y 130 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la Entidad, sometemos a la consideración de esta representación de la soberanía del pueblo potosino, la presente iniciativa con proyecto de Decreto, que busca **REFORMAR**, los artículos, 78 en párrafo primero y en su párrafo tercero las fracciones I a XI, 79 Bis, 80 y 81; y **ADICIONAR** al artículo 78 párrafo tercero las fracciones X a XII, de la **Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado San Luis Potosí**, con sustento en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La actual configuración de los órganos internos de control encuentra su origen en la Reforma Constitucional de 2015 mediante la cual se creó el Sistema Nacional Anticorrupción, conformado para coordinar a actores sociales y autoridades de los distintos órdenes de gobierno, a efecto de prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción.

En el ánimo del Legislador por diseñar un mecanismo institucional para combatir efectivamente los actos de corrupción y fomentar el avance y progreso de estándares de buen gobierno, consideró que el enfoque del Sistema debía estar centrado en la prevención, de tal manera que, para cumplir dicho objetivo resultaba imperioso implementar y fortalecer los controles internos y externos para combatir todos aquellos actos de corrupción y en general, contrarios al buen gobierno.

En este orden, la reforma constitucional creo un Sistema conformado por un marco de coordinación institucional para la prevención, la detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como para la fiscalización y control de recursos públicos, teniendo como finalidad última, la mejora continua en la administración gubernamental, a través de la evaluación del desempeño del personal en el servicio público bajo el parámetro de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleo, cargo o comisión.

Así, con las leyes generales y locales sobre las bases de coordinación del Sistema y de la distribución de competencias respecto a las responsabilidades administrativas, a partir de la reforma de 2015 al artículo 109 de la Constitución de la República, la figura de los órganos internos de control se insertó al engranaje institucional como instrumento de control interno con el objeto expreso de prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, para sancionar aquéllas distintas a las que son competencia de los tribunales de justicia administrativa, revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos, así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la fiscalía especializada en combate a la corrupción.

Lo anterior fue ratificado y complementado en julio de 2016 a través de la promulgación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y de igual manera en el ámbito de San Luis Potosí, con la reforma constitucional a los artículos 124 y 125, así como con la promulgación de la Ley de Responsabilidad Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí en mayo de 2017, y particularmente con lo plasmado en los artículos 3° fracción XXII, 9°, 10, y 15 de esta última Ley.

En este sentido, el principal objeto de los órganos internos de control a partir de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y en consecuencia el del Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, es el de prevenir todos aquellos actos u omisiones en los que los servidores públicos que integran la institución puedan incurrir y que constituyan posibles faltas administrativas; y en segundo término, investigar, calificar y substanciar faltas administrativas, y en su caso resolver aquellas que hayan sido calificadas como no graves, según lo dispone la Ley de Responsabilidades.

En este contexto, y teniendo como referencia el Informe de Actividades del Ejercicio 2023, presentado por el Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, resulta oportuno contrastar el estado que guarda dicho Órgano Interno de Control en cuanto a su marco normativo específico de actuación y en el cual, encuentra sustento para desempeñar las acciones que le permitan dar cumplimiento efectivo a su objeto en el contexto descrito.

Ahora bien, de una revisión realizada al artículo 78 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de San Luis Potosí, que establece las atribuciones del Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se desprende que éstas no se encuentra armonizadas con las contenidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.

Asimismo se advierte que los artículos 80 y 81 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado relativos al Órgano Interno de Control, no guardan relación ni armonía respecto al objeto que se desprende del artículo 109 del Pacto Federal en materia de responsabilidades de los servidores públicos.

Destaca que de los artículos 78 al 81 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado, en ninguna de sus partes se detalla sobre la relación jerárquica de sus integrantes, ni sobre la forma y criterios bajo los cuales debe integrarse y funcionar el Órgano Interno de Control para el exacto cumplimiento de sus atribuciones, así como tampoco sobre el carácter de confianza de los cargos que al interior de éste se desempeñan.

Por otra parte, si bien la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí otorga a los órganos internos de control facultades para el desempeño de su función, la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado presenta anacronismo en relación con las altas responsabilidades que dicho órgano debe cumplir, pues al día de hoy la ley se inclina hacia la terea de la sanción de los servidores públicos, que es encargada a las autoridades investigadora y substanciadora.

El enfoque centrado en los procedimientos para sancionar a servidores públicos, no obstante que resulta una función legítima de los órganos internos de control, también resulta contrario al enfoque preventivo bajo el cual se creó el Sistema Nacional Anticorrupción; en este sentido, se advierte que las disposiciones que rigen la organización y funcionamiento del Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no acompañan el objetivo de avanzar en el cumplimiento del enfoque preventivo, enfoque bajo el cual primordialmente se permitiría el progreso efectivo hacia estándares de buen gobierno, esto es, la adecuada y eficiente función pública.

Aunado a lo anterior, destaca que el planteamiento normativo y orgánico bajo el cual se configura el Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se contrapone a un ejercicio eficiente, esto es así toda vez que se advierte que durante el ejercicio 2023 sólo se iniciaron 14 expedientes de investigación, de los cuales, sólo 1 dio lugar a la instauración del procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente; de igual forma, durante el mismo ejercicio, sólo se realizaron trabajos de substanciación en 3 expedientes, por lo que las acciones a cargo de las autoridades, investigadora, y substanciadora en 2023 fueron mínimas, debiéndose puntualizar que dichas autoridades fueron creadas exclusivamente para cumplir con dichos fines.

Lo anterior, permite plantear dos premisas: primera, dado el tamaño y número de personal que integra la Comisión Estatal de Derechos Humanos (90 personas según el informe de actividades), la probabilidad de presentación de quejas o inicios de investigación por faltas administrativas es baja y; segunda, para mejorar el efectivo cumplimiento del objeto del Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, resulta pertinente encontrar una alternativa que permita enfocar los recursos disponibles para reencausar el enfoque preventivo y correctivo de la Institución con el objeto de imprimir un impulso permanente en la mejora de la gestión pública, sin que esto signifique comprometer las garantías procesales de los servidores

públicos en caso de que se les finque un procedimiento por responsabilidad administrativa.

Otro de las circunstancias que permite agregar elementos y razones para considerar la pertinencia de la presente iniciativa de reforma, es el hecho de que al ser una unidad administrativa que tan solo se integra por 3 personas (1 titular, 1 autoridad investigadora y, 1 autoridad substanciadora), y dado que la facultad de designación de las autoridades, investigadora, y substanciadora recae en el Congreso del Estado, se han experimentado serias dificultades de procedimiento para designar o sustituir inmediatamente al personal en casos de excusas o recusaciones, o de ausencias justificadas, generándose la disfuncionalidad del órgano interno de control, además de que como se señaló en líneas precedentes, a dichas autoridades corresponde exclusivamente desempeñar las funciones propias de investigación y substanciación en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, lo que hace imposible que se les asignen funciones para el cumplimiento de otras tareas fundamentales en materia de control interno.

En este sentido, se considera oportuno y pertinente proponer la presente iniciativa de reforma que tiene como objetivo, actualizar y mejorar el marco normativo específico que rige el actuar del Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a fin de:

- 1) Reencausar los esfuerzos y recursos para la prevención de faltas de tipo administrativo y mejorar la gestión pública dentro de la Institución, lo cual constituye el ánimo principal bajo el cual se diseñaron los órganos internos de control a partir de la Reforma Constitucional realizada al artículo 109, en el año 2015;
- 2) Actualizar y armonizar las disposiciones normativas en materia de control interno, en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, y
- 3) Establecer parámetros orgánicos y operativos para el mejor funcionamiento del Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Para mejor conocimiento de las modificaciones propuestas, las mismas se plasman en la tabla siguiente en contraposición del texto legal vigente:

**Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
del Estado de San Luis Potosí**

Texto vigente	Texto propuesto
ARTÍCULO 78. El Órgano Interno de Control es la instancia de la Comisión dotada de autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su funcionamiento y resoluciones; y contará con las atribuciones que le prescribe	ARTÍCULO 78. El Órgano Interno de Control es la unidad administrativa a cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno en la Comisión, y para actuar en términos de la Ley General de Responsabilidades

<p>la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de San Luis Potosí.</p> <p>En el ejercicio de sus atribuciones, el Órgano Interno de Control se abstendrá de interferir en el desempeño de las funciones y en el ejercicio de las atribuciones de defensa y promoción de los Derechos Humanos, de los servidores públicos de la Comisión.</p> <p>El Órgano Interno de Control contará además con las siguientes atribuciones:</p> <p>I. Planear, programar, organizar y coordinar el sistema de control y evaluación</p> <p>II. Fiscalizar el ingreso y gasto público, así como su congruencia con el presupuesto de egresos;</p> <p>III. Establecer la calendarización y las bases generales reglamentarias para la realización de auditorías internas e inspecciones;</p> <p>IV. Participar en la entrega recepción de las unidades administrativas;</p> <p>V. Dictaminar los estados financieros de la Dirección de Administración, y verificar que los informes sean remitidos en tiempo a la Comisión;</p> <p>VI. Participar en la elaboración y actualización de los inventarios generales de bienes muebles e inmuebles de la Comisión;</p> <p>VII. Informar oportunamente a los servidores públicos acerca de la obligación de manifestar sus bienes, verificando que tal declaración se presente en los términos de ley;</p>	<p>Administrativas, Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, y demás disposiciones legales que contemplen su intervención.</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>I. Emitir instrumentos normativos encaminados a fortalecer las condiciones estructurales de la Comisión en materia de Control Interno, a fin de prevenir y corregir actos u omisiones objeto de responsabilidad administrativa;</p> <p>II. Elaborar diagnósticos sobre aspectos específicos del ambiente de control de la Comisión, e implementar acciones para orientar el criterio que en situaciones específicas y relacionadas con el control interno deban observar las y los servidores públicos de la Comisión en el desempeño de su empleo cargo o comisión;</p> <p>III. Revisar el ingreso y egreso, manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos a cargo de la Comisión;</p> <p>IV. Establecer las bases generales reglamentarias para la realización de revisiones a que se refiere la fracción anterior;</p> <p>V. Participar como supervisor de los protocolos de entrega recepción de las y los servidores públicos de la Comisión;</p> <p>VI. Revisar que los estados financieros de la Comisión, cumplan con los criterios y disposiciones previstas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental;</p> <p>VII. Investigar y calificar actos u omisiones que puedan constituir faltas de tipo administrativas de acuerdo con la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; así como substanciar y resolver aquellas</p>
---	---

<p>VIII. Vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones sobre el registro, contabilidad, contratación y pago de personal; contratación de servicios, adquisiciones, obra, enajenaciones, arrendamientos, usos y conservación del patrimonio de la Comisión, en su caso, y</p> <p>IX. Rendir anualmente al Congreso del Estado en el mes de enero de cada año, un informe de labores que explique sobre el cumplimiento de las responsabilidades que le consigna esta Ley y demás disposiciones aplicables.</p>	<p>que no sean competencia del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa en términos de la misma Ley;</p> <p>VIII. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de las y los servidores públicos de la Comisión, que se desprenden del Sistema de Evaluación Patrimonial, de declaración de intereses, y constancias de presentación de declaración fiscal, así como aquellas que, en el ámbito de su competencia, contribuyan al cumplimiento del objeto del Sistema Estatal Anticorrupción;</p> <p>IX. Denunciar ante las autoridades competentes, hechos que pudieran ser constitutivos del delito corrupción y/o ejercicio inadecuado de la función pública relacionados con el actuar de las y los servidores públicos del Comisión;</p> <p>X. Presentar a la Presidencia de la Comisión, el anteproyecto de presupuesto del Órgano Interno de Control, el cual deberá integrar al ante proyecto de presupuesto de la Comisión;</p> <p>XI. Sin perjuicio de los mecanismos de coordinación establecidos en el Sistema Estatal Anticorrupción, celebrar convenios de coordinación o colaboración con instituciones públicas o privadas que tenga como finalidad el logro de su objeto, y</p> <p>XII. Emitir su plan estratégico y el plan anual de trabajo, y rendir anualmente al Congreso del Estado, durante el mes de enero de cada año, un informe de resultados relativo al año inmediato anterior.</p>
<p>ARTÍCULO 79 Bis. Las autoridades, Investigadora; y Substanciadora, integrantes del Órgano Interno de Control, serán electas, previa convocatoria pública, por el Congreso del Estado, con el voto de la mayoría de sus miembros. Durarán en su encargo cuatro años, y podrán ser reelectas por una sola vez; no podrán ser removidas sino por causa justificada, debidamente fundada y motivada cuando así lo determine el Pleno del Congreso por mayoría de sus integrantes, y el nuevo nombramiento será por el término que le reste a la autoridad sujeta a remoción.</p>	<p>ARTÍCULO 79 Bis. Para el cumplimiento de sus funciones, el Órgano Interno de Control contará con los recursos, áreas y personal que el presupuesto le autorice.</p> <p>Corresponde a la persona titular del Órgano Interno de Control designar a su personal, así como habilitar al personal que cumplirá con las funciones de autoridad, investigadora, y autoridad substanciadora.</p> <p>Para la designación del personal se establecerá un sistema que garantice la igualdad de oportunidades en el acceso a</p>

<p>El Congreso del Estado realizará la elección de las personas titulares de las autoridades, Investigadora; y Sustanciadora, bajo el principio de paridad de género. En razón de lo anterior, cada periodo de ejercicio legal se alternará entre una mujer y un hombre, salvo en los casos en que se verifique la reelección para el ejercicio de un segundo periodo, en donde la alternancia se realizará a la conclusión de éste.</p> <p>En la convocatoria pública a que se refiere este artículo, sólo se convocará al género que corresponda en turno ocupar las titularidades de las autoridades, Investigadora; y Sustanciadora, respectivamente, en donde las únicas personas que podrán participar del género opuesto al convocado, lo serán aquellas quienes ocupen las titularidades de dichas autoridades, y presenten sus candidaturas para su reelección.</p> <p>En la elección de las autoridades, Investigadora; y Substanciadora, el Congreso del Estado se sujetará a lo siguiente:</p> <p>I. Nombrará una Comisión Especial de cinco legisladores, encargada de sustanciar el procedimiento en los términos del presente artículo;</p> <p>II. La Comisión Especial emitirá una convocatoria pública, en la que se establecerán las bases a que se sujetará la elección de las autoridades, Investigadora; y Substanciadora, así como los requisitos que deberán cubrir las personas que aspiren a ejercer estos cargos. La Convocatoria deberá ser publicada en el Periódico Oficial del Estado, y cuando menos en uno de los diarios locales de mayor circulación en la Entidad;</p> <p>III. La Comisión Especial integrará una lista con el nombre de las personas aspirantes que hayan cumplido los requisitos establecidos en la ley y en la convocatoria respectiva, misma que presentará a la consideración del Pleno del Congreso del Estado;</p> <p>IV. El Pleno del Congreso por mayoría de sus miembros presentes, de la lista presentada por la Comisión Especial, elegirá a quienes deberán fungir como autoridades, Investigadora; y Substanciadora, del Órgano Interno de Control de la Comisión, y</p>	<p>la función pública con base en el mérito, y los mecanismos más adecuados y eficientes para su adecuada profesionalización, atrayendo a los mejores candidatos para ocupar los puestos a través de procedimientos transparentes, objetivos y equitativos.</p> <p>El personal del Órgano Interno de Control está obligado a guardar la más estricta reserva y confidencialidad de la información a la que tenga acceso, directa o indirectamente, derivado del ejercicio de sus funciones.</p> <p>El personal del Órgano Interno de Control será de confianza.</p>
---	--

<p>V. Efectuada la elección, se citará a las personas electas para que se les tome la protesta de ley, ante el Pleno del Congreso.</p>	
<p>ARTÍCULO 80. El Órgano Interno de Control contará con los recursos necesarios para mantener un sistema de vigilancia de los procesos administrativos de la Comisión. A este efecto, deberá coordinarse con el Instituto de Fiscalización Superior del Estado.</p>	<p>ARTÍCULO 80. La persona titular del Órgano Interno de Control contará con las atribuciones siguientes:</p> <p>I. Representar al Órgano Interno de Control;</p> <p>II. Dictar las directrices y políticas necesarias para lograr el cumplimiento de los fines del Órgano Interno de Control, como lo son aquellas para prevenir actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, y el fortalecimiento del control interno;</p> <p>III. Dirigir, coordinar y supervisar las actividades del personal que conforma el Órgano Interno de Control;</p> <p>IV. Velar por la autonomía técnica y de gestión del Órgano Interno de Control;</p> <p>V. Emitir los acuerdos, lineamientos, circulares, manuales, políticas, criterios y demás normativa para el debido cumplimiento de las funciones del Órgano Interno de Control;</p> <p>VI. Suscribir los convenios de coordinación o colaboración que se requieran para el mejor cumplimiento de las funciones del Órgano Interno de Control;</p> <p>VII. Ordenar el inicio de revisiones y auditorias del ejercicio de los recursos públicos;</p> <p>VIII. Fungir como autoridad resolutora en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí;</p> <p>IX. Emitir dentro de los sesenta días contados a partir del inicio de su gestión, el plan estratégico; dentro de los quince días de cada ejercicio fiscal, el plan anual de trabajo; y dentro de los quince días del mes de enero de cada año, el informe anual de actividades;</p>

	<p>X. Certificar todo tipo de documentos que obren en los archivos del Órgano Interno de Control;</p> <p>XI. Habilitar al personal responsable de las notificaciones de los asuntos del Órgano Interno de Control;</p> <p>XII. Las demás atribuciones que le confieran las leyes, reglamentos y demás normatividad aplicable.</p> <p>En caso de ausencia temporal o impedimento legal, la persona titular del Órgano Interno de Control será suplida por el personal de la misma unidad administrativa que por acuerdo éste determine.</p> <p>En caso de ausencia definitiva de la persona titular del Órgano Interno de Control, se dará vista al Congreso del Estado para que proceda a cubrir la vacante conforme al procedimiento establecido en esta Ley.</p>
<p>ARTÍCULO 81. El Órgano Interno de Control privilegiará siempre la evaluación operativa, buscando mejorar permanentemente los servicios de defensa y promoción de los Derechos Humanos. Para ello utilizará los principios establecidos en el Capítulo Segundo del Título Primero de esta Ley.</p> <p>En caso de duda, los criterios de eficacia operativa en las tareas sustantivas de la Comisión, tendrán prioridad sobre criterios meramente normativos o formales.</p>	<p>ARTÍCULO 81. El Órgano Interno de Control fomentará la legalidad, la rendición de cuentas y la mejora de la gestión pública en la Comisión.</p>

En mérito de lo expuesto, sometemos a la consideración del Pleno del Congreso del Estado, el siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. Se **REFORMA**, los artículos, 78 en párrafo primero y en su párrafo tercero las fracciones I a XI, 79 Bis, 80 y 81; y **ADICIONA** al artículo 78 párrafo tercero las fracciones X a XII, de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado San Luis Potosí, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 78. El Órgano Interno de Control es la **unidad administrativa a cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno en la Comisión, y para actuar en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y**

Municipios de San Luis Potosí, y demás disposiciones legales que contemplen su intervención.

...

...

XIII. Emitir instrumentos normativos encaminados a fortalecer las condiciones estructurales de la Comisión en materia de Control Interno, a fin de prevenir y corregir actos u omisiones objeto de responsabilidad administrativa;

XIV. Elaborar diagnósticos sobre aspectos específicos del ambiente de control de la Comisión, e implementar acciones para orientar el criterio que en situaciones específicas y relacionadas con el control interno deban observar las y los servidores públicos de la Comisión en el desempeño de su empleo cargo o comisión;

XV. Revisar el ingreso y egreso, manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos a cargo de la Comisión;

XVI. Establecer las bases generales reglamentarias para la realización de revisiones a que se refiere la fracción anterior;

XVII. Participar como supervisor de los protocolos de entrega recepción de las y los servidores públicos de la Comisión;

XVIII. Revisar que los estados financieros de la Comisión, cumplan con los criterios y disposiciones previstas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental;

XIX. Investigar y calificar actos u omisiones que puedan constituir faltas de tipo administrativas de acuerdo con la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; así como substanciar y resolver aquellas que no sean competencia del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa en términos de la misma Ley;

XX. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de las y los servidores públicos de la Comisión, que se desprenden del Sistema de Evaluación Patrimonial, de declaración de intereses, y constancias de presentación de declaración fiscal, así como aquellas que, en el ámbito de su competencia, contribuyan al cumplimiento del objeto del Sistema Estatal Anticorrupción;

XXI. Denunciar ante las autoridades competentes, hechos que pudieran ser constitutivos del delito corrupción y/o ejercicio inadecuado de la función pública relacionados con el actuar de las y los servidores públicos del Comisión;

XXII. Presentar a la Presidencia de la Comisión, el anteproyecto de presupuesto del Órgano Interno de Control, el cual deberá integrar al ante proyecto de presupuesto de la Comisión;

XXIII. Sin perjuicio de los mecanismos de coordinación establecidos en el Sistema Estatal Anticorrupción, celebrar convenios de coordinación o colaboración con instituciones públicas o privadas que tenga como finalidad el logro de su objeto, y

XXIV. Emitir su plan estratégico y el plan anual de trabajo, y rendir anualmente al Congreso del Estado, durante el mes de enero de cada año, un informe de resultados relativo al año inmediato anterior.

ARTÍCULO 79 Bis. Para el cumplimiento de sus funciones, el Órgano Interno de Control contará con los recursos, áreas y personal que el presupuesto le autorice.

Corresponde a la persona titular del Órgano Interno de Control designar a su personal, así como habilitar al personal que cumplirá con las funciones de autoridad, investigadora, y autoridad substanciadora.

Para la designación del personal se establecerá un sistema que garantice la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito, y los mecanismos más adecuados y eficientes para su adecuada profesionalización, atrayendo a los mejores candidatos para ocupar los puestos a través de procedimientos transparentes, objetivos y equitativos.

El personal del Órgano Interno de Control está obligado a guardar la más estricta reserva y confidencialidad de la información a la que tenga acceso, directa o indirectamente, derivado del ejercicio de sus funciones.

El personal del Órgano Interno de Control será de confianza.

ARTÍCULO 80. La persona titular del Órgano Interno de Control contará con las atribuciones siguientes:

XIII. Representar al Órgano Interno de Control;

XIV. Dictar las directrices y políticas necesarias para lograr el cumplimiento de los fines del Órgano Interno de Control, como lo son aquellas para prevenir actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, y el fortalecimiento del control interno;

XV. Dirigir, coordinar y supervisar las actividades del personal que conforma el Órgano Interno de Control;

- XVI. Velar por la autonomía técnica y de gestión del Órgano Interno de Control;**
- XVII. Emitir los acuerdos, lineamientos, circulares, manuales, políticas, criterios y demás normativa para el debido cumplimiento de las funciones del Órgano Interno de Control;**
- XVIII. Suscribir los convenios de coordinación o colaboración que se requieran para el mejor cumplimiento de las funciones del Órgano Interno de Control;**
- XIX. Ordenar el inicio de revisiones y auditorias del ejercicio de los recursos públicos;**
- XX. Fungir como autoridad resolutora en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí;**
- XXI. Emitir dentro de los sesenta días contados a partir del inicio de su gestión, el plan estratégico; dentro de los quince días de cada ejercicio fiscal, el plan anual de trabajo; y dentro de los quince días del mes de enero de cada año, el informe anual de actividades;**
- XXII. Certificar todo tipo de documentos que obren en los archivos del Órgano Interno de Control;**
- XXIII. Habilitar al personal responsable de las notificaciones de los asuntos del Órgano Interno de Control;**
- XXIV. Las demás atribuciones que le confieran las leyes, reglamentos y demás normatividad aplicable.**

En caso de ausencia temporal o impedimento legal, la persona titular del Órgano Interno de Control será suplida por el personal de la misma unidad administrativa que por acuerdo éste determine.

En caso de ausencia definitiva de la persona titular del Órgano Interno de Control, se dará vista al Congreso del Estado para que proceda a cubrir la vacante conforme al procedimiento establecido en esta Ley.

ARTÍCULO 81. El Órgano Interno de Control fomentará la legalidad, la rendición de cuentas y la mejora de la gestión pública en la Comisión.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto será vigente al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

PROYECTADA EN LAS OFICINAS DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, A LOS QUINCE DÍAS DEL FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

ATENTAMENTE

DIP. CECILIA SENLLACE OCHOA LIMÓN

DIP. DOLORES ELIZA GARCÍA ROMÁN

**DIP. MARTHA PATRICIA ARADILLAS
ARADILLAS**

**DIP. ROBERTO ULISES MENDOZA
PADRÓN**

**DIP. EDGAR ALEJANDRO ANAYA
ESCOBEDO**

DIP. EMILIO EDUARDO BRIONES VALDEZ

DIP. MIGUEL ÁNGEL SEGURA MÉNDEZ

DIP. RENÉ OYARVIDE IBARRA

**DIP. CINTHIA VERÓNICA SEGOVIA
COLUNGA**

DIP. SALVADOR ISAÍS RODRÍGUEZ

San Luis Potosí, S.L.P., a la fecha de su presentación

**CC. DIPUTADAS SECRETARIAS
DE LA LXIII LEGISLATURA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**
P r e s e n t e s

Con fundamento en lo establecido por los artículos 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 130 y 131 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; y 61, 62, 65 y 66 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado Rubén Guajardo Barrera, diputado local integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la LXIII Legislatura, elevo a la consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto que propone REFORMAR el párrafo tercero del artículo 122 BIS de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de San Luis Potosí; con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución Política del Estado contiene entre otras disposiciones, aquellas que establecen los requisitos y en su caso, los impedimentos que las y los aspirantes a ejercer algunos cargos como lo son titular del Poder Ejecutivo, Magistradas y Magistrados, integrantes de los Ayuntamientos y Fiscal.

Es así que el artículo 73 lo hace de manera pormenorizada para el caso de Gobernadora o Gobernador; el artículo 99 lo hace de igual forma para el caso de Magistradas y Magistrados; y el 117 en el caso de integrantes o miembros de los Ayuntamientos.

En el caso de las y los Fiscales, el artículo 122 BIS se limita a decir que *“La Fiscalía General del Estado estará a cargo del Fiscal General del Estado, que durará en su encargo siete años, sin posibilidad de reelección, y deberá cumplir los mismos requisitos que esta Constitución exige para ser Magistrado”*; sin embargo, al revisar el artículo 99 (de los requisitos para ser Magistrada o Magistrado) la fracción V de dicho numeral, dispone un requisito de “no haber sido” *“...titular de Secretaría de Despacho o su equivalente; de la Fiscalía General del Estado; diputado o diputada local, o titular de presidencia municipal, en el año inmediato anterior al día de su nombramiento”*.

En ese sentido, y ante la importancia del cargo de Fiscal, resulta necesario que se complemente el actual tercer párrafo del artículo 122 BIS, a fin de que además de citar los “mismos requisitos que esta Constitución exige para ser Magistrado”, se contemplen los caso de “no ser” que contiene el artículo 99.

A fin de exponer con claridad la propuesta de reforma, se presenta a manera de cuadro comparativo

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí	
VGENTE	TEXTO PROPUESTO
ARTÍCULO 122 BIS. En San Luis Potosí todas las personas tienen derecho a la	ARTÍCULO 122 BIS...

<p>justicia penal, y el Estado deberá garantizar el acceso efectivo a ella.</p> <p>El Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General del Estado, como órgano público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio; así como de autonomía presupuestal, técnica y de gestión.</p> <p>La Fiscalía General del Estado estará a cargo del Fiscal General del Estado, que durará en su encargo siete años, sin posibilidad de reelección, y deberá cumplir los mismos requisitos que esta Constitución exige para ser Magistrado.</p>	<p>...</p> <p>La Fiscalía General del Estado estará a cargo del Fiscal General del Estado, que durará en su encargo siete años, sin posibilidad de reelección, y deberá cumplir los mismos requisitos que esta Constitución exige para ser Magistrado; y no haber sido titular del Poder Ejecutivo; de una Secretaría de Despacho o su equivalente; Magistrado; diputado o diputada local, o titular de presidencia municipal, en el año inmediato anterior al día de su nombramiento.</p>
<p>Corresponde al Gobernador del Estado proponer al Congreso, al triple de personas para ocupar el cargo del Fiscal General del Estado, dentro de los cuales la Legislatura hará la elección en el término de treinta días y por el voto de cuando menos las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión correspondiente. Si vencido ese plazo no se hubiera hecho la elección, el titular del Ejecutivo procederá a hacer el nombramiento de entre las propuestas.</p>	<p>...</p>
<p>En caso de que el Congreso rechace la propuesta, el Gobernador del Estado presentará una nueva terna en los términos del párrafo anterior; si esta segunda propuesta fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que, dentro de la misma, designe el Gobernador del Estado</p>	<p>...</p>

Por lo expuesto y fundado, elevo a la consideración de esa H. Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se REFORMA el párrafo tercer del artículo 122 BIS de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 122 BIS...

...

La Fiscalía General del Estado estará a cargo del Fiscal General del Estado, que durará en su encargo siete años, sin posibilidad de reelección, y deberá cumplir los mismos requisitos que esta Constitución exige para ser Magistrado; **y no haber sido titular del Poder Ejecutivo; de una Secretaría de Despacho o su equivalente; Magistrado; diputado o diputada local, o titular de presidencia municipal, en el año inmediato anterior al día de su nombramiento.**

...

...

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado “Plan de San Luis”, previa consulta que se haga a los municipios como integrantes del Constituyente Permanente.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Atentamente

Dip Rubén Guajardo Barrera

Dictámenes
con
Proyecto
de Decreto

**CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA LXIII LEGISLATURA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ,
PRESENTES.**

A la Comisión de Hacienda del Estado, le fue turnada en Sesión Ordinaria celebrada el siete de diciembre del año dos mil veintitrés, bajo el número 4913, iniciativa, que impulsa reformar el artículo 61 en su segundo párrafo, artículo 76, artículo 78 en su segundo párrafo, artículo 81 en su tercer párrafo y artículo 88 en sus primer, segundo, y tercer párrafos de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí, presentada por la legisladora María Aranzazu Puente Bustindui.

En tal virtud, al entrar a su estudio y análisis, los diputados integrantes de esta comisión llegaron a los siguientes

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que con fundamento en lo estipulado por el artículo, 98 fracción XIII, así como el artículo 110, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, a la comisión a la que se le turnó esta iniciativa tiene atribuciones para conocerla y proponer lo procedente sobre la misma.

SEGUNDO. Que la iniciativa cumple con los requisitos estipulados en los artículos, 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 130 y 131 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 61 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, por lo que es procedente su análisis y dictamen.

TERCERO. Que a fin de conocer la iniciativa se cita enseguida su contenido y exposición de motivos:

"Exposición de Motivos

La armonización legislativa o normativa, tiene como objetivo dar un ordenamiento interno, para evitar conflictos y dotar de eficacia a estos últimos. esta acción puede suponer la derogación de normas específicas, la abrogación de cuerpos normativos en forma íntegra o la adición de nuevas normas o su simple reforma para adaptarlas al contenido actual, para permitir su desarrollo normativo en orden a su aplicación.

Las leyes por su propia naturaleza deben irse ajustando a las realidades y exigencias de la sociedad; y adecuándose a los cambios que va teniendo el sistema jurídico al que pertenecen, ya que de lo contrario pierden positividad y vigencia.

La actualización de una ley es importante por varias razones. En primer lugar, las leyes deben adaptarse a los cambios y avances sociales. Esto garantiza que las normas legales sean relevantes y efectivas para abordar los desafíos actuales y proteger los derechos de los ciudadanos.

Además, la actualización de una ley puede corregir deficiencias, inconsistencias o lagunas jurídicas que puedan existir en la versión anterior. Esto ayuda a fortalecer el estado de derecho y a garantizar una aplicación justa y equitativa de las normas legales.

En ese orden de ideas, resulta evidente la necesidad de actualizar la **LEY PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ**, ello mediante la presente reforma ya antes mencionada, con el fin de dar certeza y evitar lagunas jurídicas.

Los principales objetivos de esta ley son los siguientes:

Regular y coordinar las acciones relativas al ejercicio, control y evaluación de los Recursos Federales del Ramo 33 que para efectos de su operación se constituyen en Fondos Estatales, al momento de ser recibidos por el Ejecutivo del Estado, distribuyéndose de la siguiente forma: Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo; Fondo Estatal para los Servicios de Salud; Fondo Estatal de Aportaciones Múltiples; Fondo Estatal para la Educación Tecnológica y de Adultos; Fondo Estatal para la Seguridad Pública; Fondo Estatal para la Infraestructura Social; y Fondo para el Fortalecimiento del Estado.”

Con base en los motivos expuestos, se presenta a consideración de este Honorable Pleno el siguiente cuadro comparativo entre la Ley vigente; y la propuesta de adición:

LEY PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ (VIGENTE)	PROPUESTA
<p>ARTÍCULO 61. Para el correcto ejercicio de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y del Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios, y una mayor transparencia y control de los mismos, los ayuntamientos deberán integrar un expediente técnico por cada obra o acción.</p> <p>Dichos expedientes deberán estar a disposición de la Contraloría General del Estado, o del Órgano de Control y Supervisión Interno del Municipio según corresponda, y de la Auditoría Superior del Estado, cuando así lo requieran.</p>	<p>ARTÍCULO 61. ...</p> <p>Dichos expedientes deberán estar a disposición de la Contraloría General del Estado, o del Órgano de Control y Supervisión Interno del Municipio según corresponda, y al Instituto de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí, cuando así lo requieran.</p>
<p>ARTÍCULO 76. La Secretaría de Desarrollo Social y Regional a través del Sistema de Información del Desarrollo Social y Regional, establecerá un mecanismo de comunicación con los ayuntamientos, las dependencias federales y estatales, el Congreso del Estado, la Auditoría Superior del Estado, y la sociedad, permitiendo:</p> <p>I. Conocer el ejercicio de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, del Fondo para la Infraestructura Social del Estado, y del Fondo para el Fortalecimiento de</p>	<p>ARTÍCULO 76. La Secretaría de Desarrollo Social y Regional a través del Sistema de Información del Desarrollo Social y Regional, establecerá un mecanismo de comunicación con los ayuntamientos, las dependencias federales y estatales, el Congreso del Estado, el Instituto de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí, y la sociedad, permitiendo:</p> <p>I y II. ...</p>

<p>los Municipios, su orientación, ubicación, beneficiarios, alcances e impactos, y</p> <p>II. Reunir información sobre los diversos programas que las dependencias federales y estatales realizan en la Entidad, en sus municipios y en sus localidades, y llevar seguimiento de su cobertura de atención para evitar duplicidades en el gasto; ordenar y organizar mejor sus acciones para conducir sus impactos, complementarlos, integrarlos con la acción de otras instancias y orientar el desarrollo comunitario de un Municipio, de una microregión y del Estado.</p>	
<p>ARTÍCULO 78. Con el fin de evaluar los resultados del ejercicio de los recursos de los Fondos para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento de los Municipios, y el impacto en el desarrollo social y regional, el Ayuntamiento convocará a una reunión evaluatoria en el seno del Consejo, por lo menos una vez al año.</p> <p>En esta reunión podrán participar representantes del Ejecutivo del Estado, del Congreso del Estado, de la Auditoría Superior del Estado, y de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal.</p>	<p>ARTÍCULO 78. ...</p> <p>En esta reunión podrán participar representantes del Ejecutivo del Estado, del Congreso del Estado, del Instituto de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí, y de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal.</p>
<p>ARTÍCULO 81. Recibidos los recursos de los Fondos Estatales y Municipales por el Estado y los Municipios, respectivamente, y hasta su erogación total, efectuarán el seguimiento, supervisión y control del ejercicio de los mismos, la Contraloría General del Estado por lo que hace a los Fondos Estatales, y respecto a los Fondos que administran directamente los ayuntamientos, los órganos de control y supervisión internos de los municipios, en donde estén constituidos.</p> <p>La supervisión y vigilancia no podrá implicar limitaciones, ni restricciones de cualquier índole, en la administración y ejercicio de dichos Fondos.</p> <p>La revisión y fiscalización de las cuentas públicas del Estado y de los municipios, serán efectuadas por la Auditoría superior del Estado, de conformidad a las disposiciones legales aplicables, a efecto de verificar que las dependencias del Ejecutivo del Estado y de los municipios, respectivamente, aplicaron los recursos de los Fondos Estatales y Municipales para los fines previstos en esta Ley.</p>	<p>ARTÍCULO 81. ...</p> <p>...</p> <p>La revisión y fiscalización de las cuentas públicas del Estado y de los municipios, serán efectuadas por el Instituto de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí, de conformidad a las disposiciones legales aplicables, a efecto de verificar que las dependencias del Ejecutivo del Estado y de los municipios, respectivamente, aplicaron los recursos de los Fondos Estatales y Municipales para los fines previstos en esta Ley.</p>
<p>ARTÍCULO 88. El estado y los municipios, que en el ejercicio de sus atribuciones de control y supervisión, conozcan que los recursos de los fondos no han sido aplicados a los fines que</p>	<p>ARTÍCULO 88. El estado y los municipios, que en el ejercicio de sus atribuciones de control y supervisión, conozcan que los recursos de los fondos no han sido aplicados a los fines que</p>

<p>por cada Fondo se señale en esta Ley, deberán hacerlo del conocimiento en forma inmediata a la Secretaría de la Función Pública, así como a la Auditoría Superior del Estado para proceder en los términos del artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal Federal.</p> <p>Cuando la Auditoría Superior del Estado detecte que los recursos de los fondos no se han destinado a los fines establecidos en esta Ley, deberá hacerlo del conocimiento inmediato a la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.</p> <p>Se faculta a la Contraloría General del Estado, a la Auditoría Superior del Estado, y a los órganos de Control y Supervisión Internos de los gobiernos municipales, donde estén constituidos, para que en términos de lo previsto por la Ley Responsabilidades Administrativas para el Estado de San Luis Potosí, y demás leyes aplicables, se finquen los pliegos de responsabilidades de los servidores públicos estatales y municipales, por el uso inadecuado de los recursos correspondientes a los Fondos Estatales y Municipales que conforme a esta Ley les corresponda administrar; los que constituirán créditos fiscales a favor del Estado o Municipios, según el caso, pudiéndose hacer efectivos en caso necesario, a través del procedimiento administrativo de ejecución.</p> <p>Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales en que pudieran incurrir.</p>	<p>por cada Fondo se señale en esta Ley, deberán hacerlo del conocimiento en forma inmediata a la Secretaría de la Función Pública, así como el Instituto de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí para proceder en los términos del artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal Federal.</p> <p>Cuando el Instituto de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí detecte que los recursos de los fondos no se han destinado a los fines establecidos en esta Ley, deberá hacerlo del conocimiento inmediato a la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.</p> <p>Se faculta a la Contraloría General del Estado, al Instituto de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí, y a los órganos de Control y Supervisión Internos de los gobiernos municipales, donde estén constituidos, para que en términos de lo previsto por la Ley Responsabilidades Administrativas para el Estado de San Luis Potosí, y demás leyes aplicables, se finquen los pliegos de responsabilidades de los servidores públicos estatales y municipales, por el uso inadecuado de los recursos correspondientes a los Fondos Estatales y Municipales que conforme a esta Ley les corresponda administrar; los que constituirán créditos fiscales a favor del Estado o Municipios, según el caso, pudiéndose hacer efectivos en caso necesario, a través del procedimiento administrativo de ejecución.</p> <p>...</p>
--	---

CUARTO. Que la dictaminadora al realizar el análisis de la propuesta en merito lleo a los siguientes razonamientos:

- El Instituto de Fiscalización Superior del Estado es el órgano técnico de fiscalización del Congreso del Estado que tiene a su cargo la función de revisar, auditar y vigilar las finanzas públicas de los entes auditables a través de las acciones y obligaciones que se establecen en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí.
- El objetivo de expedir una nueva Ley de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí es fortalecer el marco de acción que se confiere al Órgano Técnico a nivel constitucional y legal, que impulse a los Poderes del Estado, gobiernos municipales, organismos constitucionales autónomos y demás entidades fiscalizadas a hacer un mejor uso de los recursos a su disposición.
- Por lo que se tendrá una vigilancia más completa en cuanto a los recursos públicos y en que, el Instituto Superior del Estado pueda llevar a cabo la

verificación de las cuentas públicas de todos los entes auditables del estado de San Luis Potosí y los autónomos.

- Por lo que con motivo de la entrada en vigor de la nueva Ley de Fiscalización Superior de la Entidad se cambió la denominación de Auditoría Superior del Estado por la de Instituto Superior de Fiscalización Superior del Estado por lo que resulta procedente la reforma descrita y se realiza la armonización correspondiente.

Por lo expuesto, con fundamento en los artículos, 92 párrafo segundo, y 94 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 85 y 86 fracciones I y III, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, se presenta a esta Asamblea Legislativa, el siguiente

DICTAMEN

ÚNICO. Es de aprobarse y se aprueba la iniciativa descrita en el proemio.

Exposición de Motivos

La armonización legislativa o normativa, tiene como objetivo dar un ordenamiento interno, para evitar conflictos y dotar de eficacia a estos últimos. Esta acción puede suponer la derogación de normas específicas, la abrogación de cuerpos normativos en forma íntegra o la adición de nuevas normas o su simple reforma para adaptarlas al contenido actual, para permitir su desarrollo normativo en orden a su aplicación.

Las leyes por su propia naturaleza deben irse ajustando a las realidades y exigencias de la sociedad; y adecuándose a los cambios que va teniendo el sistema jurídico al que pertenecen, ya que de lo contrario pierden positividad y vigencia.

La actualización de una ley es importante por varias razones. En primer lugar, las leyes deben adaptarse a los cambios y avances sociales. Esto garantiza que las normas legales sean relevantes y efectivas para abordar los desafíos actuales y proteger los derechos de los ciudadanos.

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se **REFORMAN** los artículos, 61 en su segundo párrafo, 76 en su primer párrafo, 78 en su segundo párrafo, 81 en su tercer párrafo y 88 en sus párrafos primero, segundo y tercero de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí, para quedar como sigue

ARTÍCULO 61. ...

Dichos expedientes deberán estar a disposición de la Contraloría General del Estado, o del Órgano de Control y Supervisión Interno del Municipio según corresponda, y **al Instituto de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí**, cuando así lo requieran.

ARTÍCULO 76. La Secretaría de Desarrollo Social y Regional a través del Sistema de Información del Desarrollo Social y Regional, establecerá un mecanismo de comunicación con los ayuntamientos, las dependencias federales y estatales, el Congreso del Estado, **el Instituto de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí**, y la sociedad, permitiendo:

I y II. ...

ARTÍCULO 78. . . .

En esta reunión podrán participar representantes del Ejecutivo del Estado, del Congreso del Estado, **del Instituto de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí**, y de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal.

ARTÍCULO 81. . . .

. . .

La revisión y fiscalización de las cuentas públicas del Estado y de los municipios, serán efectuadas por **el Instituto de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí**, de conformidad a las disposiciones legales aplicables, a efecto de verificar que las dependencias del Ejecutivo del Estado y de los municipios, respectivamente, aplicaron los recursos de los Fondos Estatales y Municipales para los fines previstos en esta Ley.

ARTÍCULO 88. El estado y los municipios, que en el ejercicio de sus atribuciones de control y supervisión, conozcan que los recursos de los fondos no han sido aplicados a los fines que por cada Fondo se señale en esta Ley, deberán hacerlo del conocimiento en forma inmediata a la Secretaría de la Función Pública, así como **el Instituto de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí** para proceder en los términos del artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal Federal.

Cuando **el Instituto de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí** detecte que los recursos de los fondos no se han destinado a los fines establecidos en esta Ley, deberá hacerlo del conocimiento inmediato a la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Se faculta a la Contraloría General del Estado, **al Instituto de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí**, y a los órganos de Control y Supervisión Internos de los gobiernos municipales, donde estén constituidos, para que en términos de lo previsto por la Ley Responsabilidades Administrativas para el Estado

de San Luis Potosí, y demás leyes aplicables, se finquen los pliegos de responsabilidades de los servidores públicos estatales y municipales, por el uso inadecuado de los recursos correspondientes a los Fondos Estatales y Municipales que conforme a esta Ley les corresponda administrar; los que constituirán créditos fiscales a favor del Estado o Municipios, según el caso, pudiéndose hacer efectivos en caso necesario, a través del procedimiento administrativo de ejecución.

. . .

TRANSITORIOS

PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado "Plan de San Luis".

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente Decreto.

DAD EN LA SALA "LIC. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA" DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

LISTA DE VOTACIÓN
COMISIÓN DE HACIENDA DEL ESTADO

	FIRMA	SENTIDO DEL VOTO
DIP. ROBERTO ULICES MENDOZA PADRÓN PRESIDENTE		<u>A favor</u>
DIP. LILIANA GUADALUPE FLORES ALMAZÁN VICEPRESIDENTA		<u>A FAVOR</u>
DIP. HÉCTOR MAURICIO RAMÍREZ KONISHI SECRETARIO		<u>A favor</u>
DIP. DOLORES ELIZA GARCÍA ROMÁN VOCAL		<u>A favor</u>
DIP. CUAUHTLI FERNANDO BADILLO MORENO VOCAL		<u>A favor</u>
DIP. EMMA IDALIA SALDAÑA GUERRERO VOCAL		<u>A favor</u>

Firmas del Dictamen que resuelve procedente la iniciativa, que impulsa reformar el artículo 61 en su segundo párrafo, artículo 76, artículo 78 en su segundo párrafo, artículo 81 en su tercer párrafo y artículo 88 en sus primer, segundo, y tercer párrafos de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí, presentada por la legisladora María Aranzazu Puente Bustindui. Asunto (4913)

**DIPUTADAS SECRETARIAS DE LA LXIII LEGISLATURA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ,
PRESENTES.**

A las comisiones de Salud y Asistencia Social; y Justicia, se dio cuenta en Sesión Ordinaria de fecha 8 de febrero del presente año, de la iniciativa con el número de **Turno 5238**, que requiere reformar los artículos, 71, 348, 351, 353, 354, 366, 368, 370, 371, 373, 377, 378, 380, 382, 383, 384, 385, 388, fracciones IV y V y 391; adicionar los artículos 71 Sexties, 71 Septies, el Capítulo II al Título Cuarto, el cual se compondrá por los artículos 71 Octies, 71 Nonies, 71 Decies, 71 Undecies, 71 Duodecies, y los actuales capítulos II y III, pasan hacer III y IV respectivamente, párrafo último al 350, 352 Bis, dos párrafos a las fracciones III, VI y VII del artículo 353, 353 bis, 366 bis, 368 Bis, 384 bis, dos fracciones VI y VII al artículo 388; y derogar los Capítulos IV y V del Título Décimo Sexto, y los numerales, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402 y 403, de la Ley de Salud del Estado, presentada por el Lic. José Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí.

En virtud de lo anterior, quienes integramos las comisiones que suscriben el presente, verificamos la viabilidad y legalidad de la iniciativa referida para llegar a los siguientes

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las facultades que no están expresamente concedidas por ésta a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de México, en los ámbitos de sus respectivas competencias.

En ese tenor, las disposiciones contenidas en los artículos, 73, 74 y 76, de la Constitución de la República, no se desprende facultad exclusiva del Congreso de la Unión o de sus respectivas Cámaras, para legislar en la materia y en los términos que se refieren en la iniciativa citada.

SEGUNDO. Que en el ámbito local los artículos, 57 fracciones, I, y XLVIII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; y 15 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la Entidad, establecen como atribuciones del Congreso del Estado, las de dictar, abrogar y derogar leyes en el ámbito de su competencia, así como las demás que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Local y las leyes que de ellas emanen le atribuyan.

TERCERO. Que con base en los artículos, 1º, y 124, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, fracciones, I, y XLVIII, de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 98 fracciones XV y XVIII, 111 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, compete al Congreso del Estado, por conducto de estas comisiones legislativas, resolver y dictaminar la presente iniciativa.

CUARTO. Que con base el artículo 86 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de San Luis Potosí, se transcriben los argumentos que el promovente manifiesta en la exposición de motivos de su iniciativa y que a la letra dice:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

“La presente iniciativa, tiene su base en los pilares de transparencia y política anticorrupción que hoy en día, son parte de la Política de los Servicios de Salud del Estado de San Luis Potosí, por lo que su objetivo principal es reducir el riesgo de corrupción e incrementar la confianza de la ciudadanía en las actividades que desempeña esta institución pública, conforme a los siguientes planteamientos de modificación y adición.

*Se amplía la obligación para quienes ejerzan en forma pública o privada las actividades profesionales, relacionadas con las ciencias biológicas, químicas, de la salud y sus ramas, de consignar en los **documentos y papelería** que utilicen en el ejercicio de sus actividades información relacionada con la institución que le expidió sus títulos, diplomas y certificados de licenciatura o especialidad, y cédulas profesionales.*

Se precisa que la obligación de los profesionales de la medicina que ejerzan en forma pública o privada las actividades y especialidades referidas anteriormente, de contar con certificación y recertificación, estará a cargo de manera primaria del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, conforme a la normatividad federal, y en el caso del Consejo de Especialidades Médicas, podrá continuar con la atribución siempre y cuando tengan la declaratoria de idoneidad y que estén reconocidos por el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, constituido por la Academia Nacional de Medicina de México, la Academia Mexicana de Cirugía y los Consejos de Especialidad miembros.

Se incorpora un capítulo al título cuarto, denominado ejercicio especializado de la cirugía, con el propósito de garantizar que en la realización de cualquier procedimiento médico quirúrgico de especialidad, los profesionales que lo ejerzan deberán de acreditar su legal ejercicio de la profesión, capacidad y experiencia. Además de establecer que la práctica de la cirugía plástica, estética y reconstructiva, deberá de efectuarse en lugares con licencia sanitaria vigente, y la publicidad que efectúen los profesionistas al respecto, deberá de contener los requisitos que lo acrediten en su legal ejercicio y profesionalismo.

En aras de ver materializada la Estrategia Nacional de Buen Gobierno en el Sistema Federal Sanitario, se propone la implementación de la videograbación de las visitas de verificación sanitaria que realiza el órgano desconcentrado de este organismo público descentralizado, denominado, Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de San Luis Potosí.

Dicha facultad, es ejercida en términos de la Ley General de Salud, Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí, del Acuerdo de Coordinación para el ejercicio de facultades en materia de control y fomento sanitarios, que celebró el Poder Ejecutivo Federal y el Poder Ejecutivo Estatal de San Luis Potosí, divulgado en el Diario Oficial de la Federación, el 3 de junio de 2016, y la cláusula segunda del Acuerdo de Coordinación que celebraron el Gobierno del Estado con los Servicios de Salud de San Luis Potosí, para la ejecución de diversas atribuciones y competencias, publicado en el Periódico Oficial del Estado “Plan de San Luis”, el 08 de diciembre de 2005, modificado mediante Acuerdo Administrativo publicado el 25 de marzo de 2010.

La Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de San Luis Potosí, tiene la capacidad e independencia técnica, administrativa y operativa para llevar a cabo lo concerniente al control, vigilancia y fomento en materia de protección contra riesgos sanitarios en nuestro Estado; lo cual permitirá lograr un modelo estatal sanitario que impida la heterogeneidad y facilite

la armonización de acciones sanitarias, cuyo propósito, es darle certeza jurídica y actualizar los actos de autoridad que realiza dicho órgano desconcentrado.

Además, reivindicará a las instituciones en su deber de salvaguardar el derecho humano a la seguridad jurídica, el cual consiste en que toda persona tenga certeza sobre su situación ante las leyes, o la de su familia, posesiones o sus demás derechos, en cuya vía de respeto, la autoridad debe sujetar sus actuaciones de molestia a determinados supuestos, requisitos y procedimientos previamente establecidos en la Constitución y en las leyes, como expresión de una voluntad general soberana.

En este contexto, como requisito indispensable que deben cumplir los actos de molestia, es constar por escrito, esto tiene como propósito que el ciudadano pueda constatar el cumplimiento de los restantes, esto es, que provienen de autoridad competente y que se encuentren debidamente fundados y motivados. A su vez, el elemento relativo a que el acto provenga de autoridad competente, es reflejo de la adopción en el orden nacional de otra garantía primigenia del derecho a la seguridad, denominada principio de legalidad, mismo que toda autoridad está obligada a observar, conforme al cual, las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo cual expresamente les facultan las leyes.

Para garantizar la seguridad jurídica del propietario, responsable, encargado u ocupante del establecimiento respectivo, será objeto de videograbación, la visita de verificación a que se refiere el artículo 345 de la Ley de Salud del Estado, y se sujetará a lo dispuesto por el Reglamento Interior de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de San Luis Potosí.

Actividad que se traduce en un medio idóneo que permitirá vigilar que el acto de molestia, es decir, la visita de verificación sanitaria, se apegue al principio de legalidad, la cual será una prueba tangible del compromiso de la autoridad sanitaria de combatir todo acto de corrupción. De igual forma, se dota a la ciudadanía con un medio de prueba adicional para ejercer su derecho de audiencia y demostrar la legalidad o ilegalidad de la visita de verificación o actos de corrupción en su caso.

Se hace un incremento a los parámetros que establece el capítulo II del Título Décimo Sexto de la Ley de Salud del Estado, el cual marca la cantidad de unidades y medidas de actualización que se imponen como multa por la violación a lo preceptuado en dicho dispositivo normativo. El aumento se realiza homologando los límites establecidos en la Ley General de Salud, atendiendo al contexto y resultado obtenido a través de la vigilancia y control sanitario que realiza la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de San Luis Potosí.

Por último, permitirá derogar los Capítulos IV y V del Título Décimo Sexto, consecuentemente los artículos 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402 y 403, dichos capítulos prevén lo relativo al recurso de revisión que los propietarios de los establecimientos sujetos a vigilancia y control sanitario, pueden interponer en contra de los actos y resoluciones que emiten las autoridades sanitarias. Sin embargo, dicho recurso, ya se encuentra previsto por el Código Procesal Administrativo para el Estado de San Luis Potosí, el cual, es aplicable de manera supletoria a los actos, procedimientos y resoluciones previstos en Ley de Salud del Estado, de conformidad con los artículos 2 y 163 del dispositivo normativo en cuestión, además de que el recurso previsto por el mencionado Código, tutela y garantiza en mejor medida el derecho a un recurso judicial efectivo de los propietarios de los establecimientos sujetos a vigilancia y control sanitario.”

QUINTO. Que para dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 86 fracción III, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de San Luis Potosí, se transcribe

el contenido íntegro de los artículos vigentes, en comparación de las reformas propuestas por el promovente, que a la letra dice:

Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí (Texto Normativo vigente)	Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí (Texto Normativo propuesto)
<p>ARTICULO 71. Quienes ejerzan en forma pública o privada las actividades profesionales, técnicas y auxiliares, así como las especialidades a que se refiere este capítulo, deberán poner a la vista del público un anuncio que indique la institución que les expidió el título, diploma o certificado de la licenciatura y la especialidad respectivamente, y, en su caso, el número de su correspondiente cédula profesional; además, el registro de certificados de especialización expedidos por academias, colegios, consejos o asociaciones de profesionales de las disciplinas para la salud, las autoridades educativas competentes solicitarán la opinión de la Secretaría de Salud. Si se tratare del registro de certificados de especialidades médicas o del registro de la recertificación de éstas, las autoridades ya señaladas también deberán solicitar la opinión del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas.</p> <p>Así mismo, deberá estar a la vista de los pacientes el documento del título, diploma o certificado de la licenciatura; y en caso de ejercer especialidades o subespecialidades, también el documento de la certificación o recertificación correspondiente.</p>	<p>Artículo 71. Quienes ejerzan en forma pública o privada las actividades profesionales, técnicas y auxiliares, así como las especialidades a que se refiere este capítulo, deberán poner a la vista del público un anuncio que indique la institución que les expidió el título, diploma o certificado de la licenciatura y la especialidad, respectivamente, y, en su caso, el número de cédula profesional, el registro de certificados de especialización expedidos por academias, colegios, consejos o asociaciones de profesionales de las disciplinas para la salud.</p> <p><i>Estas menciones también deberán consignarse en los documentos y papelería que utilicen en el ejercicio de tales actividades y en la publicidad que realicen al respecto.</i></p> <p>Si se tratare del registro de certificados de especialidades médicas o del registro de la recertificación de éstas, las academias, colegios, consejos o asociaciones de profesionales de las disciplinas para la salud, también deberán solicitar la opinión del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas.</p> <p><i>Asimismo, deberán estar a la vista de los pacientes los siguientes documentos:</i></p> <p><i>a) El título, diploma o certificado de la licenciatura;</i></p> <p><i>b) En caso de ejercer especialidades o subespecialidades,</i></p>

	<p>el certificado o documento que acredite la recertificación;</p> <p>c) El número de cédula profesional, y en su caso, de cédula de especialidad, y</p> <p>d) El registro de certificados de especialización.</p>
No tiene correlativo	<p>Artículo 71 Sexties. La emisión de los diplomas de especialidades médicas corresponde a las instituciones de educación superior y de salud oficialmente reconocidas ante las autoridades correspondientes.</p> <p>Para la realización de los procedimientos médicos quirúrgicos de especialidad se requiere que el especialista haya sido entrenado para la realización de los mismos en instituciones de salud oficialmente reconocidas ante las autoridades correspondientes.</p>
No tiene correlativo	<p>Artículo 71 Sépties. El Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, conforme a la normativa federal, es el organismo facultado para supervisar el entrenamiento, habilidades, destrezas y calificación de la pericia que se requiere para la certificación y recertificación de la misma en las diferentes especialidades de la medicina reconocidas por el Comité y en las instituciones de salud oficialmente reconocidas ante las autoridades correspondientes.</p> <p>Los Consejos de Especialidades Médicas que tengan la declaratoria de idoneidad y que estén reconocidos por el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, constituido por la Academia Nacional de Medicina de México, la Academia Mexicana de Cirugía y los Consejos de</p>

	<p><i>Especialidad miembros, están facultados para expedir certificados de su respectiva especialidad médica.</i></p> <p><i>Para la expedición de la cédula de médico especialista las autoridades educativas competentes solicitarán la opinión del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas.</i></p>
No tiene correlativo	<p style="text-align: center;">TÍTULO CUARTO</p> <p style="text-align: center;">RECURSOS HUMANOS PARA LOS SERVICIOS DE SALUD</p> <p style="text-align: center;">CAPÍTULO II</p> <p style="text-align: center;">Ejercicio Especializado de la Cirugía</p> <p>Artículo 71 Octies. Para la realización de cualquier procedimiento médico quirúrgico de especialidad, los profesionales que lo ejerzan requieren además de los requisitos señalados en el artículo anterior:</p> <p>I. Cédula de especialista legalmente expedida por las autoridades educativas competentes, y</p> <p>II. Certificado vigente de especialista que acredite capacidad y experiencia en la práctica de los procedimientos y técnicas correspondientes en la materia, aceptadas como adecuadas para tratar a un paciente en el momento de que se trata, de acuerdo con cada especialidad, expedido por el Consejo de la especialidad según corresponda, de conformidad con los artículos 71 Sexties y Sépties de la presente Ley.</p>
No tiene correlativo	<p>Artículo 71 Nonies. Los médicos especialistas podrán pertenecer a una agrupación médica, cuyas bases de organización y funcionamiento estarán a cargo de las asociaciones, sociedades, colegios o federaciones de profesionales de su especialidad; agrupaciones que se encargan de garantizar el profesionalismo y ética de los expertos en esta práctica de la medicina.</p>

	<p>El Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas y los Consejos de Especialidades Médicas para la aplicación del presente artículo y lo dispuesto en el Título Cuarto de la presente Ley, se sujetarán a las disposiciones que emita la Secretaría de Salud.</p> <p>Para efectos de la validez a que alude la fracción II del artículo anterior, debe acreditarse la recertificación cada cinco años.</p>
No tiene correlativo	<p>Artículo 71 Decies. La cirugía plástica, estética y reconstructiva relacionada con cambiar o corregir el contorno o forma de diferentes zonas o regiones de la cara y del cuerpo, deberá efectuarse en establecimientos o unidades médicas con licencia sanitaria vigente, atendidos por profesionales de la salud especializados en dichas materias, de conformidad con lo que establece el artículo 71 Octies de esta Ley.</p>
No tiene correlativo	<p>Artículo 71 Undecies. La oferta de los servicios que se haga a través de medios informativos, ya sean impresos, electrónicos u otros, por profesionistas que ejerzan cirugía plástica, estética o reconstructiva; así como, los establecimientos o unidades médicas en que se practiquen dichas cirugías, deberán prever y contener con claridad en su publicidad los requisitos que se mencionan en los artículos 71 Quáter, 71 Octies, 71 Decies de esta Ley y lo previsto por el Capítulo Único del Título Décimo Tercero de la Ley General de Salud.</p>
No tiene correlativo	<p>Artículo 71 Duodecies. Las sociedades, asociaciones, colegios o federaciones de profesionistas pondrán a disposición de la Secretaría de Salud, un directorio electrónico, con acceso al público que contenga los nombres, datos de los profesionistas que lleven a cabo procedimientos médico-quirúrgicos y certificado de especialización vigente,</p>

	además de proporcionar el nombre y datos de la Institución y/o Instituciones educativas, que avalen su ejercicio profesional.
<p style="text-align: center;">CAPITULO II Servicio Social de Pasantes y Profesionales</p> <p>ARTICULO 72. Todos los pasantes de las profesiones para la salud y sus ramas, deberán prestar el servicio social en los términos de las disposiciones legales aplicables en materia educativa y de esta Ley.</p>	<p style="text-align: center;">CAPÍTULO III Servicio Social de Pasantes y Profesionales</p> <p>Artículo 72. Todos los pasantes de las profesiones para la salud y sus ramas, deberán prestar el servicio social en los términos de las disposiciones legales aplicables en materia educativa y de esta Ley.</p>
<p>ARTICULO 73. Los aspectos docentes de la prestación del servicio social se regularán por lo que establezcan las instituciones de educación superior, de conformidad con las atribuciones que les otorgan las disposiciones que rigen su organización y funcionamiento, y lo que determinen las autoridades educativas competentes.</p> <p>La operación de los programas en los establecimientos de salud del Estado, se llevará a cabo de acuerdo a los lineamientos establecidos por cada una de las instituciones de salud, y lo que determinen las autoridades competentes.</p>	<p>Artículo 73. Los aspectos docentes de la prestación del servicio social se regularán por lo que establezcan las instituciones de educación superior, de conformidad con las atribuciones que les otorgan las disposiciones que rigen su organización y funcionamiento, y lo que determinen las autoridades educativas competentes.</p> <p>La operación de los programas en los establecimientos de salud del Estado, se llevará a cabo de acuerdo a los lineamientos establecidos por cada una de las instituciones de salud, y lo que determinen las autoridades competentes.</p>
<p>ARTICULO 74. Para los efectos de la eficaz prestación del servicio social de pasantes de las profesiones para la salud, se establecerán mecanismos de coordinación entre las autoridades sanitarias del Estado y las educativas, con la participación que corresponda a otras dependencias competentes.</p>	<p>Artículo 74. Para los efectos de la eficaz prestación del servicio social de pasantes de las profesiones para la salud, se establecerán mecanismos de coordinación entre las autoridades sanitarias del Estado y las educativas, con la participación que corresponda a otras dependencias competentes.</p>
<p>ARTICULO 75. La prestación del servicio social de los pasantes de las profesiones para la salud, se llevará a cabo mediante la participación de los mismos en las unidades médicas del primer nivel de atención, prioritariamente en áreas rurales y urbanas de menor desarrollo económico y social del Estado.</p> <p>Para los efectos del párrafo anterior el Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Salud del Estado, en coordinación con las instituciones educativas y de salud, definirán los mecanismos para que los pasantes participen en la organización y</p>	<p>Artículo 75. La prestación del servicio social de los pasantes de las profesiones para la salud, se llevará a cabo mediante la participación de los mismos en las unidades médicas del primer nivel de atención, prioritariamente en áreas rurales y urbanas de menor desarrollo económico y social del Estado.</p>

<p>operación de los comités de salud a que alude el artículo 49 de esta Ley.</p>	<p>Para los efectos del párrafo anterior el Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Salud del Estado, en coordinación con las instituciones educativas y de salud, definirán los mecanismos para que los pasantes participen en la organización y operación de los comités de salud a que alude el artículo 49 de esta Ley.</p>
<p>ARTICULO 76. La Secretaría de Salud del Estado, y las instituciones de educación superior, elaborarán programas de carácter social que incorporen la perspectiva de género para las personas profesionales de la salud, en beneficio de la colectividad, de conformidad con las disposiciones legales aplicables al ejercicio profesional.</p>	<p>Artículo 76. La Secretaría de Salud del Estado, y las instituciones de educación superior, elaborarán programas de carácter social que incorporen la perspectiva de género para las personas profesionales de la salud, en beneficio de la colectividad, de conformidad con las disposiciones legales aplicables al ejercicio profesional.</p>
<p style="text-align: center;">CAPITULO III Formación, Capacitación y Actualización del Personal</p> <p>ARTICULO 77. La Secretaría de Salud del Estado, en coordinación con las autoridades educativas y con la participación de las instituciones de educación superior, recomendarán normas y criterios para la formación de recursos humanos para la salud.</p> <p>La Secretaría de Salud del Estado, sin perjuicio de la competencia que sobre la materia corresponda a las autoridades educativas, y en coordinación con ellas, así como con la participación de las instituciones de salud, establecerá las normas y criterios para la capacitación en cuanto a protección, contención y actualización de recursos humanos para la salud.</p>	<p style="text-align: center;">CAPÍTULO IV Formación, Capacitación y Actualización del Personal</p> <p>Artículo 77. La Secretaría de Salud del Estado, en coordinación con las autoridades educativas y con la participación de las instituciones de educación superior, recomendarán normas y criterios para la formación de recursos humanos para la salud.</p> <p>La Secretaría de Salud del Estado, sin perjuicio de la competencia que sobre la materia corresponda a las autoridades educativas, y en coordinación con ellas, así como con la participación de las instituciones de salud, establecerá las normas y criterios para la capacitación en cuanto a protección, contención y actualización de recursos humanos para la salud.</p>
<p>ARTICULO 78. Corresponde a la Secretaría de Salud del Estado, sin perjuicio de las atribuciones de las autoridades educativas en la materia, y en coordinación con éstas:</p> <p>I. Promover actividades tendientes a la formación, capacitación y actualización con perspectiva de género de los recursos humanos que se requieran, para la satisfacción de las necesidades del Estado en materia de salud;</p>	<p>Artículo 78. Corresponde a la Secretaría de Salud del Estado, sin perjuicio de las atribuciones de las autoridades educativas en la materia, y en coordinación con éstas:</p> <p>I. Promover actividades tendientes a la formación, capacitación y actualización</p>

<p>II. Apoyar la creación de centros de capacitación, protección, cuidado y actualización de los recursos humanos para la salud;</p> <p>III. Otorgar facilidades para la enseñanza y adiestramiento en servicio dentro de los establecimientos de salud, a las instituciones que tengan por objeto la formación, capacitación o actualización de profesionales, técnicos y auxiliares de la salud, de conformidad con las normas que rijan el funcionamiento de los primeros;</p> <p>IV. Promover la participación de profesionales, técnicos y auxiliares de la salud en actividades de personas docentes o técnicas;</p> <p>V. Incluir cursos y adiestramientos sobre la formación con perspectiva de género, derechos humanos de las mujeres y los hombres, y la no discriminación, y</p> <p>VI. Conforme al Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica, promover campañas y jornadas de capacitación y actualización dirigidas al personal no profesional de la salud que se desempeñan en las comunidades más alejadas y de difícil acceso del Estado.</p>	<p>con perspectiva de género de los recursos humanos que se requieran, para la satisfacción de las necesidades del Estado en materia de salud;</p> <p>II. Apoyar la creación de centros de capacitación, protección, cuidado y actualización de los recursos humanos para la salud;</p> <p>III. Otorgar facilidades para la enseñanza y adiestramiento en servicio dentro de los establecimientos de salud, a las instituciones que tengan por objeto la formación, capacitación o actualización de profesionales, técnicos y auxiliares de la salud, de conformidad con las normas que rijan el funcionamiento de los primeros;</p> <p>IV. Promover la participación de profesionales, técnicos y auxiliares de la salud en actividades de personas docentes o técnicas;</p> <p>V. Incluir cursos y adiestramientos sobre la formación con perspectiva de género, derechos humanos de las mujeres y los hombres, y la no discriminación, y</p> <p>VI. Conforme al Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica, promover campañas y jornadas de capacitación y actualización dirigidas al personal no profesional de la salud que se desempeñan en las comunidades más alejadas y de difícil acceso del Estado.</p>
<p>ARTICULO 79. La Secretaría de Salud del Estado coadyuvará en el ámbito de su competencia, con las autoridades e instituciones educativas, cuando éstas lo soliciten, para cubrir:</p> <p>I. Los requisitos para la apertura y funcionamiento de instituciones dedicadas a la formación de recursos humanos para la salud, en los diferentes niveles académicos y técnicos, y</p> <p>II. El perfil de los profesionales para la salud en sus etapas de formación.</p>	<p>Artículo 79. La Secretaría de Salud del Estado coadyuvará en el ámbito de su competencia, con las autoridades e instituciones educativas, cuando éstas lo soliciten, para cubrir:</p> <p>I. Los requisitos para la apertura y funcionamiento de instituciones dedicadas a la formación de recursos humanos para la salud, en los diferentes niveles académicos y técnicos, y</p>

	II. El perfil de los profesionales para la salud en sus etapas de formación.
ARTÍCULO 80. La Secretaría de Salud del Estado, en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales competentes, impulsarán y fomentarán la formación con perspectiva de género, capacitación, contención y actualización de los recursos humanos para los servicios de salud, de conformidad con los objetivos y prioridades de los sistemas Nacional y Estatal de Salud, de los programas educativos y de las necesidades de salud del Estado.	Artículo 80. La Secretaría de Salud del Estado, en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales competentes, impulsarán y fomentarán la formación con perspectiva de género, capacitación, contención y actualización de los recursos humanos para los servicios de salud, de conformidad con los objetivos y prioridades de los sistemas Nacional y Estatal de Salud, de los programas educativos y de las necesidades de salud del Estado.
ARTICULO 81. Los aspectos docentes del internado de pregrado y de las residencias de especialización, se regirán por lo que establezcan las instituciones de educación superior; de conformidad con las atribuciones que les otorguen las disposiciones que rigen su organización y funcionamiento, y lo que determinen las autoridades educativas competentes. La operación de los programas correspondientes en los establecimientos de salud, se llevará a cabo de acuerdo a los lineamientos establecidos por cada una de las instituciones de salud y lo que determine la Secretaría de Salud del Estado.	Artículo 81. Los aspectos docentes del internado de pregrado y de las residencias de especialización, se regirán por lo que establezcan las instituciones de educación superior; de conformidad con las atribuciones que les otorguen las disposiciones que rigen su organización y funcionamiento, y lo que determinen las autoridades educativas competentes. La operación de los programas correspondientes en los establecimientos de salud, se llevará a cabo de acuerdo a los lineamientos establecidos por cada una de las instituciones de salud y lo que determine la Secretaría de Salud del Estado.
ARTICULO 348. Las visitas ordinarias se efectuarán en días y horas hábiles; y las extraordinarias en cualquier tiempo. Para los efectos de esta Ley, tratándose de establecimientos industriales, comerciales o de servicios, se consideran horas hábiles las de su funcionamiento habitual o autorizado.	Artículo 348. Las visitas de verificación podrán ser ordinarias y extraordinarias. Las primeras se efectuarán en días y horas hábiles y las segundas en cualquier tiempo. ...
ARTICULO 350. Los verificadores en el ejercicio de sus funciones previo cumplimiento de las formalidades a que se refiere el artículo 111 de esta Ley, tendrán libre acceso a los edificios, establecimientos comerciales, de servicios, y en general a todos los lugares a que hace referencia la misma. Los propietarios, responsables, encargados u ocupantes de establecimientos o conductores de los	Artículo 350.

transportes objeto de verificación, estarán obligados a permitir el acceso y a dar facilidades e informes a los verificadores para el desarrollo de su labor.

En caso de que los propietarios, responsables, encargados u ocupantes de establecimientos o conductores de los transportes objeto de verificación, se nieguen a permitir el acceso o dar facilidades e informes a los verificadores, **la autoridad sanitaria, podrá hacer uso indistinto de cualquiera de las medidas de apremio previstas en el artículo 378 de esta Ley.**

ARTICULO 351. Las autoridades sanitarias con base en los resultados de la visita o del informe de verificación a que se refiere el artículo 345 de esta Ley, podrán dictar las medidas para corregir las irregularidades que se hubieren encontrado en los establecimientos, a que se refiere el artículo 5º. apartados A y B de la misma, notificándolas al interesado y dándole un plazo adecuado para su realización.

Artículo 351. Las autoridades sanitarias con base en los resultados del contenido del acta de verificación o del informe de verificación a que se refiere el artículo 345 de esta Ley, ***deberán notificar de manera personal al interesado o titular de la autorización sanitaria de que se trate, el dictamen sanitario correspondiente que deberá contener:***

I. El análisis de las anomalías encontradas y asentadas en el acta de verificación o del informe de verificación;

II. El plazo y acciones para corregir las anomalías detalladas en el acta de verificación o del informe de verificación;

III. La ratificación o remoción de la medida de seguridad a que haya habido lugar en la ejecución de la orden de verificación y que obre en el acta de verificación o del informe de verificación, y

IV. La imposición de alguna de las medidas de seguridad a que se refiere el numeral 358 de esta Ley, sin perjuicio de las que se hayan impuesto en la visita de verificación.

En caso de que el establecimiento cumpla con todos los requisitos que

	<p><i>esta Ley y demás disposiciones legales aplicables exijan para su funcionamiento, se le exhortará a proseguir con el cumplimiento de la normatividad aplicable, apercibido de que, en caso contrario, se hará acreedor a la imposición de cualquiera de las medidas de seguridad, así como a alguna de las sanciones administrativas establecidas en los artículos 358 y 380 de esta ley respectivamente.</i></p>
No tiene correlativo	<p><i>Artículo 352 Bis. Será objeto de videograbación, la visita de verificación a que se refiere el artículo 345 de esta Ley y se sujetará a lo dispuesto por el Reglamento Interior de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de San Luis Potosí.</i></p> <p><i>El verificador deberá recabar indistintamente el consentimiento del propietario, responsable o encargado u ocupante del establecimiento respectivo, para llevar a cabo la videograbación de la visita de verificación.</i></p> <p><i>El verificador, única y exclusivamente se enfocará y grabará lo correspondiente a la actuación de la visita de verificación.</i></p> <p><i>En caso de que indistintamente el propietario, responsable o encargado u ocupante del establecimiento respectivo, se niegue a otorgar su consentimiento para llevar a cabo la videograbación de la visita de verificación, el verificador, deberá suspender la videograbación de forma inmediata. Esta eventualidad, deberá constar en el acta de verificación o del informe de verificación.</i></p> <p><i>Esta negativa, no suspenderá, ni imposibilitará, ni invalidará la ejecución de la orden respectiva.</i></p>

<p>ARTICULO 353. ...</p> <p>I a II. ...</p> <p>III. Se obtendrán tres muestras del producto: una de ellas se dejará en poder de la persona con quien se entienda la diligencia para su análisis particular, previo sellado inviolable; la otra muestra podrá quedar en poder de la misma persona a disposición de la autoridad sanitaria competente, y tendrá el carácter de muestra testigo; la última será enviada por la autoridad sanitaria competente, al laboratorio autorizado y habilitado por ésta, para su análisis oficial;</p> <p>IV. El resultado del análisis oficial se notificará por escrito en forma personal o por correo certificado con acuse de recibo al interesado, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de la toma de muestras;</p> <p>V. En caso de desacuerdo con el resultado que se haya notificado, el interesado lo podrá impugnar dentro de un plazo de quince días hábiles a partir de la notificación de análisis oficial. Transcurrido este plazo sin que se haya impugnado el resultado del análisis oficial, éste quedará firme y la autoridad sanitaria competente procederá conforme a la fracción VII de este artículo, según corresponda;</p> <p>VI. Con la impugnación a que se refiere la fracción anterior, el interesado deberá acompañar el original del análisis particular que se hubiere practicado, a la muestra que haya sido dejada en poder de la persona con quien se entendió la diligencia de muestreo, así como, en su caso, la muestra testigo. Sin el</p>	<p>Artículo 353. ...</p> <p>I a II. ...</p> <p>III. Se obtendrán tres muestras del producto: una de ellas se dejará en poder de la persona con quien se entienda la diligencia para su análisis particular a su costa: la otra muestra podrá quedar en poder de la misma persona a disposición de la autoridad sanitaria competente previo sello inviolable y tendrá el carácter de muestra testigo; la última será enviada por la autoridad sanitaria competente, al laboratorio autorizado y habilitado por ésta, para su análisis oficial;</p> <p><i>El análisis particular descrito en el párrafo precedente, deberá realizarse dentro del plazo de 3 días naturales, siguientes a la fecha de la toma de muestras. Dicho plazo, será aplicable a lo dispuesto en el artículo 353 bis, contados a partir del día siguiente a la fecha en que la persona con quien se entendió la diligencia, le haya enviado, en condiciones adecuadas de conservación, copia del acta de verificación que consigne el muestreo realizado, así como las muestras que quedaron en su poder.</i></p> <p><i>La muestra testigo, deberá ser conservada en condiciones adecuadas según la naturaleza de la muestra, atendiendo a la normatividad oficial aplicable que corresponda, en caso contrario, esta no tendrá el carácter definitivo a que se refiere el último párrafo de la fracción VII de este artículo, prevaleciendo con tal carácter, el resultado del análisis oficial.</i></p> <p>IV. El resultado del análisis oficial se notificará por escrito en forma personal o por correo certificado con acuse de recibo al interesado o titular de la autorización</p>
---	--

cumplimiento de este requisito no se dará trámite a la impugnación, y el resultado del análisis oficial quedará firme;

VII. La impugnación presentada en términos de las fracciones anteriores dará lugar a que la autoridad sanitaria competente analice la muestra testigo, en un laboratorio que la misma señale en presencia de las partes interesadas. El resultado del análisis de la muestra testigo será en que el definitiva acredite si el producto en cuestión reúne o no los requisitos y especificaciones sanitarios exigidos, y

VIII. El resultado del análisis de la muestra testigo se notificará por escrito en forma personal o por correo certificado con acuse de recibo al interesado o titular de la autorización sanitaria de que se trate, y en caso de que el producto reúna los requisitos y especificaciones requeridos, la autoridad sanitaria procederá a otorgar la autorización que se haya solicitado o a ordenar el levantamiento de la medida de seguridad que se hubiera ejecutado, según corresponda.

sanitaria de que se trate, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de la toma de muestras;

V. En caso de desacuerdo con el resultado que se haya notificado, el interesado o titular de la autorización sanitaria de que se trate, lo podrá impugnar dentro de un plazo de quince días hábiles a partir de la notificación de análisis oficial. Transcurrido este plazo sin que se haya impugnado el resultado del análisis oficial, éste quedará firme y la autoridad sanitaria competente procederá conforme a la fracción VII de este artículo, según corresponda;

VI. Con la impugnación a que se refiere la fracción anterior, el interesado ***o titular de la autorización sanitaria de que se trate***, deberá acompañar el original del análisis particular que se hubiere practicado a la muestra que haya sido dejada en poder de la persona con quien se entendió la diligencia de muestreo, así como, en su caso, la muestra testigo. Sin el cumplimiento de este requisito no se dará trámite a la impugnación, y el resultado del análisis oficial quedará firme;

El análisis particular, deberá realizarse conforme a lo establecido en el segundo párrafo de la fracción III de este artículo.

En caso de no cumplir con este requisito, no se dará trámite a la impugnación, y el resultado del análisis oficial quedará firme;

VII. La impugnación presentada, previo cumplimiento de lo establecido en las fracciones anteriores, dará lugar a que el interesado o titular de la autorización sanitaria de que se trate, asumiendo los gastos que esto implique, solicite a la autoridad sanitaria competente, el

	<p><i>análisis de la muestra testigo, en un laboratorio que la misma señale.</i></p> <p><i>En el caso de insumos médicos, el análisis, se deberá realizar en un laboratorio autorizado por autoridad competente como laboratorio de control analítico auxiliar de la regulación sanitaria.</i></p> <p><i>El resultado del análisis de la muestra testigo será el que en definitiva acredite si el producto en cuestión reúne o no los requisitos y especificaciones sanitarias exigidos, y</i></p> <p>VIII. El resultado del análisis de la muestra testigo, se notificará por escrito en forma personal o por correo certificado con acuse de recibo al interesado o titular de la autorización sanitaria de que se trate y, en caso de que el producto reúna los requisitos y especificaciones requeridos, la autoridad sanitaria procederá a otorgar la autorización que se haya solicitado o a ordenar el levantamiento de la medida de seguridad que se hubiera ejecutado, según corresponda.</p> <p><i>Si el resultado a que se refiere la fracción anterior comprueba que el producto no satisface los requisitos y especificaciones sanitarios, la autoridad sanitaria procederá a dictar y ejecutar las medidas de seguridad sanitarias que procedan o a confirmar las que se hubieren ejecutado, a imponer las sanciones que correspondan y a negar o revocar, en su caso, la autorización de que se trate.</i></p>
No tiene correlativo	<p><i>Artículo 353 bis. Si la diligencia se practica en un establecimiento que no sea donde se fabrica o produce el producto o no sea el establecimiento del titular del registro, la persona con quien se entendió la diligencia, está obligada a enviar al mencionado titular, en condiciones adecuadas de</i></p>

	<p><i>conservación, dentro del término de tres días hábiles siguientes a la toma de muestras, copia del acta de verificación que consigne el muestreo realizado, así como las muestras que quedaron en su poder, a efecto de que tenga la oportunidad de realizar los análisis particulares y, en su caso, impugnar el resultado del análisis oficial, dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación de resultados.</i></p> <p><i>Si la persona con quien se entendió la diligencia, omite dar cumplimiento a la obligación a que se refiere el párrafo precedente o no conserva la muestra citada, dará lugar a que se constituya responsable solidario del titular.</i></p> <p><i>El procedimiento de muestreo no impide que la autoridad sanitaria competente dicte y ejecute las medidas de seguridad sanitarias que procedan, en cuyo caso se asentará en el acta de verificación las que se hubieren ejecutado, y los productos que comprenda.</i></p>
<p>ARTICULO 354. En el caso de toma de muestras de productos perecederos debe conservarse en condiciones óptimas para evitar su descomposición, su análisis deberá iniciarse dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la hora en que se recogieron.</p> <p>El resultado del análisis se notificará por escrito en forma personal al interesado, dentro de los quince días hábiles siguientes contados a partir de la fecha en que se hizo la verificación.</p> <p>El particular podrá impugnar el resultado del análisis en un plazo de tres días contados a partir de la notificación, en cuyo caso se procederá en los términos de las fracciones VI y VII del artículo anterior.</p> <p>Transcurrido este plazo sin que se haya impugnado el resultado del análisis oficial, éste quedará firme.</p>	<p>Artículo 354. En el caso de toma de muestras de productos perecederos debe conservarse en condiciones óptimas para evitar su descomposición, su análisis deberá iniciarse dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la hora en que se recogieron.</p> <p>El resultado del análisis se notificará por escrito en forma personal al <i>interesado o titular de la autorización sanitaria de que se trate</i>, dentro de los quince días hábiles siguientes contados a partir de la fecha en que se hizo la verificación. El particular podrá impugnar el resultado del análisis en un plazo de tres días contados a partir de la notificación, en cuyo caso se procederá en los términos de las fracciones VI y VII del artículo anterior.</p>

	...
<p>ARTICULO 366. La suspensión de trabajos o servicios será temporal. Podrá ser total o parcial y se aplicará por el tiempo estrictamente necesario, para corregir las irregularidades que pongan en peligro la salud de las personas. Se ejecutarán las acciones necesarias que permitan asegurar la referida suspensión.</p> <p>Esta será levantada a instancias del interesado o por la propia autoridad que la ordenó, cuando cese la causa por la cual fue decretada. Durante la suspensión se podrá permitir el acceso de las personas que tengan encomendada la corrección de las irregularidades que la motivaron.</p>	<p>Artículo 366. La suspensión de trabajos o servicios será temporal. Podrá ser total o parcial y se aplicará por el tiempo estrictamente necesario, para corregir las irregularidades que pongan en peligro la salud de las personas. Se ejecutarán las acciones necesarias que permitan asegurar la referida suspensión. Esta será levantada a petición del interesado o titular de la autorización sanitaria de que se trate o por la propia autoridad que la ordenó, cuando cese la causa por la cual fue decretada.</p> <p>Durante la suspensión, se podrá permitir el acceso de las personas que tengan encomendada la corrección de las irregularidades que la motivaron o cuando sea necesario llevar a cabo alguna actividad indispensable para el mantenimiento de equipos o infraestructura, previa solicitud por escrito de la persona interesada o titular de la autorización sanitaria de que se trate.</p>
No tiene correlativo	<p>Artículo 366 bis. La autoridad sanitaria en el ámbito de su competencia, podrá hacer uso de cualquiera de las medidas de apremio señaladas en el artículo 378, cuando existan indicios de que en algún local o casa habitación se realice cualquier actividad que ponga en peligro la salud de las personas.</p>
<p>ARTICULO 368. El aseguramiento de objetos, productos o sustancias, tendrá lugar cuando se presuma que pueden ser nocivos para la salud de las personas, o carezcan de los requisitos esenciales que se establezcan en las disposiciones legales aplicables.</p> <p>La autoridad sanitaria podrá retenerlos o dejarlos en depósito hasta en tanto se determine, previo dictamen de laboratorio acreditado, cuál será su destino. Si el dictamen indicara que el bien asegurado no es nocivo, pero carece de los requisitos esenciales establecidos en esta Ley y demás disposiciones generales aplicables, la autoridad sanitaria concederá al interesado un plazo hasta de treinta días para que</p>	<p>Artículo 368. El aseguramiento de objetos, productos o sustancias, tendrá lugar cuando se presuma que pueden ser nocivos para la salud de las personas, o carezcan de los requisitos esenciales que se establezcan en las disposiciones legales aplicables. La autoridad sanitaria podrá retenerlos o dejarlos en depósito hasta en tanto se determine, previo dictamen del laboratorio autorizado y habilitado por ésta, cuál será su destino.</p>

tramite el cumplimiento de los requisitos omitidos. Si dentro de este plazo el interesado no realizara el trámite indicado, o no gestionara la recuperación acreditando el cumplimiento de lo ordenado por la autoridad sanitaria, se entenderá que la materia del aseguramiento causa abandono, y quedará a disposición de la autoridad sanitaria para su aprovechamiento lícito.

Si del dictamen resultara que el bien asegurado es nocivo, la autoridad sanitaria, dentro del plazo establecido en el párrafo anterior y previo la observancia de la garantía de audiencia, podrá determinar que el interesado y bajo la vigilancia de aquélla, someta el bien asegurado a un tratamiento que haga posible su legal aprovechamiento de ser posible, en cuyo caso y previo el dictamen de la autoridad sanitaria, el interesado podrá disponer de los bienes que haya sometido a tratamiento para destinarlos a los fines que la propia autoridad señale.

Los productos perecederos asegurados que se descomponen en poder de la autoridad sanitaria, así como los objetos, productos o sustancias que se encuentren en evidente estado de descomposición, adulteración o contaminación, que no los hagan aptos para su consumo, serán destruidos de inmediato por la autoridad sanitaria, la que levantará un acta circunstanciada de la destrucción.

Los productos perecederos que no se reclamen por los interesados dentro de las veinticuatro horas que hayan sido asegurados, quedarán a disposición de la autoridad sanitaria, la que los entregara para su aprovechamiento, de preferencia a instituciones de asistencia social, públicos o privados.

Si el dictamen indicara que el bien asegurado no es nocivo, pero carece de los requisitos esenciales establecidos en esta Ley y demás disposiciones generales aplicables, la autoridad sanitaria concederá al interesado un plazo hasta de treinta días para que tramite el cumplimiento de los requisitos omitidos.

Si dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, el interesado o titular de la autorización sanitaria de que se trate, no realizará el trámite indicado, o no gestionará la recuperación acreditando el cumplimiento de lo ordenado por la autoridad sanitaria, se entenderá que la materia del aseguramiento causa abandono, y quedará a disposición de la autoridad sanitaria para su aprovechamiento lícito.

Si del dictamen resultara que el bien asegurado es nocivo para la salud, la autoridad sanitaria, dentro del **plazo establecido en el segundo párrafo de este artículo** y previo la observancia de la garantía de audiencia, podrá determinar que el interesado **o titular de la autorización sanitaria de que se trate** y bajo la vigilancia de aquélla, someta el bien asegurado a un tratamiento que haga posible su legal aprovechamiento de ser posible, en cuyo caso y previo el dictamen de la autoridad sanitaria, el interesado podrá disponer de los bienes que haya sometido a tratamiento para destinarlos a los fines que la propia autoridad señale.

	<p>Los productos perecederos que no se reclamen por la persona interesada o titular de la autorización sanitaria de que se trate, dentro de las veinticuatro horas que hayan sido asegurados, quedarán a disposición de la autoridad sanitaria, la que los entregará para su aprovechamiento, de preferencia a instituciones de asistencia social, públicos o privados.</p>
<p>No tiene correlativo</p>	<p>Artículo 368 Bis. Será procedente la acción de aseguramiento prevista en el artículo 368 de esta Ley como medida de seguridad, para el caso de que se comercialicen remedios herbolarios, suplementos alimenticios o productos cosméticos que indebidamente hubieren sido publicitados o promovidos indebidamente como medicamentos o a los cuales se les hubiera atribuido cualidades o efectos terapéuticos, presentándolos como una solución definitiva en el tratamiento preventivo o de rehabilitación de un determinado padecimiento, sin que los mismos cuenten con registro sanitario para ser considerados como tales.</p>
<p>ARTICULO 370. El procedimiento administrativo podrá iniciarse a petición de parte interesada; o de oficio como lo prevé el Título Décimo Quinto de esta Ley.</p>	<p>Artículo 370. El procedimiento administrativo podrá iniciarse de oficio o a petición de parte como lo prevén los Títulos Décimo Cuarto y Décimo Quinto de esta Ley.</p>
<p>ARTICULO 371. Derivado de las irregularidades sanitarias que reporte el acta o informe de verificación, la autoridad sanitaria competente citará por escrito al interesado personalmente o por correo certificado con acuse de recibo, para que dentro de un plazo no menor de cinco, ni mayor de treinta días naturales comparezca a manifestar lo que a su derecho convenga; ofrezca y desahogue las pruebas que estime procedentes en relación con los hechos asentados en el acta o informe de verificación según el caso. Al efecto serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la de absolver posiciones. Tratándose del informe de verificación, la autoridad sanitaria competente deberá acompañar al citatorio invariablemente copia de aquél.</p>	<p>Artículo 371. Derivado de las irregularidades sanitarias que reporte el acta de verificación o del informe de verificación o dictamen sanitario, la autoridad sanitaria competente, notificará por escrito a la persona interesada o titular de la autorización sanitaria de que se trate, personalmente o por correo certificado con acuse de recibo, para que dentro de un plazo no menor de cinco ni mayor de treinta días naturales, comparezca a manifestar lo</p>

	<p>que a su derecho convenga; ofrezca y desahogue las pruebas que estime procedentes en relación con los hechos asentados en el acta de verificación o del informe de verificación o dictamen sanitario según el caso. Al efecto serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones. Tratándose del acta de verificación o del informe de verificación o del dictamen, la autoridad sanitaria competente, deberá acompañar al citatorio invariablemente copia de aquél.</p>
<p>ARTICULO 373. En caso de que el presunto infractor no compareciera dentro del plazo fijado por el artículo 371 de esta Ley, se procederá a decretar la rebeldía y a pronunciar la resolución definitiva, notificándola por escrito personalmente o por correo certificado con acuse de recibo.</p>	<p>Artículo 373. En caso de que el presunto infractor no compareciera dentro del plazo fijado por el artículo 371 de esta Ley, se procederá a decretar la rebeldía y a pronunciar la resolución definitiva en el plazo establecido en el artículo anterior, notificándola por escrito personalmente o por correo certificado con acuse de recibo.</p>
<p>ARTICULO 377. La resolución que pronuncie la autoridad sanitaria competente, se hará saber por escrito al interesado dentro del plazo que marca la ley; en caso de no existir éste, dentro de un plazo no mayor de cuatro meses, contados a partir de la recepción de la solicitud del particular.</p>	<p>Artículo 377. La resolución que pronuncie la autoridad sanitaria competente, se hará saber por escrito al interesado o titular de la autorización sanitaria de que se trate, dentro del plazo que marca la ley; en caso de no existir éste, dentro de un plazo no mayor de cuatro meses, contados a partir del día hábil siguiente a aquel en que fenezca el plazo establecido en el artículo 372.</p>
<p>ARTICULO 378. Las autoridades sanitarias competentes harán uso de las medidas legales necesarias, incluyendo el auxilio de la fuerza pública, para lograr la ejecución de las sanciones y medidas de seguridad que procedan.</p>	<p>Artículo 378. Para hacer cumplir sus determinaciones en todo procedimiento, incluyendo las visitas de verificación sanitaria, ejecución de sanciones y medidas de seguridad, las autoridades sanitarias competentes, podrán hacer uso, indistintamente, de las siguientes medidas de apremio:</p> <p>I. Multa;</p> <p>II. Auxilio de la fuerza pública que deberán prestar las autoridades policiacas estatales o municipales, y</p>

	III. Rompimiento de chapas y cerraduras de las puertas de cualquier local o casa habitación.
<p>ARTICULO 380. Las sanciones administrativas podrán ser:</p> <ul style="list-style-type: none"> I. Amonestación o apercibimiento; II. Multa de hasta mil veces de la unidad de medida y actualización vigente; III. Clausura temporal o definitiva, que podrá ser parcial o total, y IV. Arresto hasta por treinta y seis horas. 	<p>Artículo 380. Las sanciones administrativas podrán ser:</p> <p>I ...</p> <p>II. Multa;</p> <p>III y IV. ...</p>
<p>ARTÍCULO 382. Se sancionará con multa equivalente hasta veinte veces la unidad de medida y actualización vigente, la violación a las disposiciones contenidas en los artículos, 75, 89, 105, 108, 121, 182, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 247, 304 QUINQUE, 309, 310, 311, 321, 322, 323, 342 y 344 de esta Ley.</p>	<p>Artículo 382: Se sancionará con multa de hasta dos mil veces la unidad de medida y actualización vigente, la violación a las disposiciones contenidas en los artículos, 75, 89, 105, 108, 121, 182, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 247, 304 QUINQUE, 309, 310, 311, 321, 322, 323, 342 y 344 de esta Ley.</p>
<p>ARTÍCULO 383. Se sancionará con multa equivalente de veinte hasta cien veces la unidad de medida y actualización vigente, la violación a las disposiciones contenidas en los artículos, 44 párrafo segundo, 100, 109, 110, 111, 116, 117, 199, 200, 204, 205, 206, 215, 216, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 265, 266, 267, 268, 271, 272, 274, 213 y 300 de esta Ley.</p>	<p>Artículo 383. Se sancionará con multa de hasta seis mil veces la unidad de medida y actualización vigente, la violación a las disposiciones contenidas en los artículos, 44 párrafo segundo, 100, 109, 110, 111, 116, 117, 199, 200, 204, 205, 206, 215, 216, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 265, 266, 267, 268, 271, 272, 274, 213 y 300 de esta Ley.</p> <p>La violación a las disposiciones contenidas en los artículos, 144, 145, 317, 318, 319, 350, 362, 363, 364 y 365 de esta Ley, se sancionará con multa de hasta doce mil veces la unidad de medida y actualización vigente.</p>
<p>ARTÍCULO 384. Se sancionará con multa equivalente de doscientos y hasta mil veces la unidad de medida y actualización vigente, la violación a las disposiciones contenidas en los artículos, 57 párrafo último, 84, 86, 87, 276, 278, 279, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 302, 304, 305 y 388 de esta Ley.</p>	<p>Artículo 384. Se sancionará con multa de hasta veinte mil veces la unidad de medida y actualización vigente, la violación a las disposiciones contenidas en los artículos, 57 párrafo último, 84, 86, 87, 276, 278, 279, 281, 282, 283, 284,</p>

	285, 286, 302, 304, 305, 358 y 388 de esta Ley.
	Artículo 384 bis. Se sancionará con multa de hasta dieciséis mil veces la unidad de medida y actualización vigente e inhabilitación de siete a diez años, en el desempeño de empleo, profesión o cargo público, a quien infrinja las disposiciones contenidas en el Título Tercero, Título Tercero Bis y Título Cuarto de esta Ley, o la cancelación de Cédula con Efectos de Patente, la concesión o autorización respectiva según sea el caso. Lo anterior, sin afectar el derecho del o los afectados, de presentar denuncia por el delito o delitos de que se trate.
ARTÍCULO 385. Las infracciones no previstas en este capítulo serán sancionadas con multa de hasta quinientas veces la unidad de medida y actualización vigente, atendiendo a las reglas de calificación que se establecen en el artículo 381 de esta Ley.	Artículo 385. Las infracciones no previstas en este capítulo serán sancionadas con multa de hasta dieciséis mil veces la unidad de medida y actualización vigente , atendiendo a las reglas de calificación que se establecen en el artículo 381 de esta Ley.
ARTICULO 388. ... I a III ... IV. Cuando se lleve a cabo alguno de los supuestos previstos en el artículo 71 BIS de esta Ley. Así como las normas y disposiciones que del mismo se deriven, y V. Cuando por la peligrosidad de las actividades que se realicen o por la naturaleza del establecimiento, local, fábrica, construcción o edificio de que se trate, sea necesario proteger la salud de la población.	Artículo 388. ... I a III. ... IV. Cuando se lleve a cabo alguno de los supuestos previstos en el artículo 71 BIS de esta Ley. Así como las normas y disposiciones que del mismo se deriven; V. Cuando por la peligrosidad de las actividades que se realicen o por la naturaleza del establecimiento, local, fábrica, construcción o edificio de que se trate, sea necesario proteger la salud de la población; VI. Cuando se compruebe que las actividades que se realicen en un establecimiento violan las disposiciones sanitarias, constituyendo un peligro grave para la salud, y

	VII. Por reincidencia en tercera ocasión.
<p>ARTICULO 391. Contra actos y resoluciones que dicten las autoridades sanitarias del Estado, que con motivo de la aplicación de esta Ley den fin a una instancia o resuelvan un expediente, los interesados podrán interponer el recurso de revisión, o el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de San Luis Potosí.</p>	<p>TÍTULO DECIMO SEXTO DEL PROCEDIMIENTO PARA APLICAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SANCIONES</p> <p>CAPÍTULO III Recurso de Revisión</p> <p>Artículo 391. Contra actos y resoluciones que dicten las autoridades sanitarias del Estado, que con motivo de la aplicación de esta Ley den fin a una instancia o resuelvan un expediente, los interesados podrán interponer el recurso de revisión, para lo cual deberá estarse a lo estipulado en el Libro Primero, Título Segundo, Capítulo VIII, Sección Primera, Apartado I, II, III y IV del Código Procesal Administrativo para el Estado de San Luis Potosí o el juicio de nulidad ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de San Luis Potosí.</p>
<p>ARTICULO 392. El plazo para interponer el recurso será de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que se hubiere notificado la resolución o acto que se recurra.</p>	DEROGADO
<p>ARTICULO 393. La oposición a los actos de trámite en un procedimiento administrativo, se hará valer en todo caso al impugnar la resolución definitiva.</p>	Se deroga
<p>ARTICULO 394. El afectado podrá impugnar los actos administrativos recurribles que no hayan sido notificados, o lo hubieren sido sin apegarse a lo dispuesto en esta Ley, conforme a las siguientes reglas:</p> <p>I. Si el particular afirma conocer el acto administrativo materia de la notificación, la impugnación contra la misma se hará valer mediante la interposición del recurso administrativo correspondiente, en el que manifestará la fecha en que lo conoció; en caso de que también impugne el acto administrativo, los agravios se expresarán en el citado recurso, conjuntamente con los que se acumulen contra la notificación;</p> <p>II. Si el particular niega conocer el acto manifestará tal desconocimiento, interponiendo el recurso administrativo correspondiente ante la autoridad correspondiente ante la autoridad competente para notificar dicho acto. La</p>	Se deroga

<p>citada autoridad le dará a conocer el acto junto con la notificación que del mismo se hubiere practicado, para lo cual el particular señalará en el escrito del propio recurso, el domicilio en el que se deba dar a conocer y el nombre de la persona autorizada para recibirlo, en su caso. Si no se señalare domicilio, la autoridad dará a conocer el acto mediante notificación por edictos; si no se señalare persona autorizada, se hará mediante notificación personal. El particular tendrá un plazo de quince días a partir del día siguiente a aquél en que la autoridad se los haya dado a conocer, para ampliar el recurso administrativo, impugnando el acto y su notificación, o cualquiera de ellos según sea el caso;</p> <p>III. La autoridad competente para resolver el recurso administrativo estudiará los agravios expresados contra la notificación, previamente al examen de la impugnación que, en su caso, se haya hecho del acto administrativo;</p> <p>IV. Si se resuelve que no hubo notificación o que ésta no fue efectuada conforme a lo dispuesto por la presente Ley, se tendrá al recurrente como sabedor del acto administrativo desde la fecha en que manifestó conocerlo, o en que se le dio a conocer en los términos de la fracción II del presente artículo, quedando sin efectos todo lo actuado con base en aquélla y procederá al estudio de la impugnación que, en su caso, hubiese formulado en contra de dicho acto, y</p> <p>V. Si resuelve que la notificación fue legalmente practicada y, como consecuencia de ello, la impugnación contra el acto se interpuso extemporáneamente, desechará dicho recurso.</p>	
<p>ARTICULO 395. El escrito de interposición del recurso de revisión deberá presentarse ante la autoridad que emitió el acto impugnado, y expresará:</p> <p>I. El órgano administrativo a quien se dirige;</p> <p>II. El nombre del recurrente, y del tercero perjudicado si lo hubiere, así como el lugar que señale para efectos de notificaciones;</p> <p>III. El acto que se recurre y fecha en que se le notificó, o tuvo conocimiento del mismo;</p> <p>IV. La descripción de los hechos antecedentes de la resolución que se recurre;</p> <p>V. Los agravios que se causan, y</p> <p>VI. Las pruebas que se ofrezcan, relacionándolas con los hechos que se mencionen.</p>	<p>Se deroga</p>

<p>ARTICULO 396. Con el escrito mediante el cual se interponga el recurso se deberán acompañar los siguientes documentos:</p> <p>I. Los que acrediten la personalidad del promovente, cuando actúe a nombre de otro o de persona moral, salvo que ya la tenga reconocida por la autoridad que emitió el acto o la resolución impugnada;</p> <p>II. El documento en donde conste el acto o la resolución recurridos, cuando dicha actuación haya sido por escrito, tratándose de actos que por no haberse resuelto en tiempo se entiendan negados, deberá acompañarse el escrito de iniciación del procedimiento, o el documento sobre el cual no hubiere recaído resolución alguna;</p> <p>III. La constancia de notificación del acto impugnado; si la notificación fue por edictos se deberá acompañar la última publicación, o la manifestación bajo protesta de decir verdad, de la fecha en que se tuvo conocimiento de la resolución, y</p> <p>IV. Las pruebas que se acompañan.</p>	<p>Se deroga</p>
<p>ARTICULO 397. Al recibir el recurso, la autoridad sanitaria correspondiente verificará si éste es procedente, y si fue interpuesto en tiempo debe admitirlo o, en su caso, requerir al promovente para que lo aclare, concediéndole al efecto un término de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que se hubiera notificado.</p> <p>En el caso de que el recurrente no diere cumplimiento al requerimiento efectuado, o cuando la autoridad sanitaria advierta la existencia de una causa notoria de improcedencia, se desechará el recurso.</p>	<p>Se deroga</p>
<p>CAPITULO IV De la Substanciación</p>	<p>CAPITULO IV De la Substanciación Se deroga</p>
<p>ARTICULO 398. En la substanciación del recurso se admitirá toda clase de pruebas, excepto la testimonial y la de confesión de las autoridades mediante absolución de posiciones. No se considerará comprendida en esta prohibición la petición de informes a las autoridades sanitarias, respecto de hechos que consten en sus expedientes o de documentos agregados a ellos.</p> <p>Para el desahogo de las pruebas se dispondrá de un término de treinta días hábiles contados a partir de la fecha en que hayan sido admitidas; concluido el término para el desahogo de las pruebas, se dictará la resolución correspondiente en el término de quince días hábiles. Si el recurrente no hubiere ofrecido pruebas que ameriten desahogo especial, la resolución se dictará dentro del término de quince días hábiles, contados a partir de la fecha de admisión del recurso.</p>	<p>Se deroga</p>

<p>ARTICULO 399. Las autoridades sanitarias estatales en el ámbito de su competencia, resolverán los recursos que se interpongan de conformidad con esta Ley y, al efecto, podrán confirmar, modificar o revocar el acto o resolución que se haya combatido.</p> <p>Estas autoridades en uso de las facultades que les confiere la legislación aplicable, podrán delegar la atribución, debiéndose publicar el acuerdo respectivo en el Periódico Oficial del Estado.</p>	<p>Se deroga</p>
<p>ARTICULO 400. A solicitud de los particulares que se consideren afectados por alguna resolución o acto de las autoridades sanitarias, éstas los orientarán sobre el derecho de recurrir la resolución o acto de que se trate, y sobre la tramitación del recurso.</p>	<p>Se deroga</p>
<p>CAPITULO V De la Suspensión</p>	<p>CAPITULO V De la Suspensión Se deroga</p>
<p>ARTICULO 401. La interposición del recurso suspenderá la ejecución de las sanciones pecuniarias, si el infractor garantiza el interés fiscal. Tratándose de otro tipo de actos o resoluciones, la interposición del recurso suspenderá su ejecución; siempre y cuando se satisfagan los siguientes requisitos:</p> <ul style="list-style-type: none"> I. Que lo solicite el recurrente o su representante legal; II. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravenga disposiciones de orden público, y III. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al recurrente, con la ejecución del acto o resolución combatida. 	<p>Se deroga</p>
<p>ARTICULO 402. En la tramitación y substanciación del recurso de inconformidad, se aplicará supletoriamente el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí, y el Código Fiscal del Estado.</p>	<p>Se deroga</p>
<p>ARTICULO 403. Contra las resoluciones dictadas en los recursos administrativos, procede el juicio de nulidad ante el Tribunal Estatal de lo Contencioso Administrativo</p>	<p>Se deroga</p>

SEXTO. Que una vez analizada la iniciativa motivo del presente Dictamen, la misma contiene los siguientes alcances:

1. Amplía para quienes ejerzan en forma pública o privada las actividades profesionales en materia de salud, consignen en los documentos y papelería información relacionada con la institución que le expidió sus títulos.
2. Establece la obligación de las personas profesionales de la salud contar con certificación y recertificación del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, conforme a la normatividad federal.

3. Con el propósito de garantizar que la realización de cualquier procedimiento médico quirúrgico de especialidad, los profesionales de la salud que lo ejerzan deberán acreditar su legal ejercicio de la profesión, capacidad y experiencia.
4. Establece como requisito indispensable que los profesionales de la salud que realicen la práctica de la cirugía plástica, estética deberá de efectuarse en lugares con licencia sanitaria vigente, además de que la publicidad los profesionistas deberá contener los requisitos que lo acrediten en su legal ejercicio y profesionalismo.
5. Implementa la obligación por parte de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de San Luis Potosí, realizar la videograbación de las visitas de verificación sanitaria, medio que permitirá vigilar el acto de molestia la cual será una prueba tangible del compromiso de la autoridad sanitaria de combatir todo acto de corrupción. De igual forma, se dota a la ciudadanía con un medio de prueba adicional para ejercer su derecho de audiencia y demostrar la legalidad o ilegalidad de la visita de verificación o actos de corrupción en su caso.
6. Se armonizan las sanciones en materias de multas con relación a la Ley General de Salud.
7. Se propone eliminar el capítulo prevé lo relativo al recurso de revisión que los propietarios de los establecimientos sujetos, toda vez de que dicho recurso, ya se encuentra previsto por el Código Procesal Administrativo para el Estado de San Luis Potosí, el cual, es aplicable de manera supletoria a los actos, procedimientos y resoluciones previstos en Ley de Salud del Estado.

SÉPTIMO. Que para efectos de la presente iniciativa, la misma se encuentra directamente relacionada con los Derechos del Paciente, pues se deben generar las condiciones de seguridad y certeza jurídica para que el paciente reciba servicios especializados por parte de las personas profesionales de la salud.

En la Ley General de Salud se establece que las personas usuarias de los servicios de los profesionales de la salud, tienen derecho de obtener prestaciones oportunas y de calidad idónea y de recibir atención profesional y éticamente responsable, así como de obtener trato respetuoso, digno de los profesionales, de los técnicos y de los auxiliares que se dediquen a la salud.

De tal suerte, que con la presente reforma se pretende garantizar al paciente que el profesional de la salud proporcione atención médica especializada, plenamente identificada y trato digno al mismo, que para efectos del presente dictamen, entiéndase por Derechos del Paciente, lo siguiente:

“1. Recibir atención médica adecuada.

El paciente tiene derecho a que la atención médica se le otorgue por personal preparado de acuerdo a las necesidades de su estado de salud y a las circunstancias en que se brinda la atención; así como a ser informado cuando requiera referencia a otro médico.

2. Recibir trato digno y respetuoso.

El paciente tiene derecho a que el médico, la enfermera y el personal que le brinden atención médica, se identifiquen y le otorguen un trato digno, con respeto a sus convicciones personales y morales, principalmente las relacionadas con sus condiciones socioculturales, de género, de pudor y a su intimidad, cualquiera que sea el padecimiento que presente, y se haga extensivo a los familiares o acompañantes.

3. Recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz.

El paciente, o en su caso el responsable, tienen derecho a que el médico tratante les brinde información completa sobre el diagnóstico, pronóstico y tratamiento; se exprese siempre en forma clara y comprensible; se brinde con oportunidad con el fin de favorecer el conocimiento pleno del estado de salud del paciente y sea siempre veraz, ajustada a la realidad.

4. Decidir libremente sobre su atención.

El paciente, o en su caso el responsable, tienen derecho a decidir con libertad, de manera personal y sin ninguna forma de presión, aceptar o rechazar cada procedimiento diagnóstico o terapéutico ofrecido, así como el uso de medidas extraordinarias de supervivencia en pacientes terminales.

5. Otorgar o no su consentimiento válidamente informado.

El paciente, o en su caso el responsable, en los supuestos que así lo señale la normativa, tiene derecho a expresar su consentimiento, siempre por escrito, cuando acepte sujetarse con fines de diagnóstico o terapéuticos, a procedimientos que impliquen un riesgo, para lo cual deberá ser informado en forma amplia y completa en qué consisten, de los beneficios que se esperan, así como de las complicaciones o eventos negativos que pudieran presentarse a consecuencia del acto médico. Lo anterior incluye las situaciones en las cuales el paciente decida participar en estudios de investigación o en el caso de donación de órganos.

6. Ser tratado con confidencialidad.

El paciente tiene derecho a que toda la información que exprese a su médico, se maneje con estricta confidencialidad y no se divulgue más que con la autorización expresa de su parte, incluso la que derive de un estudio de investigación al cual se haya sujetado de manera voluntaria; lo cual no limita la obligación del médico de informar a la autoridad en los casos previstos por la ley.

7. Contar con facilidades para obtener una segunda opinión.

El paciente tiene derecho a recibir por escrito la información necesaria para obtener una segunda opinión sobre el diagnóstico, pronóstico o tratamiento relacionados con su estado de salud. Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica.

8. Recibir atención médica en caso de urgencia.

Cuando está en peligro la vida, un órgano o una función, el paciente tiene derecho a recibir atención de urgencia por un médico, en cualquier establecimiento de salud, sea público o privado, con el propósito de estabilizar sus condiciones.

9. Contar con un expediente clínico.

El paciente tiene derecho a que el conjunto de los datos relacionados con la atención médica que reciba sean asentados en forma veraz, clara, precisa, legible y completa en un expediente que deberá cumplir con la normativa aplicable y cuando lo solicite, obtener por escrito un resumen clínico veraz de acuerdo al fin requerido..

10. Ser atendido cuando se inconforme por la atención médica recibida.

El paciente tiene derecho a ser escuchado y recibir respuesta por la instancia correspondiente cuando se inconforme por la atención médica recibida de servidores públicos o privados. Así mismo tiene derecho a disponer de vías alternas a las judiciales para tratar de resolver un conflicto con el personal de salud”¹.

Cabe mencionar que de la revisión a la misma, se desprende que las disposiciones que a continuación se enuncian, son armonizaciones con la normativa general.

Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí	Ley General de Salud
ARTÍCULO 71	ARTÍCULO 83
ARTÍCULO 71. SEXIES	ARTÍCULO 81
ARTÍCULO 71 SEPTIES	ARTÍCULO 81
ARTÍCULO 71 OCTIES	ARTÍCULO 272 bis
ARTÍCULO 71 NONIES	ARTÍCULO 272 bis
ARTÍCULO 71 DECIES	ARTÍCULO 272 bis
ARTÍCULO 71 UNDECIES	ARTÍCULO 272 bis
ARTÍCULO 71 DUODECIES	ARTÍCULO 272 bis
ARTÍCULO 351 BIS	ARTÍCULO 401 bis
ARTÍCULO 353	ARTÍCULO 401 bis

¹ <https://www.gob.mx/salud/hospitalgea/articulos/derechos-generales-de-los-pacientes-diciembre-2001> (Consultada 12 de febrero de 2024)

Por cuanto hace al contenido del artículo 382, se requiere precisar la observación del principio de taxatividad con respecto a la multa mínima que se debe establecer por la violación a las disposiciones ahí enlistadas, lo que resulta aplicable para los demás dispositivos a modificar. Además se concluye la remisión errónea del artículo 75 vigente por el 49, así como la adición de los artículos 71 Quince y 71 Sexies.

Tocante al artículo 383 se observa que el numeral 44 sólo consta de un párrafo, y que 213 no guarda relación con alguna conducta que se pretenda sancionar.

Por cuanto hace al artículo 384 Bis, es pertinente destacar que las disposiciones contenidas en el Título Tercero y Título Tercero Bis no son concomitantes con los actos a castigar; no así lo relativo al Título Cuarto específicamente el Capítulo Segundo y los arábigos 71 Septies, 71 Octies, 71 Nonies párrafo último, 71 Undecies y 71 Duodecies que se plantea adicionar, atendiendo al principio de proporcionalidad de las sanciones.

En lo referente al dispositivo 388 y su fracción VII se considera que la conducta reincidente es única y exclusivamente la que se comete por reiteración por lo que, no es dable mencionar que la misma se ejecute por tercera ocasión.

En lo concerniente al ordinal 391, se observa la pertinencia de especificar que el recurso de revisión efectivamente se estipula en el libro primero, Título Segundo, Capítulo Octavo y la Sección Primera, por lo que no es necesario mencionar los apartados, primero, segundo, tercero y cuarto, del Código Procesal Administrativo para el Estado de San Luis Potosí.

Por lo expuesto, las comisiones de, Salud y Asistencia Social; y Justicia con fundamento en lo establecido en los artículos, 61, y 64, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 15 fracción XXI, 84 fracción I, 98 fracción XVI y 114, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de San Luis Potosí; 61, 62, y 85, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, emiten el siguiente

DICTAMEN

ÚNICO. Es de aprobarse y se aprueba con modificaciones la iniciativa descrita en el preámbulo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las presentes reformas tienen su base en los pilares de transparencia y política anticorrupción que hoy en día, son parte de la Política de los Servicios de Salud del Estado de San Luis Potosí, por lo que su objetivo principal es reducir el riesgo de corrupción e incrementar la confianza de la ciudadanía en las actividades que desempeña esta institución pública, conforme a los siguientes planteamientos de modificación y adición.

Se amplía la obligación para quienes ejerzan en forma pública o privada las actividades profesionales, relacionadas con las ciencias biológicas, químicas, de la salud y sus ramas, de consignar en los documentos y papelería que utilicen en el ejercicio de sus actividades información

relacionada con la institución que le expidió sus títulos, diplomas y certificados de licenciatura o especialidad, y cédulas profesionales.

Se precisa que la obligación de los profesionales de la medicina que ejerzan en forma pública o privada las actividades y especialidades referidas anteriormente, de contar con certificación y recertificación, estará a cargo de manera primaria del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, conforme a la normatividad federal, y en el caso del Consejo de Especialidades Médicas, podrá continuar con la atribución siempre y cuando tengan la declaratoria de idoneidad y que estén reconocidos por el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, constituido por la Academia Nacional de Medicina de México, la Academia Mexicana de Cirugía y los Consejos de Especialidad miembros.

Se incorpora un capítulo al título cuarto, denominado ejercicio especializado de la cirugía, con el propósito de garantizar que en la realización de cualquier procedimiento médico quirúrgico de especialidad, los profesionales que lo ejerzan deberán de acreditar su legal ejercicio de la profesión, capacidad y experiencia. Además de establecer que la práctica de la cirugía plástica, estética y reconstructiva, deberá de efectuarse en lugares con licencia sanitaria vigente, y la publicidad que efectúen los profesionistas al respecto, deberá de contener los requisitos que lo acrediten en su legal ejercicio y profesionalismo.

En aras de ver materializada la Estrategia Nacional de Buen Gobierno en el Sistema Federal Sanitario, se propone la implementación de la videograbación de las visitas de verificación sanitaria que realiza el órgano desconcentrado de este organismo público descentralizado, denominado, Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de San Luis Potosí.

Dicha facultad, es ejercida en términos de la Ley General de Salud, Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí, del Acuerdo de Coordinación para el ejercicio de facultades en materia de control y fomento sanitarios, que celebró el Poder Ejecutivo Federal y el Poder Ejecutivo Estatal de San Luis Potosí, divulgado en el Diario Oficial de la Federación, el 3 de junio de 2016, y la cláusula segunda del Acuerdo de Coordinación que celebraron el Gobierno del Estado con los Servicios de Salud de San Luis Potosí, para la ejecución de diversas atribuciones y competencias, publicado en el Periódico Oficial del Estado "Plan de San Luis", el 08 de diciembre de 2005, modificado mediante Acuerdo Administrativo publicado el 25 de marzo de 2010.

La Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de San Luis Potosí, tiene la capacidad e independencia técnica, administrativa y operativa para llevar a cabo lo concerniente al control, vigilancia y fomento en materia de protección contra riesgos sanitarios en nuestro Estado; lo cual permitirá lograr un modelo estatal sanitario que impida la heterogeneidad y facilite la armonización de acciones sanitarias, cuyo propósito, es darle certeza jurídica y actualizar los actos de autoridad que realiza dicho órgano desconcentrado.

Además, reivindicará a las instituciones en su deber de salvaguardar el derecho humano a la seguridad jurídica, el cual consiste en que toda persona tenga certeza sobre su situación ante las leyes, o la de su familia, posesiones o sus demás derechos, en cuya vía de respeto, la autoridad debe sujetar sus actuaciones de molestia a determinados supuestos, requisitos y procedimientos previamente establecidos en la Constitución y en las leyes, como expresión de una voluntad general soberana.

En este contexto, como requisito indispensable que deben cumplir los actos de molestia, es constar por escrito, esto tiene como propósito que el ciudadano pueda constatar el cumplimiento de los restantes, esto es, que provienen de autoridad competente y que se encuentren debidamente fundados y motivados. A su vez, el elemento relativo a que el acto provenga de autoridad competente, es reflejo de la adopción en el orden nacional de otra garantía primigenia del derecho a la seguridad, denominada principio de legalidad, mismo que toda autoridad está obligada a observar, conforme al cual, las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo cual expresamente les facultan las leyes.

Para garantizar la seguridad jurídica del propietario, responsable, encargado u ocupante del establecimiento respectivo, será objeto de videograbación, la visita de verificación a que se refiere el artículo 345 de la Ley de Salud del Estado, y se sujetará a lo dispuesto por el Reglamento Interior de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de San Luis Potosí.

Actividad que se traduce en un medio idóneo que permitirá vigilar que el acto de molestia, es decir, la visita de verificación sanitaria, se apegue al principio de legalidad, la cual será una prueba tangible del compromiso de la autoridad sanitaria de combatir todo acto de corrupción. De igual forma, se dota a la ciudadanía con un medio de prueba adicional para ejercer su derecho de audiencia y demostrar la legalidad o ilegalidad de la visita de verificación o actos de corrupción en su caso.

Se hace un incremento a los parámetros que establece el capítulo II del Título Décimo Sexto de la Ley de Salud del Estado, el cual marca la cantidad de unidades y medidas de actualización que se imponen como multa por la violación a lo preceptuado en dicho dispositivo normativo. El aumento se realiza homologando los límites establecidos en la Ley General de Salud, atendiendo al contexto y resultado obtenido a través de la vigilancia y control sanitario que realiza la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de San Luis Potosí.

Por último, permitirá derogar los Capítulos IV y V del Título Décimo Sexto, consecuentemente los artículos 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402 y 403, dichos capítulos prevén lo relativo al recurso de revisión que los propietarios de los establecimientos sujetos a vigilancia y control sanitario, pueden interponer en contra de los actos y resoluciones que emiten las autoridades sanitarias. Sin embargo, dicho recurso, ya se encuentra previsto por el Código Procesal Administrativo para el Estado de San Luis Potosí, el cual, es aplicable de manera supletoria a los actos, procedimientos y resoluciones previstos en Ley de Salud del Estado.

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se **REFORMA** los artículos, 71, 348 el párrafo primero, 351, 353 sus fracciones III, IV, V, VI, y VII, 354, 366, 368, 370, 371, 373, 377, 378, 380 la fracción II, 382, 383, 384, 385, 388 las fracciones IV y V y 391; **ADICIONA** los artículos 71 SEXIES, 71 SEPTIES, el Capítulo II al Título Cuarto, denominado “*Ejercicio Especializado de la Cirugía*”, por lo que los actuales capítulos II y III, pasan a ser III y IV del mismo Título Cuarto y los artículos 71 OCTIES, 71 NONIES, 71 DECIES, 71 UNDECIES, 71 DUODECIES, al 350 el párrafo tercero, 352 BIS, 353 BIS, 366 BIS, 368 BIS, 384 BIS, al artículo 388 las fracciones VI y VII; y **DEROGA** los Capítulos IV y V del Título Décimo Sexto, y los artículos, 353 los párrafos tercero, cuarto y quinto de la fracción VIII, 392, 393, 394,

395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402 y 403, de la Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí; para quedar como sigue

ARTÍCULO 71. Quienes ejerzan en forma pública o privada las actividades profesionales, técnicas y auxiliares, así como las especialidades a que se refiere este capítulo, deberán poner a la vista del público un anuncio que indique la institución que les expidió el título, diploma o certificado de la licenciatura y la especialidad, respectivamente, y, en su caso, el número de cédula profesional, el registro de certificados de especialización expedidos por academias, colegios, consejos o asociaciones de profesionales de las disciplinas para la salud.

Estas menciones también deberán consignarse en los documentos y papelería que utilicen en el ejercicio de tales actividades y en la publicidad que realicen al respecto.

Si se tratare del registro de certificados de especialidades médicas o del registro de la recertificación de éstas, las academias, colegios, consejos o asociaciones de profesionales de las disciplinas para la salud, también deberán solicitar la opinión del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas.

Asimismo, deberán estar a la vista de los pacientes los siguientes documentos:

- I. El título, diploma o certificado de la licenciatura;
- II. En caso de ejercer especialidades o subespecialidades, el certificado o documento que acredite la recertificación;
- III. El número de cédula profesional, y en su caso, de cédula de especialidad, y
- IV. El registro de certificados de especialización.

ARTÍCULO 71 SEXIES. La emisión de los diplomas de especialidades médicas corresponde a las instituciones de educación superior y de salud oficialmente reconocidas ante las autoridades correspondientes.

Para la realización de los procedimientos médicos quirúrgicos de especialidad se requiere que el especialista haya sido entrenado para la realización de los mismos en instituciones de salud oficialmente reconocidas ante las autoridades correspondientes.

ARTÍCULO 71 SEPTIES. El Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, conforme a la normativa federal, es el organismo facultado para supervisar el entrenamiento, habilidades, destrezas y calificación de la pericia que se requiere para la certificación y recertificación de la misma en las diferentes especialidades de la medicina reconocidas por el Comité y en las instituciones de salud oficialmente reconocidas ante las autoridades correspondientes.

Los Consejos de Especialidades Médicas que tengan la declaratoria de idoneidad y que estén reconocidos por el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, constituido por la Academia Nacional de Medicina de México, la Academia Mexicana de Cirugía y los Consejos de Especialidad miembros, están facultados para expedir certificados de su respectiva especialidad médica.

Para la expedición de la cédula de médico especialista las autoridades educativas competentes solicitarán la opinión del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas.

CAPÍTULO II

Ejercicio Especializado de la Cirugía

ARTÍCULO 71 OCTIES. Para la realización de cualquier procedimiento médico quirúrgico de especialidad, los profesionales que lo ejerzan requieren además de los requisitos señalados en el artículo anterior:

I. Cédula de especialista legalmente expedida por las autoridades educativas competentes, y

II. Certificado vigente de especialista que acredite capacidad y experiencia en la práctica de los procedimientos y técnicas correspondientes en la materia, aceptadas como adecuadas para tratar a un paciente en el momento de que se trata, de acuerdo con cada especialidad, expedido por el Consejo de la especialidad según corresponda, de conformidad con los artículos 71 Sexties y Septies de la presente Ley.

ARTÍCULO 71 NONIES. Los médicos especialistas podrán pertenecer a una agrupación médica, cuyas bases de organización y funcionamiento estarán a cargo de las asociaciones, sociedades, colegios o federaciones de profesionales de su especialidad; agrupaciones que se encargan de garantizar el profesionalismo y ética de los expertos en esta práctica de la medicina.

El Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas y los Consejos de Especialidades Médicas para la aplicación del presente artículo y lo dispuesto en el Título Cuarto de la presente Ley, se sujetarán a las disposiciones que emita la Secretaría de Salud.

Para efectos de la validez a que alude la fracción II del artículo anterior, debe acreditarse la recertificación cada cinco años.

ARTÍCULO 71 DECIES. La cirugía plástica, estética y reconstructiva relacionada con cambiar o corregir el contorno o forma de diferentes zonas o regiones de la cara y del cuerpo, deberá efectuarse en establecimientos o unidades médicas con licencia sanitaria vigente, atendidos por profesionales de la salud especializados en dichas materias, de conformidad con lo que establece el artículo 71 Octies de esta Ley.

ARTÍCULO 71 UNDECIES. La oferta de los servicios que se haga a través de medios informativos, ya sean impresos, electrónicos u otros, por profesionistas que ejerzan cirugía plástica, estética o reconstructiva; así como, los establecimientos o unidades médicas en que se practiquen dichas cirugías, deberán prever y contener con claridad en su publicidad los requisitos que se mencionan en los artículos 71 Quáter, 71 Octies, 71 Decies de esta Ley y lo previsto por el Capítulo Único del Título Décimo Tercero de la Ley General de Salud.

ARTÍCULO 71 DUODECIES. Las sociedades, asociaciones, colegios o federaciones de profesionistas pondrán a disposición de la Secretaría de Salud, un directorio electrónico, con acceso al público que contenga los nombres, datos de los profesionistas que lleven a

cabo procedimientos médico-quirúrgicos y certificado de especialización vigente, además de proporcionar el nombre y datos de la Institución y/o Instituciones educativas, que avalen su ejercicio profesional.

CAPÍTULO III

Servicio Social de Pasantes y Profesionales

ARTÍCULO 72 a 76. ...

CAPÍTULO IV

Formación, Capacitación y Actualización del Personal

ARTÍCULO 77 a 81. ...

ARTÍCULO 348. Las visitas de verificación podrán ser ordinarias **y extraordinarias**. Las primeras se efectuarán en días y horas hábiles y las segundas en cualquier tiempo.

...

ARTÍCULO 350. ...

...

En caso de que los propietarios, responsables, encargados u ocupantes de establecimientos o conductores de los transportes objeto de verificación, **se nieguen a permitir el acceso o dar facilidades e informes a los verificadores, la autoridad sanitaria, podrá hacer uso indistinto de cualquiera de las medidas de apremio previstas en el artículo 378 de esta Ley.**

ARTÍCULO 351. Las autoridades sanitarias **con base en los resultados del contenido del acta de verificación o del informe de verificación** a que se refiere el artículo 345 de esta Ley, **deberán notificar de manera personal al interesado o titular de la autorización sanitaria de que se trate, el dictamen sanitario correspondiente que deberá contener:**

I. El análisis de las anomalías encontradas y asentadas en el acta de verificación o del informe de verificación;

II. El plazo y acciones para corregir las anomalías detalladas en el acta de verificación o del informe de verificación;

III. La ratificación o remoción de la medida de seguridad a que haya habido lugar en la ejecución de la orden de verificación y que obre en el acta de verificación o del informe de verificación, y

IV. La imposición de alguna de las medidas de seguridad a que se refiere el numeral 358 de esta Ley, sin perjuicio de las que se hayan impuesto en la visita de verificación.

En caso de que el establecimiento cumpla con todos los requisitos que esta Ley y demás disposiciones legales aplicables exijan para su funcionamiento, se le exhortará a proseguir

con el cumplimiento de la normatividad aplicable, apercibido de que, en caso contrario, se hará acreedor a la imposición de cualquiera de las medidas de seguridad, así como a alguna de las sanciones administrativas establecidas en los artículos 358 y 380 de esta ley respectivamente.

ARTÍCULO 352 BIS. Será objeto de videograbación, la visita de verificación a que se refiere el artículo 345 de esta Ley y se sujetará a lo dispuesto por el Reglamento Interior de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de San Luis Potosí.

El verificador deberá recabar indistintamente el consentimiento del propietario, responsable o encargado u ocupante del establecimiento respectivo, para llevar a cabo la videograbación de la visita de verificación.

El verificador, única y exclusivamente se enfocará y grabará lo correspondiente a la actuación de la visita de verificación.

En caso de que indistintamente el propietario, responsable o encargado u ocupante del establecimiento respectivo, se niegue a otorgar su consentimiento para llevar a cabo la videograbación de la visita de verificación, el verificador, deberá suspender la videograbación de forma inmediata. Esta eventualidad, deberá constar en el acta de verificación o del informe de verificación.

Esta negativa, no suspenderá, ni imposibilitará, ni invalidará la ejecución de la orden respectiva.

ARTÍCULO 353. ...

I y II. ...

III. Se obtendrán tres muestras del producto: una de ellas se dejará en poder de la persona con quien se entienda la diligencia para su análisis particular a su costa: la otra muestra podrá quedar en poder de la misma persona a disposición de la autoridad sanitaria competente previo sello inviolable y tendrá el carácter de muestra testigo; la última será enviada por la autoridad sanitaria competente, al laboratorio autorizado y habilitado por ésta, para su análisis oficial.

El análisis particular descrito en el párrafo precedente, deberá realizarse dentro del plazo de 3 días naturales, siguientes a la fecha de la toma de muestras. Dicho plazo, será aplicable a lo dispuesto en el artículo 353 bis, contados a partir del día siguiente a la fecha en que la persona con quien se entendió la diligencia, le haya enviado, en condiciones adecuadas de conservación, copia del acta de verificación que consigne el muestreo realizado, así como las muestras que quedaron en su poder.

La muestra testigo, deberá ser conservada en condiciones adecuadas según la naturaleza de la muestra, atendiendo a la normatividad oficial aplicable que corresponda, en caso contrario, esta no tendrá el carácter definitivo a que se refiere el último párrafo de la fracción VII de este artículo, prevaleciendo con tal carácter, el resultado del análisis oficial;

IV. El resultado del análisis oficial se notificará por escrito en forma personal o por correo certificado con acuse de recibo al interesado o **titular de la autorización sanitaria** de que se trate, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de la toma de muestras;

V. En caso de desacuerdo con el resultado que se haya notificado, el interesado o **titular de la autorización sanitaria de que se trate**, lo podrá impugnar dentro de un plazo de quince días hábiles a partir de la notificación de análisis oficial. Transcurrido este plazo sin que se haya impugnado el resultado del análisis oficial, éste quedará firme y la autoridad sanitaria competente procederá conforme a la fracción VII de este artículo, según corresponda;

VI. Con la impugnación a que se refiere la fracción anterior, el interesado o **titular de la autorización sanitaria de que se trate**, deberá acompañar el original del análisis particular que se hubiere practicado a la muestra que haya sido dejada en poder de la persona con quien se entendió la diligencia de muestreo, así como, en su caso, la muestra testigo. Sin el cumplimiento de este requisito no se dará trámite a la impugnación, y el resultado del análisis oficial quedará firme.

El análisis particular, deberá realizarse conforme a lo establecido en el segundo párrafo de la fracción III de este artículo.

En caso de no cumplir con este requisito, no se dará trámite a la impugnación, y el resultado del análisis oficial quedará firme;

VII. La impugnación presentada, **previo cumplimiento de lo establecido** en las fracciones anteriores, dará lugar a que el interesado o **titular de la autorización sanitaria de que se trate, asumiendo los gastos que esto implique**, solicite a la autoridad sanitaria competente, **el análisis de la muestra testigo, en un laboratorio que la misma señale.**

En el caso de insumos médicos, el análisis, se deberá realizar en un laboratorio autorizado por autoridad competente como laboratorio de control analítico auxiliar de la regulación sanitaria, y

VIII. ...

...

Se deroga

Se deroga

Se deroga

Se deroga

ARTÍCULO 353 BIS. Si la diligencia se practica en un establecimiento que no sea donde se fabrica o produce el producto o no sea el establecimiento del titular del registro, la persona con quien se entendió la diligencia, está obligada a enviar al mencionado titular, en condiciones adecuadas de conservación, dentro del término de tres días hábiles siguientes a la toma de muestras, copia del acta de verificación que consigne el muestreo realizado,

así como las muestras que quedaron en su poder, a efecto de que tenga la oportunidad de realizar los análisis particulares y, en su caso, impugnar el resultado del análisis oficial, dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación de resultados.

Si la persona con quien se entendió la diligencia, omite dar cumplimiento a la obligación a que se refiere el párrafo precedente o no conserva la muestra citada, dará lugar a que se constituya responsable solidario del titular.

El procedimiento de muestreo no impide que la autoridad sanitaria competente dicte y ejecute las medidas de seguridad sanitarias que procedan, en cuyo caso se asentará en el acta de verificación las que se hubieren ejecutado, y los productos que comprenda.

ARTÍCULO 354. En el caso de toma de muestras de productos perecederos debe conservarse en condiciones óptimas para evitar su descomposición, su análisis deberá iniciarse dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la hora en que se recogieron.

El resultado del análisis se notificará por escrito en forma personal al interesado **o titular de la autorización sanitaria de que se trate**, dentro de los quince días hábiles siguientes contados a partir de la fecha en que se hizo la verificación. El particular podrá impugnar el resultado del análisis en un plazo de tres días contados a partir de la notificación, en cuyo caso se procederá en los términos de las fracciones VI y VII del artículo anterior.

Transcurrido **el término de tres días** sin que se haya impugnado el resultado del análisis oficial, éste quedará firme.

ARTÍCULO 366. La suspensión de trabajos o servicios será temporal. Podrá ser total o parcial y se aplicará por el tiempo estrictamente necesario, para corregir las irregularidades que pongan en peligro la salud de las personas. Se ejecutarán las acciones necesarias que permitan asegurar la referida suspensión. Esta será levantada a instancias del interesado **o titular de la autorización sanitaria de que se trate** o por la propia autoridad que la ordenó, cuando cese la causa por la cual fue decretada.

Durante la suspensión, se podrá permitir el acceso de las personas que tengan encomendada la corrección de las irregularidades que la motivaron **o cuando sea necesario llevar a cabo alguna actividad indispensable para el mantenimiento de equipos o infraestructura, previa solicitud por escrito de la persona interesada o titular de la autorización sanitaria de que se trate.**

ARTÍCULO 366 BIS. La autoridad sanitaria en el ámbito de su competencia, podrá hacer uso de cualquiera de las medidas de apremio señaladas en el artículo 378, cuando existan indicios de que en algún local o casa habitación se realice cualquier actividad que ponga en peligro la salud de las personas.

ARTÍCULO 368. El aseguramiento de objetos, productos o sustancias, tendrá lugar cuando se presuma que pueden ser nocivos para la salud de las personas, o carezcan de los requisitos esenciales que se establezcan en las disposiciones legales aplicables. La autoridad sanitaria podrá retenerlos o dejarlos en depósito hasta en tanto se determine, previo dictamen del laboratorio **autorizado y habilitado por ésta**, cuál será su destino.

Si el dictamen indicara que el bien asegurado no es nocivo, pero carece de los requisitos esenciales establecidos en esta Ley y demás disposiciones generales aplicables, la autoridad sanitaria concederá al interesado o **titular de la autorización sanitaria de que se trate**, un plazo hasta de treinta días para que tramite el cumplimiento de los requisitos omitidos.

Si dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, el interesado o **titular de la autorización sanitaria de que se trate**, no realizará el trámite indicado, o no gestionará la recuperación acreditando el cumplimiento de lo ordenado por la autoridad sanitaria, se entenderá que la materia del aseguramiento causa abandono, y quedará a disposición de la autoridad sanitaria para su aprovechamiento lícito.

Si del dictamen resultara que el bien asegurado es **nocivo para la salud**, la autoridad sanitaria, dentro del plazo establecido en el segundo párrafo de este artículo y previo la observancia de la garantía de audiencia, podrá determinar que el interesado o **titular de la autorización sanitaria de que se trate** y bajo la vigilancia de aquélla, someta el bien asegurado a un tratamiento que haga posible su legal aprovechamiento de ser posible, en cuyo caso y previo el dictamen de la autoridad sanitaria, el interesado podrá disponer de los bienes que haya sometido a tratamiento para destinarlos a los fines que la propia autoridad señale.

Asimismo productos perecederos asegurados que se descomponen en poder de la autoridad sanitaria, además los objetos, productos o sustancias que se encuentren en evidente estado de descomposición, adulteración o contaminación, que no los hagan aptos para su consumo, serán destruidos de inmediato por la autoridad sanitaria, la que levantará un acta circunstanciada de la destrucción.

Los productos perecederos que no se reclamen por la persona interesada o **titular de la autorización sanitaria de que se trate**, dentro de las veinticuatro horas que hayan sido asegurados, quedarán a disposición de la autoridad sanitaria, la que los entregará para su aprovechamiento, de preferencia a instituciones de asistencia social, públicos o privados.

ARTÍCULO 368 BIS. Será procedente la acción de aseguramiento prevista en el artículo 368 de esta Ley como medida de seguridad, para el caso de que se comercialicen remedios herbolarios, suplementos alimenticios o productos cosméticos que indebidamente hubieren sido publicitados o promovidos indebidamente como medicamentos o a los cuales se les hubiera atribuido cualidades o efectos terapéuticos, presentándolos como una solución definitiva en el tratamiento preventivo o de rehabilitación de un determinado padecimiento, sin que los mismos cuenten con registro sanitario para ser considerados como tales.

ARTÍCULO 370. Lo previsto en los Títulos Décimo Cuarto y Décimo Quinto de esta Ley, podrán iniciarse por oficio o a petición de parte.

ARTÍCULO 371. Derivado de las irregularidades sanitarias que reporte el **acta de verificación o del informe de verificación o dictamen sanitario**, la autoridad sanitaria competente, notificará por escrito a la persona interesada o **titular de la autorización sanitaria de que se trate**, personalmente o por correo certificado con acuse de recibo, para que dentro de un plazo no menor de cinco ni mayor de treinta días naturales, comparezca a manifestar lo que a su derecho convenga; ofrezca y desahogue las pruebas que estime procedentes en relación con los hechos asentados en el acta de verificación o del informe de verificación o **dictamen sanitario según el**

caso. Al efecto serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la **confesional por posiciones**. Tratándose **del acta de verificación** o del informe de verificación o **del dictamen**, la autoridad sanitaria competente, deberá acompañar al citatorio invariablemente copia de aquél.

ARTÍCULO 373. En caso de que el presunto infractor no compareciera dentro del plazo fijado por el artículo 371 de esta Ley, se procederá a decretar la rebeldía y a pronunciar **la resolución definitiva en el plazo establecido en el artículo anterior**, notificándola por escrito personalmente o por correo certificado con acuse de recibo.

ARTÍCULO 377. La resolución que pronuncie la autoridad sanitaria competente, se hará saber por escrito al interesado o **titular de la autorización sanitaria de que se trate**, dentro del plazo que marca la ley; en caso de no existir éste, dentro de un plazo no mayor de cuatro meses, **contados a partir del día hábil siguiente a aquel en que fenezca el plazo establecido en el artículo 372.**

ARTÍCULO 378. Para hacer cumplir sus determinaciones en todo procedimiento, incluyendo las visitas de verificación sanitaria, ejecución de sanciones y medidas de seguridad, las autoridades sanitarias competentes harán uso de las acciones legales necesarias, incluyendo el auxilio de la fuerza pública, para lograr la ejecución de las sanciones y medidas de seguridad que procedan.

ARTÍCULO 380. ...

I. ...

II. Multa;

III y IV. ...

ARTÍCULO 382. Se sancionará con **multa equivalente de veinte** hasta dos mil veces la unidad de medida y actualización vigente, la violación a las disposiciones contenidas en los artículos, **49, 71, 71 QUINQUES, 71 SEXIES**, 89, 105, 108, 121, 182, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 247, 304 QUINQUE, 309, 310, 311, 321, 322, 323, 342 y 344 de esta Ley.

ARTÍCULO 383. Se sancionará con **multa equivalente de cien** hasta seis mil veces la unidad de medida y actualización vigente, la violación a las disposiciones contenidas en los artículos, 44, 100, 109, 110, 111, 116, 117, 199, 200, 204, 205, 206, **213**, 215, 216, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 265, 266, 267, 268, 271, 272, 274 y 300 de esta Ley.

La violación a las disposiciones contenidas en los artículos, 144, 145, 317, 318, 319, 350, 362, 363, 364 y 365 de esta Ley, se sancionará con **multa equivalente de cien** hasta doce mil veces la unidad de medida y actualización vigente.

ARTÍCULO 384. Se sancionará con **multa equivalente de mil** hasta veinte mil veces la unidad de medida y actualización vigente, la violación a las disposiciones contenidas en los artículos, 57 párrafo último, 84, 86, 87, 276, 278, 279, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 302, 304, 305, 358 y 388 de esta Ley.

ARTÍCULO 384 BIS. Se sancionará con **multa equivalente de mil** hasta dieciséis mil veces la unidad de medida y actualización vigente e inhabilitación de siete a diez años, en el desempeño

de empleo, profesión o cargo público, a quien infrinja las disposiciones contenidas en el Título Cuarto, Capítulo II, artículos 71 SEPTIES, 71 OCTIES, 71 NONIES párrafo último, 71 DECIES, 71 UNDECIES y 71 DUODECIES, de esta Ley; la cancelación de Cédula con Efectos de Patente; o autorización respectiva según sea el caso. Lo anterior, sin afectar el derecho del o los afectados, de presentar denuncia por el delito o delitos de que se trate.

ARTÍCULO 385. Las infracciones no previstas en este capítulo serán sancionadas con **multa equivalente de quinientas hasta dieciséis mil veces** la unidad de medida y actualización vigente, atendiendo a las reglas de calificación que se establecen en el artículo 381 de esta Ley.

ARTÍCULO 388. ...

I a III. ...

IV. ...;

V. ...;

VI. Cuando se compruebe que las actividades que se realicen en un establecimiento violan las disposiciones sanitarias, constituyendo un peligro grave para la salud, y

VII. Por reincidencia.

ARTÍCULO 391. Contra actos y resoluciones que dicten las autoridades sanitarias del Estado, que con motivo de la aplicación de esta Ley den fin a una instancia o resuelvan un expediente, los interesados podrán interponer el recurso de revisión, para lo cual deberá estarse a lo estipulado en el Libro Primero, Título Segundo, Capítulo VIII, Sección Primera del Código Procesal Administrativo para el Estado de San Luis Potosí; o el juicio de nulidad ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de San Luis Potosí.

ARTÍCULO 392. Se deroga

ARTÍCULO 393. Se deroga

ARTÍCULO 394. Se deroga

ARTÍCULO 395. Se deroga

ARTICULO 396. Se deroga

ARTICULO 397. Se deroga

CAPÍTULO IV

De la Substanciación Se deroga

ARTÍCULO 398. Se deroga

ARTÍCULO 399. Se deroga

ARTÍCULO 400. Se deroga

CAPÍTULO V
De la Suspensión Se deroga

ARTÍCULO 401. Se deroga

ARTÍCULO 402. Se deroga

ARTÍCULO 403. Se deroga

TRANSITORIOS

PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado "Plan de San Luis".

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

DADO POR LAS COMISIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL; Y JUSTICIA EN LA SALA "FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA" DEL EDIFICIO DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.



CONGRESO DEL ESTADO
SAN LUIS POTOSÍ
LXIII LEGISLATURA

LXIII LEGISLANDO
JUNTOS

"2024, Año del Bicentenario del Congreso Constituyente del Estado
de San Luis Potosí"

LA COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

INTEGRANTE	A FAVOR	ENCONTRA	ABSTENCIÓN
DIP. YOLANDA JOSEFINA CEPEDA ECHAVARRÍA PRESIDENTA			
DIP. MARÍA ARANZAZU PUENTE BUSTINDUI VICEPRESIDENTA			
DIP. EDGAR ALEJANDRO ANAYA ESCOBEDO SECRETARIO			
DIP. MA. ELENA RAMIREZ RAMIREZ VOCAL			
DIP. EMMA IDALIA SALDAÑA GUERRERO VOCAL			
DIP. LIDIA NALLELY VARGAS HERNÁNDEZ VOCAL			

*Firmas del Dictamen que resuelve la iniciativa con número de Turno

5238



CONGRESO DEL ESTADO
SAN LUIS POTOSÍ
LXIII LEGISLATURA

LXIII LEGISLANDO
JUNTOS

"2024, Año del Bicentenario del Congreso Constituyente del Estado
de San Luis Potosí"

LA COMISIÓN DE JUSTICIA

INTEGRANTE	A FAVOR	ENCONTRA	ABSTENCIÓN
DIP. CINTHIA VERÓNICA SEGOVIA COLUNGA PRESIDENTA			
DIP. JUAN FRANCISCO AGUILAR HERNÁNDEZ VICEPRESIDENTE			
DIP. EDMUNDO AZAEL TORRESCANO MEDINA SECRETARIO			
DIP. CUAUHTLI FERNANDO BADILLO MORENO VOCAL			
DIP. CECILIA SENLLACE OCHOA LIMÓN VOCAL			
DIP. RUBÉN GUAJARDO BARRERA VOCAL			
DIP. MARTHA PATRICIA ARADILLAS ARADILLAS VOCAL			

*Firmas del Dictamen que resuelve la iniciativa con número de Turno 5238

**CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE LA
LXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTES**

A la Comisión del Agua, mediante **TURNO 5232**, le fue enviada para su estudio y dictamen en Sesión Ordinaria del 8 de febrero de 2024 iniciativa presentada por los legisladores Dolores Eliza García Román, Liliana Guadalupe Flores Almazán, Alejandro Leal Tovías y José Luis Fernández Martínez, que plantea REFORMAR Ley de Cuotas para la Prestación de Servicios Públicos de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento de Tamazunchale, S.L.P., para el ejercicio fiscal 2024; en tal virtud, al entrar al estudio y análisis del asunto planteado, quienes integramos esta comisión, llegaron a los siguientes

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido por el artículo 124, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las facultades que no están expresamente concedidas por dicha Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de México, en los ámbitos de sus respectivas competencias. En esa línea podemos advertir que de las disposiciones contenidas en los artículos 73, 74 y 76, de la referida Constitución de la República, no se desprende facultad exclusiva del Congreso de la Unión o de sus respectivas Cámaras, para legislar en la materia de la iniciativa de cuenta.

Por su parte, la fracción I del artículo 57 de la Constitución Política Local, le confiere atribuciones al Congreso del Estado para dictar, derogar y abrogar leyes; en consecuencia, éste es competente para conocer y resolver sobre la propuesta que se describe en el preámbulo, a fin de resolver aprobando o desechando la misma.

SEGUNDO. Que quienes hacen la propuesta legislativa en su calidad de Legisladores, tienen atribuciones para hacerlo.

TERCERO. Que con fundamento en el 99 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, este órgano parlamentario a quien se turnó la propuesta, es competente para conocerla y resolver lo procedente sobre la misma.

CUARTO. Que la iniciativa de cuenta se argumenta bajo la siguiente exposición de motivos

En el Periódico Oficial del Estado “Plan de San Luis”, con fecha 23 de diciembre de 2023, se publicó el DECRETO 0922, que contiene la Ley de Cuotas y Tarifas para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Saneamiento y Disposición Final de Aguas Residuales del Organismo Descentralizado Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamazunchale, para el Ejercicio Fiscal 2024.

Hemos detectado que, por un error involuntario dentro del artículo 21 se plasmó como cuota fija en el Servicio Doméstico, la cantidad de \$16.46, debiendo ser lo correcto 116.46.

QUINTO. Que las iniciativa de mérito, no propone el crear o modificar las cuotas y tarifas que fueron autorizadas por el Congreso del Estado y publicadas en el Periódico Oficial del Estado “Plan de San Luis” con fecha 23 de diciembre mediante Decreto 0922, por lo que resulta viable y no invade en forma alguna, las atribuciones de los organismos operadores de agua.

SEXTO. Que la propuesta legislativa, de manera clara dará certeza a la Ley de Cuotas y Tarifas para el ejercicio 2024, corrigiendo errores de origen, por lo que resulta pertinente su aprobación.

Por los argumentos expresados en los considerandos anteriormente expuestos, se presenta a esta Asamblea Legislativa, el siguiente:

DICTAMEN

Único. Ante las consideraciones contenidas en el presente dictamen, se aprueba la iniciativa citada en el proemio, conforme a lo siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con el fin de corregir un evidente error en uno de los rubros que componen la Ley de Cuotas y Tarifas que han de estar vigentes durante el ejercicio fiscal 2024 en el municipio de Tamazunchale, es que resulta pertinente y necesaria la reforma a dicho ordenamiento.

**Proyecto
de
Decreto**

ÚNICO. Se REFORMA la tabla contenida en el segundo párrafo del artículo 21 de la Ley de Cuotas y Tarifas para la Prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Saneamiento y Disposición Final de Aguas Residuales del Organismo Operador Descentralizado del municipio de Tamazunchale, para el Ejercicio Fiscal 2024, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 21...

...		
...		...
...	...	
...
...	...	Cuota fija por \$116.46
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado “Plan de San Luis”.

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente Decreto.

Por la Comisión del Agua, dado en el la sala “Don José Venustiano Carranza Garza” del Congreso del Estado el 14 de febrero de dos mil veinticuatro.

Por la Comisión del Agua

DIPUTADO(A)	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
Dip Dolores Eliza García Román Presidenta			
Dip Lilliana Guadalupe Flores Almazán Vicepresidenta			
Dip Alejandro Leal Tovías Secretario			
Dip Emilio Eduardo Briones Valdez Vocal			
Dip José Antonio Lorca Valle Vocal			

FIRMAS DICTAMEN TURNO 5232

Dictamen
con
Proyecto
de Resolución

**CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA LXIII LEGISLATURA
DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ,
PRESENTES.**

A la Comisión de Hacienda del Estado, le fue turnado en Sesión Ordinaria celebrada el veinticuatro de septiembre de dos mil veintitrés, punto de acuerdo que propone exhortar a, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Federal de Electricidad, y a la Comisión Reguladora de Energía para que en el marco de sus respectivas atribuciones y facultades realicen un estudio de viabilidad para considerar la posibilidad de aplicar la Tarifa 1F en los veinte municipios que conforman la huasteca potosina, debido a las persistentes temperaturas extremadamente altas a lo largo de todo el año en esta región, presentado por la Dip. Liliana Guadalupe Flores Almazán.

En tal virtud, al entrar a su estudio y análisis, los diputados integrantes de esta comisión llegaron a los siguientes

C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO. Que con fundamento en lo estipulado en el artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, a la comisión que se turnó es competente para resolver el asunto descrito en el preámbulo.

SEGUNDO. Que la petición recibida se fundamenta en lo siguiente:

"ANTECEDENTES. –

Los elevados montos facturados por el suministro de electricidad representan un desafío social, dando lugar a un malestar ampliamente extendido que en algunas ocasiones se ha manifestado en formas de protesta civil, principalmente en las áreas rurales. Estas comunidades demandan una estructura tarifaria equitativa, lo que ha llevado a situaciones en las cuales los habitantes optan por sortear los medidores eléctricos para eludir cargos exorbitantes.

En la zona huasteca de nuestro Estado, las elevadas temperaturas que se experimentan debido a sus características geográficas y climáticas pueden llegar a los 40 grados Celsius. Esto tiene un impacto directo en el uso de electricidad, ya que la población recurre a dispositivos electrónicos para controlar el ambiente y preservar sus alimentos, lo que resulta en un aumento considerable en el consumo de energía eléctrica.

En los años recientes, como resultado del fenómeno del calentamiento global, se han observado incrementos significativos en las temperaturas en diferentes áreas de la entidad. Según el Informe sobre el Clima en México 2017, elaborado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se señala que las altas temperaturas han contribuido de manera importante al aumento de la extensión territorial del país afectada por sequías. En este contexto, desde un punto de vista geográfico, el estado de San Luis Potosí y de manera concreta la Huasteca muestra susceptibilidad a los impactos del cambio climático y a condiciones climáticas extremadamente altas.

Es ampliamente conocido que la población de la Huasteca Potosina, ha estado demandando desde hace varios años a las instancias gubernamentales y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la

implementación de tarifas equitativas y de menor costo. Además, ha expresado su descontento al denunciar los cargos excesivos por el suministro eléctrico.

En este contexto, es esencial recordar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que la huasteca potosina se destaca como una entidad generadora de energía, albergando dos plantas termoeléctricas que contribuyen a la producción de energía para el país. Este hecho debería servir como base para garantizar tarifas justas a los habitantes de la región. Por esta razón, resulta apropiado realizar un análisis con el fin de establecer condiciones tarifarias que estén orientadas hacia el beneficio de la población huasteca.

JUSTIFICACIÓN. –

Es importante destacar que el 23 de mayo de 2019, el gobierno del estado de Tabasco firmó un acuerdo de colaboración con la Comisión Federal de Electricidad (CFE SSB), en el cual se estableció la implementación de mecanismos de cooperación para llevar a cabo acciones destinadas a controlar y disminuir la deuda acumulada por parte de los usuarios domésticos en relación con el consumo de energía eléctrica. Este convenio surgió en el marco del programa estatal "Adiós a tu Deuda", el cual buscó regularizar los pagos pendientes por el consumo eléctrico. Como parte de este convenio, se realizó la condonación de una suma de 11 millones de pesos y se aplicó la tarifa 1F a los usuarios domésticos del suministro eléctrico

De igual manera, es importante resaltar que el 19 de marzo de 2020, el gobierno de Campeche y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) firmaron un convenio con el propósito de reclasificar la tarifa eléctrica 1C a la categoría 1F, la cual representa la más económica entre las tarifas establecidas por la CFE. Esta reclasificación se aplicaría en los municipios de Palizada, Carmen y Candelaria. Adicionalmente, se acordó subsidiar el 50% del consumo eléctrico en los hogares en el resto del estado que oscile entre 350 y 800 kilovatios hora (KWh) bimestralmente, dependiendo del municipio correspondiente. Ese acuerdo benefició a las familias campechanas al reducir los costos de energía eléctrica, lo que a su vez generó ahorros significativos en sus finanzas personales.

Es de suma importancia llevar a cabo investigaciones climáticas con el propósito de establecer tarifas eléctricas que se basen en mediciones de temperatura realizadas con equipos y métodos de última tecnología. Estos instrumentos deberían estar instalados en estaciones climáticas y hogares en la región huasteca de San Luis Potosí, para recopilar informes actualizados y precisos. El objetivo de estos esfuerzos sería obtener mediciones veraces que reflejen las condiciones reales dentro de las viviendas. Estas viviendas, a menudo, necesitan hacer un mayor uso de dispositivos como aires acondicionados, ventiladores y refrigeradores para lograr un nivel adecuado de comodidad y mitigar los efectos del clima extremo.

Es fundamental que esta investigación tome en consideración la sensación térmica en lugar de simplemente considerar la temperatura ambiente. Esto permitirá establecer categorizaciones de temperatura que sean más fieles a las variaciones reales que se experimentan, dado que existen diferencias notables entre estos dos criterios.

Resulta inquietante la proporción del ingreso familiar que una familia destina al costo del suministro eléctrico, especialmente en aquellas áreas caracterizadas por temperaturas extremas.

CONCLUSIÓN. –

Por esta razón, debemos hacer un llamado a la Comisión Federal de Electricidad para que aplique la tarifa 1F en todos los municipios de la zona huasteca de nuestro Estado que no tienen acceso a esta tarifa subsidiada por el gobierno federal. Dado que la gran mayoría de la población en esta área está en una situación de pobreza, y se ha vuelto un grupo vulnerable. Esto tendría un impacto positivo en la economía de las familias huastecas, beneficiando así su bienestar."

TERCERO. Que la proponente justifica su propuesta de punto de acuerdo de exhortar a diversas dependencias del Gobierno Federal para que reclasifique la tarifa en los municipios de la Zona de la Huasteca Potosina por lo siguiente:

En la zona huasteca de nuestro Estado, las elevadas temperaturas que se experimentan debido a sus características geográficas y climáticas pueden llegar a los 40 grados Celsius. Esto tiene un impacto directo en el uso de electricidad, ya que la población recurre a dispositivos electrónicos para controlar el ambiente y preservar sus alimentos, lo que resulta en un aumento considerable en el consumo de energía eléctrica.

En los años recientes, como resultado del fenómeno del calentamiento global, se han observado incrementos significativos en las temperaturas en diferentes áreas de la entidad. Según el Informe sobre el Clima en México 2017, elaborado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se señala que las altas temperaturas han contribuido de manera importante al aumento de la extensión territorial del país afectada por sequías. En este contexto, desde un punto de vista geográfico, el estado de San Luis Potosí y de manera concreta la Huasteca muestra susceptibilidad a los impactos del cambio climático y a condiciones climáticas extremadamente altas.

De igual manera esta dictaminadora realiza ajuste al resolutivo final para que el exhorto se remita también a la Comisión Nacional del Agua para que también emita su opinión al tema en cuestión.

Por lo anterior, con fundamento en lo estipulado por los artículos, 92 párrafo segundo, y 94, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 85, y 86, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, se presenta a esta Asamblea Legislativa, el siguiente

DICTAMEN

ÚNICO. La Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a la Comisión Federal de Electricidad (CFE); a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para que en el marco de sus respectivas atribuciones y facultades realicen un estudio de viabilidad para considerar la posibilidad de aplicar la Tarifa 1F en los veinte municipios que conforman la huasteca potosina, lo anterior debido a las persistentes temperaturas altas a lo largo de todo el año en esta región. Notifíquese.

DADO EN LA SALA “LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA”, DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

LISTA DE VOTACIÓN
COMISIÓN DE HACIENDA DEL ESTADO

DIP. ROBERTO ULICES MENDOZA PADRÓN
PRESIDENTE

FIRMA

SENTIDO DEL VOTO

A Favor

DIP. LILIANA GUADALUPE FLORES
ALMAZÁN
VICEPRESIDENTA

A FAVOR

DIP. HÉCTOR MAURICIO RAMÍREZ
KONISHI
SECRETARIO

A favor

DIP. DOLORES ELIZA GARCÍA ROMÁN
VOCAL

A favor

DIP. CUAUHTLI FERNANDO BADILLO
MORENO
VOCAL

A favor

DIP. EMMA IDALIA SALDAÑA GUERRERO
VOCAL

A FAVOR

DIP. RENÉ OYARVIDE IBARRA
VOCAL

Firmas del Dictamen por el que se resuelve procedente punto de acuerdo que propone exhortar a, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Federal de Electricidad, y a la Comisión Reguladora de Energía para que en el marco de sus respectivas atribuciones y facultades realicen un estudio de viabilidad para considerar la posibilidad de aplicar la Tarifa 1F en los veinte municipios que conforman la huasteca potosina, debido a las persistentes temperaturas extremadamente altas a lo largo de todo el año en esta región. (turno 4246)

Puntos de Acuerdo

CIUDADANAS Y CIUDADANOS DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA LXIII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

Presentes.

Teniendo como fundamento lo que establecen los artículos 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 132 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí; y 72, 73 y 74 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de San Luis Potosí, **Liliana Guadalupe Flores Almazán**, Diputada Local por el Décimo Tercer Distrito local en la Sexagésima Tercera Legislatura e integrante del **Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional**, me permito presentar a la digna consideración de esta Honorable soberanía Punto de Acuerdo Con el objeto de:

Exhortar a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, para que, en caso de interrupción del tránsito vehicular en la Autopista Crucero de Rayón a Ciudad Valles, la empresa responsable se abstenga de cobrar peajes a los usuarios desviados hacia las carreteras libres como medida justa y compensatoria.

Lo anterior de conformidad con los siguientes

ANTECEDENTES. –

Las carreteras de cuota, también conocidas como autopistas de peaje, son vías de alta velocidad que se construyen y mantienen con fondos privados. A diferencia de las carreteras convencionales que son financiadas por el gobierno y generalmente son gratuitas, las carreteras de cuota requieren que los conductores paguen una tarifa para usarlas.

En San Luis Potosí, el uso de carreteras de cuota es común y una opción popular entre los conductores que buscan una vía rápida y eficiente para llegar a sus destinos.

La Autopista Crucero de Rayón a Ciudad Valles, es una carretera de cuota que atraviesa parte de la zona serrana entre la zona media y la zona huasteca de nuestro estado.

Esta Autopista, de vital importancia para la conectividad y el desarrollo económico de la región, experimentó una interrupción en el tránsito de vehículos el día 1 de febrero del año 2024, específicamente en el tramo Tamasopo - Ciudad Valles, debido a un accidente vehicular. En consecuencia, los usuarios fueron desviados hacia la carretera libre, donde se les cobró peaje en la caseta de Tamasopo. Esta situación generó malestar y preocupación entre la población, ya que, a pesar de las circunstancias imprevistas, se aplicó un cobro por el servicio de peaje.

JUSTIFICACION. –

Considerando la importancia de garantizar la seguridad vial y el derecho de los ciudadanos a recibir servicios de calidad, es imperativo que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal exija a la empresa responsable que administra la Autopista Crucero de Rayón a Ciudad Valles, que se establezcan medidas específicas para situaciones de interrupción del tránsito vehicular en la autopista, donde se garantice la transparencia y la información oportuna a los usuarios sobre las rutas alternas disponibles.

Además, se establezca que, en casos similares, donde la interrupción del tránsito sea causada por eventos fortuitos, accidentes u otras circunstancias imprevisibles, la empresa administradora de la autopista se abstenga de cobrar peaje a los usuarios desviados hacia las carreteras libres como medida compensatoria y justa.

CONCLUSION. –

La seguridad y el bienestar de los usuarios de la Autopista Crucero de Rayón a Ciudad Valles deben ser prioridad en situaciones de interrupción del tránsito. La aplicación de peajes en las carreteras libres utilizadas como rutas alternas en caso de emergencias contradice los principios de equidad y justicia en la prestación de servicios viales.

Por lo tanto, resulta necesario que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal establezca procesos con la empresa responsable para que, en situaciones similares, se suspenda temporalmente la aplicación de peajes en las rutas alternas utilizadas por los usuarios desviados.

Con base en los motivos expuestos presento a consideración de este honorable pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. - La Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí, exhorta a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, para que, en caso de interrupción del tránsito vehicular en la Autopista Crucero de Rayón a Ciudad Valles, la empresa responsable se abstenga de cobrar peajes a los usuarios desviados hacia las carreteras libres como medida justa y compensatoria.

Asimismo, le solicite a la empresa administradora, que garantice información oportuna y transparente sobre las rutas alternas disponibles en situaciones de emergencia.

ATENTAMENTE

Liliana Guadalupe Flores Almazán
Diputada Local por el Decimotercer Distrito
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

San Luis Potosí, S.L.P. A 16 días del mes de febrero del año 2023

CIUDADANAS Y CIUDADANOS DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA LXIII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

Presentes.

Con fundamento en lo que disponen los artículos 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 132 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí; y 72, 73 y 74 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de San Luis Potosí, **Emma Idalia Saldaña Guerrero diputada local**, me permito presentar a la digna consideración de esta Honorable Soberanía el presente Punto de Acuerdo.

Con el propósito de:

Exhortar a la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a realizar una campaña de Educación Financiera orientada a las jefas de familia que reciben remesas en nuestra Entidad, con la finalidad de subrayar la importancia del ahorro y de la inversión en educación para la economía familiar.

Lo anterior se justifica con los siguientes:

ANTECEDENTES

En San Luis Potosí el ingreso de las remesas tiene una singular importancia, ya que ocupa el lugar número 13 de los 32 estados, en la captación de éstas divisas. Durante el año 2021, al interior del estado, y de acuerdo al Consejo Estatal de Población, los municipios que recibieron mayor número de remesas fueron:

"La ciudad capital, con 379 millones de dólares; Rioverde, con 197.4; Matehuala, con 142.5 y Salinas con 104.9 millones de dólares. Así mismo, otras demarcaciones que recibieron divisas del vecino país del norte de manera destacada fueron Tamazunchale con 61.8 millones de dólares; Ciudad Valles reportó 73.4; Cerritos 81 y Soledad de Graciano Sánchez 85.9 millones de dólares."

Dividido por regiones, los ingresos por este rubro son como sigue: zona Centro: 577.6 millones de dólares; zona Media: 426 millones de dólares; zona Altiplano: 400.8, y zona Huasteca: 317.5 millones dólares. Lo que en su conjunto suma casi 2 mil millones de dólares.¹

Según la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal, para el 2021, las remesas equivalieron al 6.5% del PIB de San Luis Potosí, lo que lo coloca como el 11º estado con mayor dependencia a este ingreso.² Y para el año 2022, se alcanzó un nuevo máximo de ingreso por esta razón, con 2 mil 071.4 millones de dólares.³

¹ <https://www.slp.gob.mx/sitioNuevo/Paginas/Noticias/2022/FEBRERO/250222/SLP-alcanza-cifra-récor-por-remesas-en-2021-mil-722-mdd.aspx>

² http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/PoliticaMigratoria/CPM/foros_regionales/multimedia/info_Slpo.pdf

³ <https://planoinformativo.com/981121/crece-el-envio-de-remesas-hacia-slp->

Ahora bien, cabe señalar que en nuestro país el 58.4% de los receptores de remesas son mujeres; y entre las regiones del país con los mayores porcentajes de mujeres que reciben remesas fueron la Noroeste, que incluye a San Luis Potosí, con un 18.1%, del total de las mujeres. Respecto a los hogares, del total que reciben remesas, el 33.7% tienen una jefa de familia.⁴

Y de acuerdo al Censo de Población del año 2020, en San Luis Potosí, 31% de los hogares reconocen a las mujeres como persona de referencia, lo que significa que son consideradas como jefa de la vivienda, siendo un total de 236,780 hogares familiares.⁵

Aunque no existe una cifra concreta sobre las jefas de familia que reciben remesas, es fácil advertir que se trata de un buen número de hogares en esta circunstancia en el estado, así como el hecho de la importancia de las remesas para la economía local, y también la economía familiar.

JUSTIFICACIÓN

Las investigaciones muestran que las mujeres, aún en contextos de migración, siguen ejerciendo el rol de cuidado en México, tomen parte o no en la migración y en las nuevas dinámicas laborales, ya que:

"Pese a estas reconfiguraciones producto del cambio en la participación laboral de las mujeres, las tareas domésticas y de cuidados continúan siendo predominantemente femeninas, y predominantemente con un estatus inferior al trabajo que pasa por el mercado."

Y aunque: *"la migración internacional reacomoda las actividades domésticas y de cuidados conservando como criterios ordenadores el género en su intersección con el ciclo de vida."*⁶ Por ello, es que las mujeres suelen permanecer recibiendo esos fondos. Un estudio encontró que las remesas internacionales tienen como destinatario principal las esposas de dichos migrantes, independientemente de su edad. Asimismo, se pudo determinar el destino de las remesas:

"Una proporción significativa de sus ingresos tiene como destino único el sostenimiento familiar. Los siguientes rubros en importancia fueron el gasto en educación, ahorro, pago de deudas y salud. Los hogares que recibieron remesas del extranjero destinaron un menor porcentaje en educación, pero un mayor porcentaje en salud, ahorro y vivienda que el resto de los hogares."

⁴ Jesús A. Cervantes González y Rodolfo Ostolaza ¿Cuántas Personas Y Hogares Reciben Remesas En México? En: <https://www.cemla.org/foroderemesas/notas/2022-06-notas-de-remesas.pdf>

⁵ <https://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/slp/poblacion/hogares.aspx?tema=me&e=24>

⁶ Natalia Flores Garrido. Migración internacional y trabajo doméstico y de cuidados: algunas experiencias de mujeres de Tetlanohcan, México. En: Revista GénEros. No. 15. Universidad de Guadalajara.

Lo anterior se atribuye a la importancia que el ahorro reviste, debido a que los hogares que dependen de remesas, se pueden ver particularmente impactados por crisis económicas, que golpean directamente el mercado laboral en los que participan los migrantes en Estados Unidos, e incluso decisiones legislativas y políticas, como es el caso de las reformas recientes en materia migratoria, aprobadas en el estado norteamericano de Florida. Por otro lado, también hay que destacar que la educación y la salud no se entienden como inversiones productivas al interior de esas familias.⁷

Lo anterior se encuentra sustentado por varios estudios en diversas regiones de nuestro país, y se trata de un hecho que no debe ser subestimado, ya que uno de los elementos en el concepto de pobreza multidimensional es el nivel educativo, por lo que, para dejar de depender de las remesas, o que los miembros de las familias de los migrantes cuenten con mejores y más diversas oportunidades, es necesario invertir en educación, al igual que optimizar en lo general el manejo de las remesas.

Sin embargo, y en sentido opuesto a la tendencia señalada, un estudio reciente, publicado en el año 2021, analizó las redes de apoyo económico, conformadas en base a las remesas en el estado de Hidalgo, y encontró que en la actualidad también se está presentando un comportamiento alternativo entre las madres de familia que reciben remesas, ya que invierten estos ingresos en la educación de sus hijas, apoyándolas a cursar el nivel superior.⁸

La detección de este nuevo fenómeno apunta a la creación de nuevas oportunidades para las jóvenes, y eventualmente el fortalecimiento de su independencia económica, reduciendo las posibilidades de sufrir violencia económica, al igual que aumentar drásticamente las posibilidades de poner fin al ciclo de pobreza, a través del fortalecimiento de la economía familiar a mediano y largo plazo, en muchos casos.

CONCLUSIONES

Es por eso que no se debe de subestimar la educación financiera, como una herramienta de gran utilidad para mejorar la administración de los recursos, y con una perspectiva de largo plazo, ya que según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):

"La educación financiera permite que las personas adquieran conocimientos y habilidades básicas para administrar mejor sus recursos, incrementen y protejan su patrimonio con la ayuda del uso adecuado y responsable de los productos y servicios financieros."

⁷ Ana Melisa Pardo Montaña. Claudio Alberto Dávila Cervantes. Migración y desarrollo. Características de los hogares y uso de las remesas internas e internacionales en México. En:

<https://revistas.uniandes.edu.co/index.php/dys/article/view/6697/6909>

⁸ Rosa María Huerta Mata. Remesas y agencia económica de las universitarias en el Valle del Mezquital. Revista Migración Internacional Vol. 2. En:

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1665-89062021000100119&script=sci_arttext#aff1

Además de que se vuelve algo esencial, en el momento en que se tiene contacto con las instituciones bancarias:

*"La mayor complejidad para entender los productos y servicios financieros ha hecho prioritario desarrollar información amigable y sencilla que permita a las personas un mejor entendimiento y una mayor comparación entre instituciones."*⁹

Por ello se propone exhortar a la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a realizar una campaña de educación financiera orientada especialmente a las jefas de familia que reciben remesas en nuestra Entidad, con la finalidad de subrayar la importancia del ahorro, el uso correcto de los instrumentos financieros y la inversión en educación.

Para tal fin, no resulta necesario realizar grandes inversiones, ya que por ejemplo la citada CONDUSEF promueve diplomados y recursos de educación financiera, que son gratuitos y accesibles a distancia.

Por ello, vale la pena realizar esfuerzos para difundir y acercar estos recursos ya existentes a las mujeres jefas de familia que reciben remesas, fomentando la correcta administración, el conocimiento de los elementos necesarios para el uso de servicios financieros, y la importancia de invertir en educación, pensando en la estabilidad de la economía familiar en el largo y mediano plazo.

Con base en los motivos expuestos, presento a consideración de este honorable Pleno el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí, exhorta de manera institucional, a la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a realizar una campaña de educación financiera orientada a las jefas de familia que reciben remesas en nuestra entidad, utilizando medios electrónicos y recursos gubernamentales existentes, como aquellos elaborados por el gobierno federal, con la finalidad de subrayar la importancia del ahorro, el uso correcto de los instrumentos financieros y de la inversión en educación, como elementos capaces de fortalecer la economía familiar.

ATENTAMENTE

Emma Idalia Saldaña Guerrero
Diputada Local

⁹ <https://www.condusef.gob.mx/?p=contenido&idc=1042&idcat=1>